



REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

5^a REUNIÓN – 2^a SESIÓN ESPECIAL

16 DE ABRIL DE 2019

Presidencia de la señora vicepresidente de la Nación, licenciada
MARTA GABRIELA MICHETTI, y del señor presidente provisional del Honorable
Senado,
senador don **FEDERICO PINEDO**

Secretarios:

Señor don **JUAN P. TUNESSI** y señor don **HELIO REBOT**

Prosecretarios:

Señor don **MARIO DANIELE**, señor don **ERIC CALCAGNO Y MAILLMANN**
y señor don **ÁNGEL TORRES**



PRESENTES:

AGUILAR, Eduardo Alberto
 ALMIRÓN, Ana Claudia
 BASUALDO, Roberto Gustavo
 BLAS, Inés Imelda
 BOYADJIAN, Miriam Ruth
 BRAILLARD POCCARD, Néstor
 BRIZUELA y DORIA, Olga Inés
 BULLRICH, Esteban José
 CASERIO, Carlos Alberto
 CASTILLO, Oscar Aníbal
 CATALÁN MAGNI, Julio César
 CATALFAMO, María Eugenia
 CLOSS, Maurice Fabián
 COBOS, Julio César Cleto
 COSTA, Eduardo Raúl
 CREXELL, Carmen Lucila
 DURANGO, Norma Haydé
 ELÍAS de PEREZ, Silvia Beatriz
 ESPÍNOLA, Carlos Mauricio
 FERNÁNDEZ de KIRCHNER, Cristina Elisabet
 FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
 FIAD, Mario Raymundo
 FIORE VINUALES, María Cristina del Valle
 FUENTES, Marcelo Jorge
 GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
 GONZÁLEZ, Gladys Esther
 GONZÁLEZ, María Teresa Margarita
 GONZÁLEZ, Nancy Susana
 GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
 IANNI, Ana María
 ITÚRREZ de CAPPELLINI, Ada Rosa del Valle
 KUNATH, Sigrid Elisabeth
 LÓPEZ VALVERDE, Cristina del Carmen
 LOVERA, Daniel Aníbal
 MARINO, Juan Carlos
 MARTÍNEZ, Ernesto Félix
 MARTÍNEZ, Julio César
 MAYANS, José Miguel Ángel
 MENEM, Carlos Saúl
 MERA, Dalmacio Enrique
 MIRKIN, Beatriz Graciela

ODARDA, María Magdalena
 OJEDA, José Anatolio
 PAIS, Juan Mario
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
 PICHETTO, Miguel Ángel
 PILATTI VERGARA, María Inés
 PINEDO, Federico
 POGGI, Claudio Javier
 REUTEMANN, Carlos Alberto
 RODRÍGUEZ MACHADO, Laura
 ROMERO, Juan Carlos
 ROZAS, Ángel
 SACNUN, María de los Ángeles
 SCHIAVONI, Humberto Luis Arturo
 SNOPEK, Guillermo Eugenio Mario
 SOLANAS, Fernando Ezequiel
 SOLARI QUINTANA, Magdalena
 TAPIA, María Belén
 UÑAC, José Rubén
 URTUBEY, Rodolfo Julio
 VERASAY, Pamela Fernanda

AUSENTES:

ALPEROVICH, José Jorge
 DE ANGELL, Alfredo Luis
 GIACOPPO, Silvia del Rosario
 LUENZO, Alfredo Héctor
 MONTENEGRO, Gerardo Antenor
 PEROTTI, Omar Ángel
 PORCEL de RICCOBELLI, Blanca Felisa

AUSENTES, CON AVISO:

VARELA, Marta Lucía

LICENCIA, POR ENFERMEDAD:

PEREYRA, Guillermo Juan

LICENCIA, POR RAZONES PERSONALES:

RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo

SUMARIO

1. Izamiento de la **bandera nacional**. (Pág. 4.)
2. **Himno Nacional Argentino**. (Pág. 4.)
3. **Convocatoria a sesión especial**. (Pág. 4.)
4. **Homenaje al señor Alberto Cortez**. (Pág. 4.)
5. **Manifestaciones respecto de la integración de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación**. (Pág. 5.)
6. **Elección y juramento de vicepresidente 1º**. (Pág. 5.)
7. **Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Aguilar**. (S.-1.077/19.) (Pág. 5.)
8. **Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Mayans**. (S.-.078/19.) (Pág. 6.)
9. **Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Nancy S. González**. (S.-1.079/19.) (Pág. 8.)
10. **Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Fernández Sagasti**. (S.-1.080/19.) (Pág. 10.)
11. **Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Sacnun**. (S.-1.081/19.) (Pág. 12.)
12. **Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Fuentes**. (S.-1.082/19.) (Pág. 14.)
13. **Manifestaciones respecto de las cuestiones de privilegio**. (Pág. 16.)
14. **Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Brizuela y Doria**. (S.-1.085/19.) (Pág. 18.)

24. **Modificación al Régimen de Financiamiento de los Partidos Políticos.** (O.D. N° 41/19. Anexo y Anexo I.) (Pág. 35.)

–Puestos de pie, los presentes entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. (*Aplausos.*)

25. **Modificación de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia con las mujeres.** (O.D. N° 1.019/18 y O.D. N° 1.024/18.) (Pág. 79.)

Modificación de la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. (O.D. N° 1.019/18.)

Modificación de la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. (O.D. N° 1.024/18.)

26. Apéndice.

I. **Convocatoria a sesión especial.** (Pág. 88.)

II. **Actas de votación.** (Pág. 91.)

III. **Asuntos entrados.** (Pág. 99.)

IV. **Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 780.)

V. **Inserciones.** (Pág. 845.)

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13:42 del martes 16 de abril de 2019:

Sra. Presidente (Michetti). — La sesión especial está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidente (Michetti). — Invito al senador Closs a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

–Puestos de pie los presentes, el señor senador Maurice Closs procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

2

HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sra. Presidente (Michetti). — Continuamos de pie para entonar las estrofas del Himno Nacional.

Sra. Presidente (Michetti). — Muchísimas gracias.

3

CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Sra. Presidente (Michetti). — Se incorporarán al Diario de Sesiones las notas de varios señores senadores y señoras senadoras solicitando la convocatoria a esta sesión especial y el respectivo decreto dictado por esta Presidencia.¹

4

HOMENAJE AL SEÑOR ALBERTO CORTEZ

Sra. Presidente (Michetti). — Para un homenaje, tiene la palabra el senador Marino.

Sr. Marino. — Es para hacer un homenaje a quien en vida fuera Alberto Cortez, recientemente fallecido. Un hombre de mi provincia, de Rancul, un pueblo muy chico de la provincia de La Pampa..., bueno, como los pueblos de La Pampa.

Hablar de Alberto Cortez es hablar un poco de la provincia, es hablar de La Pampa, es hablar de los valores, es hablar de nuestras tradiciones.

Fue un hombre que se crió en un hogar muy humilde. Su padre tenía lo que se conoce como “boliche de campo” o “boliche de pueblo”, donde se juega a las cartas, se toma café. En ese momento la “paisanada” —como se le decía— llegaba al pueblo, iba a hacer las compras al lugar de ramos generales y después pasaba por el boliche para jugar al truco y volvía al campo.

Alberto Cortez desde muy joven estuvo en permanente contacto con la sociedad de su pueblo. Después, de muy chico se va. Tuvo la suerte de viajar a Europa, y lógicamente ahí empieza su seudónimo Alberto Cortez. Y fue un hombre que se hizo famoso justamente narrando y cantando lo que le pasó durante toda su vida, por eso “Cuando un amigo se va” o el homenaje al perro que no era de nadie y era de todos.

Con el senador De Angeli hace unos años estuvimos a punto de entregarle la distinción “Sarmiento”; no lo pudimos hacer porque en

1. Ver el Apéndice.

24

**MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN
DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS (O.D. 41/19, Anexo y Anexo I)**

Sra. Presidente (Michetti). – Corresponde ahora el tratamiento del orden del día que por Secretaría se anunciará.

Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día N° 41, Anexo y Anexo I, impreso el día 28 de marzo de 2019. Comisión de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda. Dictamen en los proyectos de ley de varios señores senadores por los que se modifica el Régimen de Financiamiento de los Partidos Políticos. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (S.-3.698, 3.727, 3.730 y 4.382/18.)

Sra. Presidente (Michetti). – Ahora, corresponde que por Secretaría se confeccione la lista de oradores para su posterior lectura y aprobación, la cual se votará cuando finalice la exposición de los miembros informantes; y el miembro informante es el senador Mera.

Sr. Mera. – Gracias, presidenta.

Tenemos frente a nuestras bancas el Orden del Día N° 41, orden del día que es sucesor de un orden del día que logramos en noviembre del año pasado, después de que nos reunimos tres comisiones: la Comisión de Asuntos Penales, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Trabajamos durante un tiempo largo. Recibimos inquietudes de distintos actores de nuestra comunidad: organizaciones civiles, como CIPPEC, como Poder Ciudadano, como RAP, como Transparencia Internacional; investigadores del Conicet; académicos universitarios. La justicia electoral también fue parte de las consultas. Vinieron sus camaristas; vinieron sus secretarios. Y, por cierto, tuvimos a la vista distintos proyectos: uno del Poder Ejecutivo, un proyecto importante; y proyectos de distintos senadores de distintas bancadas y de distintas regiones.

Evidentemente, presidenta, era una mirada común la necesidad de reformar la ley de financiamiento de partidos políticos. Cuando uno repasa los senadores y diputados que tenían proyectos presentados, son de los más diversos. Por la dinámica particular que tuvo este orden del día que logramos el año pasado hemos

trabajado con muchos de esos diputados que habían presentado inquietudes en este sentido.

¿Por qué se dio la dinámica? En noviembre, cuando teníamos...

Sra. Presidente (Michetti). – Perdón.

Senadora Fernández Sagasti, por favor, un poquito más bajo, si quiere.

Adelante.

Sr. Mera. – En noviembre, cuando teníamos presentado el orden del día para tratarlo y después de un trabajo importante de los asesores de la comisión, nos encontramos con el fin de las sesiones ordinarias y una supuesta convocatoria, que fue pública y estuvo en todos los medios, de que en extraordinarias el Poder Ejecutivo nacional iba a convocarnos para tratar dos proyectos: uno era el de violencia en el fútbol, conocido como la “ley de barras”; y otro tenía que ver con el tema de financiamiento de los partidos políticos.

A partir de tomar conocimiento de esto, por iniciativa de algunos senadores –entre ellos el senador Pichetto, que es autor de uno de los proyectos que hoy estamos tratando–, tuvimos una gimnasia de llegar a un acuerdo con los diputados que también tenían proyectos presentados en este sentido para, si se convocaba a extraordinarias, por ahí el tiempo en que se convoca no siempre resiste la dinámica del sistema de ambas Cámaras, como tenemos en nuestro sistema parlamentario.

Nos dimos un trabajo de llegar a esos consensos. Debo decir que muchas de las propuestas de los diputados han sido de recibo por parte de los senadores y que creemos que han mejorado lo que teníamos nosotros como orden del día.

Particularmente, una vez que llegamos a este consenso y estuvimos por abordar su tratamiento, tuvimos tres propuestas muy concretas, posteriores a haber llegado a ese consenso del orden del día del año anterior, a las que me referiré oportunamente.

¿En qué hemos consensuado entre diputados y senadores, que es el Orden del Día N° 41, que hoy tenemos a la vista y que ha logrado un dictamen de mayoría y uno de minoría? Bueno: en muchas cosas, presidenta. La primera de ellas es que entendíamos que era necesario blanquear el aporte privado a las campañas políticas, algo que no es novedoso en nuestra legislación. No

estamos hablando de algo que enfrente un problema filosófico para la legislación argentina esta incorporación. Lo hemos tenido hasta el año 2008 y en el año 2009 lo hemos cambiado. Así que todos, seguramente, participamos en campañas políticas con esta legislación que hoy volvemos a abordar, que es la posibilidad de que los privados aporten.

¿Y en qué contexto? En un contexto donde hemos planteado límites—en este caso es el 2 por ciento— para que ninguna fuerza política, para que ningún frente, pueda ser cooptado o necesite imperiosamente el aporte de algún privado. Ese tope que hemos logrado en consenso con Diputados suponemos que le da libertad absoluta y suficiente a cualquier fuerza política para poder prescindir de dicho aporte.

También hemos incorporado el aporte en especies, que no estaba contemplado en la legislación anterior; y particularmente la senadora Brizuela y Doria, que ha sido una trabajadora incansable y que tenía un proyecto muy importante en este sentido, ha planteado esta incorporación que ha sido de recibo tanto de los senadores como de los diputados; como también un proceso de fiscalización y control patrimonial, que es mucho más riguroso, que es mucho más específico y que le da mucha más transparencia al nuevo sistema de financiamiento que proponemos en este orden del día.

También hemos reformado el sistema de publicidad audiovisual. Este es uno de los puntos que vino posterior al consenso que habíamos logrado y que nos llevó a firmar un nuevo orden del día. Las organizaciones que nuclea ADEPA pidieron reuniones y se entrevistaron con muchos de nosotros, donde se plantearon cuestiones muy razonables: primero, que algunos de ellos estaban obligados a una publicidad gratuita y otros no; segundo, que hay un incremento en todas las campañas de gastos en publicidad digital y que todos tenemos el tema en el radar, pero es de difícil regulación. Es difícil; no nos es fácil encontrar cómo poder regular y seguir cómo son los aportes en la publicidad digital; con lo cual, en un sistema que va tendiendo desde el trabajo formal y tradicional que conocemos hasta el modo de hacer periodismo, hasta la forma de publicitar, a plataformas y sistemas digitales, tenían un planteo muy lógico en defensa de nuestros trabajadores de la prensa y en

defensa de los contenidos que se publicitan. O sea, poder plantearlo con una regulación mayor, que ha sido también de recibo del plenario de las comisiones y hoy lo proponemos en este orden del día.

Sra. Presidente (Michetti). — Senador Mera: le pide una interrupción el senador Pinedo.

Sr. Mera. — Sí.

Sra. Presidente (Michetti). — Senador Pinedo.

Sr. Pinedo. — Presidenta: con relación al tema que está mencionando el miembro informante de la gratuidad de la cesión de espacios que tenían determinados medios tradicionales de comunicación—que tienen—, quería dejar constancia de que se trata de los que utilizan espectro radioeléctrico, que es propiedad del Estado nacional. En consecuencia, al momento de asignar estas frecuencias a distintos medios de comunicación, se les imponen ciertas obligaciones de interés público; y una de las cuales era esta.

Lo que se está haciendo, como dijo el señor senador Mera, es disminuyendo la gratuidad... No la gratuidad: la onerosidad; en realidad, la obligación de que sea gratuito. Y este es un cambio positivo que se hace para el futuro pero no para el pasado; y eso es lo que quería dejar en claro; gracias, senador.

Sra. Presidente (Michetti). — Adelante, senador Mera.

Sr. Mera. — Gracias, senador Pinedo. Lo ha explicado muy bien el senador.

Nosotros sostenemos hasta este año que ese concepto es gratuito por las razones que dio el senador Pinedo; y sí proponemos la posibilidad para el año próximo, en virtud de esta desventaja de competitividad que tienen los medios de información, la posibilidad de que compensen con impuestos de orden nacional. Esto también ha recibido el apoyo del plenario de las comisiones.

También hemos incorporado un capítulo que refiere a las encuestas y a los sondeos de opinión, que trabajó profusamente... Ahí va la senadora Fiore, que ha sido una promotora importante de incorporar y de regular la acción de estas empresas y de estas compañías.

Respecto del financiamiento específico, lo que más nos motivó y la importancia del texto, como decía, no es el hecho de que puedan

aportar los privados que, de hecho, al día de hoy, en lo que es la vida institucional partidaria y en la formación lo pueden hacer. Era volver a reconocerles ese derecho respecto de las campañas políticas. Tal vez ese no sea el aporte más importante que está haciendo este texto sino la idea de dar transparencia en cada uno de los procesos; de dar trazabilidad; de que un peso que pone un particular sepamos quién lo puso —no se permiten aportes anónimos—, cuándo lo puso, dónde lo puso, y el partido o el frente, con un informe que prevé el texto, tendrá que informar a la justicia electoral cuándo, cómo y dónde lo gastó. También con una plataforma *online*, como para ir haciendo un control previo, donde se permite a los partidos— cosa que antes no existía en el texto anterior— la reversión. Esto es, cuando alguno de los sujetos aportantes está dentro las prohibiciones que sostiene el proyecto que estamos presentando, tiene la obligación la fuerza política de revertir ese dinero y de no utilizarlo.

Otro punto que nos llevó una discusión interesantísima y que —como decía— lo tenemos todos muy presentes en el radar pero es de difícil regulación, es el tema de las redes sociales.

Utilizamos un tema que va ganando terreno, que va ganando en la democratización de las redes, y que tiene su lado positivo; pero también tiene claramente su anonimato como moneda negativa, como cara negativa. No es difícil para nosotros regularlo: es difícil en el mundo entero regularlo.

En aquellos países en donde tal vez la democracia esté más consolidada, donde sus instituciones tengan mayor fortaleza... Lo hemos visto en Estados Unidos: el “señor Facebook” llegó convocado por el Congreso de la Nación y se fue como Pancho por su casa. No le preocupó mucho las preguntas inquisitivas casi que le hicieron los senadores sobre la utilización de datos; un tema que es muy delicado y que no lo pudieron regular por la propia lógica extra-territorial que tiene el funcionamiento de las redes. Es un tema que no nos es fácil, pero que hemos intentado acotarlo con la exigencia de que la pauta en redes tenga un destino en los contenidos, tanto nacionales como locales.

Después tuvimos una incorporación, a posterior de que logramos el dictamen, de la Banca de la Mujer. La Banca de la Mujer, por unanimidad,

nos acercó un proyecto que también lo había planteado IDEMOE cuando vino a exponer —una de las asociaciones que vino a exponer— acerca de la necesidad de garantizar un cupo en la capacitación para las mujeres. Esto también fue de recibo del plenario, hay unanimidad en ese sentido y hoy estamos garantizando un 30 por ciento de lo que corresponde en la vida de los partidos para capacitación para el sector de las mujeres, como estaba antes para el sector de los jóvenes.

El tercer punto que vino el último día que estábamos en sesión para tratar el orden del día y ya fue una reforma que no estaba en el radar de ninguno de nosotros, fue el planteo del senador Pereyra. El senador Pereyra, ese día que sesionamos a la mañana, vino a plantear la posibilidad de que los sindicatos aporten. En la ley vigente no pueden aportar. Nosotros desde el bloque hicimos otras consultas; y, a partir de este planteo concreto que hizo el senador Pereyra en representación del movimiento obrero y de algunos sindicatos, entendemos que hay que habilitarles esa posibilidad.

En este punto, la única discrepancia en el dictamen de mayoría y en el dictamen de minoría, sacando un dictamen de minoría que presentó la senadora Odarda que va en sentido absolutamente contrario de lo que estamos aprobando, es el siguiente. Entendemos que hay una posición del bloque del oficialismo negándose a esta posibilidad de los sindicatos; y nos gustaría fundamentar por qué entendemos que deben aportar y que podamos repensar ese dictamen de minoría que le cierra las puertas a los sindicatos.

Lo primero es que en las legislaciones comparadas, casi en su totalidad, donde pueden aportar las empresas pueden aportar los sindicatos. Es difícil encontrar en el mundo occidental, donde en muchas legislaciones no pueden aportar las empresas privadas, que no vayan en consonancia unos con otros.

Evidentemente, los distintos parlamentos han protegido la igualdad en la posibilidad de la participación: donde le dan a uno, le dan al otro; y, donde no le dan al sindicato, no le dan a la empresa.

Justamente, amén de la trazabilidad, del no al anonimato, de incluir algunas personas en el carácter de “prohibitiva” para que puedan aportar

—como son los permisionarios, los contratistas de obras públicas—, lo que estamos planteando es que, si le vamos a dar a las empresas la posibilidad de que aporten, es muy difícil impedir darles esa posibilidad a los trabajadores. Hay una situación de desigualdad a priori. Y, si nos ponemos a hacer un control...

A partir del año 94, donde nosotros incorporamos con rango constitucional muchos de los tratados internacionales, nos ponemos a hacer una mínima y básica revisión de la convencionalidad o de la constitucionalidad de la posibilidad de que aporten los sindicatos; la verdad, presidenta, no encontramos ninguna norma que nos permita prohibirles a los sindicatos participar del proceso de las campañas electorales: todo lo contrario.

Encontramos normas específicas que los habilitan, que les permiten poder hacer los aportes: primero, la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, con la posibilidad de la libre asociación, la libertad sindical, la defensa de los derechos de los trabajadores; después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde todas las personas tienen derecho a sindicarse, donde nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

A veces pareciera que hay sobrevolando un prejuicio respecto de que a los sindicatos se los obliga a sindicalizarse; que más allá de la apreciación que podamos tener cada uno de nosotros sobre tal o cual sindicalista, ese señor sindicalista tiene una decisión personal sobre hacer un aporte. No; los sindicatos tienen una ley, que también se la hemos dado nosotros, que es la ley de organizaciones sindicales, donde les ponemos los parámetros a las decisiones que puedan tomar, y en virtud de los cuales están obligados a tener un estatuto con cuerpos orgánicos, con asambleas, con contralores... Cuando toman las decisiones, tienen que pasarlas por esos cuerpos orgánicos.

También la Organización Internacional del Trabajo no solo los habilita, sino que además les impone la restricción a los poderes públicos de ir más allá de las limitaciones que el propio estatuto pueda tener hacia los sindicatos respecto de las decisiones propias y de su vida interna.

Entendemos que es un tema —y por eso fue la postergación de la sesión y de la discusión— que tiene sus ribetes polémicos. Pero la verdad

es que sacando la idea previa que pueda tener cualquiera sobre los sindicatos, o sobre algún sindicato en particular, no hay elementos ni en el derecho internacional, ni en la Constitución ni en nuestra legislación vigente que nos permitan prohibir a los sindicatos. Y, seguramente, podría ser tachada esa prohibición de inconstitucional en cualquier juzgado, a partir de la decisión —estatutaria por cierto, siguiendo la ley interna— de cada uno de los sindicatos que tome esta decisión.

La verdad es que nos gustaría que el bloque del oficialismo revea esta postura porque claramente deja una cancha inclinada, que es otra de las cosas que hemos combatido en esta ley y que fue el propósito de todos. ¿No podría un sindicato, ante una oferta electoral de distintos partidos procurando cercenar derechos o acotar derechos de los trabajadores, hacer un aporte? Hay democracias que todos respetamos mucho, como la de Alemania por ejemplo, como la de Australia, que es un país que tantas veces usamos como modelo, donde los sindicatos sí pueden hacer sus aportes.

Creo, presidenta, que el texto que hemos logrado es importante, sacando esta diferencia que espero que la podamos repensar. Creo que es un texto que mejora, que da trazabilidad, que da más control. Hemos aumentado, a pedido de la Cámara Electoral, los auditores; los hemos duplicado. Hemos hecho una tarea de consenso significativa, siempre en la búsqueda y en el entendimiento de que la ley y nuestra Constitución, fundamentalmente, plantean la necesidad de una mayoría especial, y atendiendo y escuchando hasta la última opinión de cualquiera de los legisladores de este Congreso, sean diputados o senadores. Una vez que nosotros abrimos el juego, el año pasado, ante la eventualidad de la extraordinaria, hemos escuchado con las tres comisiones a todos, presidenta. Así que creo que tenemos un texto positivo.

Por último, quiero poner en valor el contexto, porque se ha dicho mucho sobre si la ley es menor, no es menor... Creo que, respecto del contexto nacional —lo he planteado al inicio de mi alocución—, organizaciones civiles de muchísimo prestigio y de muchísimo trabajo en la temática han venido acá a plantear sus opiniones diversas, pero todas en el sentido de la necesidad de reformar la ley. Ha venido una

asociación de empresarios, IDEA, también a decir en el Congreso que necesitamos reformar la ley. Han venido los que operan con la ley, que es la justicia electoral, a plantearnos también la necesidad. Y tenemos muchísimos proyectos de los señores legisladores, senadores y diputados, que también plantean la necesidad de la reforma.

Está claro que no es para la Argentina —y hay muchos editoriales— un problema de la política. Evidentemente, para que hayan venido todos esos actores excede a un problema de la política. Y tampoco es un problema de la Argentina. Cuando uno repasa algunas noticias de cualquier democracia liberal occidental encuentra estos debates, procurando darles la profundidad que tienen. Además, toda la incertidumbre que genera hoy la inteligencia artificial, y una realidad que estamos viviendo y que nos conmueve a todos. Todos vamos viendo el impacto que tiene en la toma de decisión de las cosas más simples de nuestra vida. A partir de los datos a los que acceden estas plataformas, hay un cercenamiento clarísimo de la libertad.

Esta es una ley que es mucho más profunda que quién pone la plata y quién no pone la plata. Es una ley más profunda: de dónde viene la plata; ya en sí mismo es un hecho. Y también hemos acordado que les debemos cerrar definitivamente las puertas al narcotráfico, a la corrupción, al narcoterrorismo. Cuando no sabemos de dónde viene la plata, cuando no le ponemos luz al manejo de la plata, la democracia se resiente, porque siempre hay plata para las elecciones, presidenta. No es que si nosotros, mañana, decimos “prohibimos el uso de dinero”, las campañas no se van a financiar. Se va a sacar plata: o plata negra o plata oscura. Pero lo que necesitamos darle es un sentido de transparencia para cerrarles la puerta a los peores de los males, como son el narcotráfico y como son la corrupción y el narcoterrorismo.

Esto es lo que se está dando en todas las democracias occidentales. En los Estados Unidos, un país que todos tenemos como una nación modelo respecto de su democracia y que tiene un sistema constitucional muy parecido al nuestro —nosotros hemos tomado muchas cosas de ellos, y todos sabemos del poder que tienen los Estados Unidos—, hoy muchos de los editoriales de ese país hablan de cómo se involucró Putin —el enemigo histórico de los Estados Unidos,

el adversario histórico, la contrabalanza de esa democracia occidental, de ese país de la democracia occidental como son los Estados Unidos—, de si Putin terminó interfiriendo y ayudando para que el actual presidente de los Estados Unidos sea presidente. Esto se debate en los Estados Unidos. No están mirando para otro lado en los Estados Unidos, están abordando la discusión que tienen que abordar, porque entienden que no es un problema de dinero. Sería muy fácil si fuera un problema solamente de dinero.

Europa: Europa multará a los partidos políticos que violen la protección de datos para influir en la campaña de las elecciones europeas. Esto se está discutiendo hoy en el Parlamento Europeo.

Se habló hoy, en las tantas cuestiones de privilegio que se plantearon, del tema de las *fake news*. Para nosotros, poder visibilizar dónde se gastan los recursos es muy importante, y que lo hagan editores responsables es muy importante. Nosotros, acá, presentamos un proyecto. Lo presentó el senador Pichetto porque usurparon su identidad y le usaron un Twitter a su nombre. Nunca vino el señor Twitter, el señor Facebook; son de una jurisdicción que no es alcanzada por nuestras instituciones para poder regularla. No le alcanza al poder de los Estados Unidos para regularla.

Entonces, tenemos que estar atentos a estas cuestiones, porque si todas las democracias occidentales lo están discutiendo, es porque ven impactos concretos. Pasó en el Brexit, que es todo un tema en la Comunidad Económica Europea; pasó en cada una de las elecciones de las democracias occidentales del último tiempo. Y va mutando, porque la tecnología, aparte, va mucho más rápido que nosotros. Desde que nosotros iniciamos esta sesión, pasamos por todas las cuestiones de privilegio, pasamos por todas las mociones de preferencia y llegamos a este debate, algún joven brillante inventó una aplicación que puede ser usada en cada una de nuestras terminales —que es un simple celular— y que nos puede incidir y definir en cada una de nuestras decisiones.

Perú incorporó, a fines del año pasado, el tema del aporte en su Constitución. Por otra parte, no hay ningún choque con nuestro bloque constitucional, porque también en la reforma del 94, en el artículo 37, planteamos que el Estado

contribuye a la vida de los partidos políticos, lo cual permite también que sus contribuciones puedan venir de manos de otros sectores que no sean necesariamente del Estado.

En México debe revisarse el financiamiento público a los partidos; también tiene problemas el financiamiento público. En Uruguay, el presidente de la Cámara de Diputados está dispuesto a negociar una ley de financiamiento que no sea un engaño pichanga. Ya nos pasó a nosotros un engaño pichanga y después ningún partido pudo cerrar las cuentas. ¿Nos vamos a seguir mintiendo? ¿Vamos a seguir haciendo planteos que por índole ideológico nos lleven a una ley impracticable?

¿Qué es el dinero oscuro? La sigilosa forma de corrupción que salpica la política del país más poderoso del mundo: los Estados Unidos. Esto es lo que se está discutiendo en Estados Unidos.

¿Qué propone Macron en su carta a los europeos? Macron, hace poco tiempo, les planteó a los europeos, con todos los problemas severos que tiene también el continente europeo, seis puntos centrales para dar vuelta la página de estas tensiones interminables que están atravesando. ¿Sabe cuál es el cuarto punto presidente? La creación de una agencia europea de protección de las democracias. Y ahí, en ese punto, desarrolla prohibiciones respecto del financiamiento político y reformas a la ley de financiamiento político.

Creo que no estamos hablando de un tema menor, creo que no estamos hablando de un tema de dinero, creo que estamos hablando de un tema que menoscaba el más profundo sentido de la democracia que es el de poder elegir, el de poder hacerlo con libertad; el de que no haya una inteligencia artificial que predetermine nuestros gustos.

Hay otra nota por ahí que habla de que con la tecnología se ganan elecciones porque la tecnología jaquea cerebros. Esas son las discusiones que se está dando el mundo respecto de la sanidad de su sistema democrático.

Desde el bloque, y agradeciendo a todos los miembros que han estado prestos para colaborar con las comisiones que teníamos a cargo con el senador Guastavino y quien les habla... Todos nos han traído su aporte, su opinión, su mejora al

proyecto. Hemos encontrado uno por consenso; hemos encontrado uno que creemos que refleja la idea mayoritaria.

Volvemos a pedirle al bloque oficialista que se dé un minuto para repensar la prohibición a los trabajadores que puedan participar. Si vamos a plantear que no haya “cancha inclinada”, que no haya ni entre los partidos políticos ni entre los distintos actores y sectores de la sociedad. Espero que tengamos media sanción hoy y que tenga el tiempo suficiente Diputados para que en la próxima elección tengamos una ley que otorgue más transparencia, más control y mejor gasto de la política. Gracias presidente.

Sra. Presidente (Michetti). – Gracias senador.

Yo voy a leer... Si bien no vamos a poder votar la finalización de...

¿Quieren que llamemos para eso? Me parece que no hace falta.

Varios señores senadores. – No.

Sra. Presidente (Michetti). – Digo quienes están en la lista por las dudas de que falte alguno de ustedes: Odarda, Brizuela y Doria, Guastavino, Fernández Sagasti, López Valverde, Fiore Viñuales, Cobos, Mayans, Braillard Poccarr, Caserio, Sacnun, Pais, Castillo y Mirkin. Y luego los cierres.

Sr. Martínez, Ernesto. – Eventualmente estaba anotado, pero voy a renunciar.

Sra. Presidente (Michetti). – Gracias senador.

Vamos, entonces, con la palabra de la senadora Odarda.

Sra. Odarda. – Gracias, señora presidenta...

Sra. Presidente (Michetti). – Perdón, si bien no hubo labor parlamentaria, porque es una sesión especial, lo que sí pido es que, como son varios y tenemos otros temas para tratar también –si les parece–, se redondee entre siete y diez minutos para cada senador. Gracias.

Sra. Odarda. – Señora presidenta: yo presenté un dictamen en minoría.

Sra. Presidente (Michetti). – En esos casos tiene más, obviamente.

Sra. Odarda. – Bien, perfecto.

Gracias, señora presidenta. Yo entiendo que este es un debate trascendental para la democracia; no es un debate más, no es una ley más

la que vamos a tratar hoy. Quizás por eso tuvo tantas idas y vueltas entre una Cámara y la otra; se iba a presentar en Diputados y al final no se presentó, se presentó por Senadores. Porque este proyecto de ley tiene una significación que se relaciona con la soberanía del país. Y por eso me parece sumamente necesario que lo enfoquemos en un debate filosófico, más allá de temas en los que podemos estar a favor como el de la bancarización, como las propuestas, que seguramente son correctas, de distintos senadores. Pero acá estamos hablando, señora presidente, de la privatización de la política. ¡De la privatización de la política! Nosotros siempre repetimos una frase que dice: “Dime quién te financia –en política– y te diré para quién gobiernas”. El financiamiento no es un tema menor.

Señora presidenta: desde ya le digo que nosotros no vamos a ser cómplices de la privatización de la política porque a la democracia la debe financiar el pueblo, no las empresas. Cuando ya le abrimos la puerta a las empresas, ya le estamos abriendo la puerta al poder económico para que se meta en la soberanía de un país y eso es muy peligroso. Porque hoy hablan del dos por ciento; se olvidan decir que es dos por ciento por cada empresa. O sea que el ciento por ciento del financiamiento de una campaña política de un partido puede provenir de un holding de empresas, por ejemplo. Porque todos sabemos que hay *holdings*; un señor como Marcelo Mindlin tiene varias empresas y puede aportar el dos por ciento, el dos por ciento y el dos por ciento por cada una de esas empresas.

Imagínense qué va a hacer aquel legislador –representante institucional electo por el pueblo– si lo financió, por ejemplo, la Barrick Gold o lo financió Monsanto, Bayer o JP Morgan. ¡Si esas empresas tienen fines de lucro! Ellos no van a aportar a un sistema de campañas políticas por puro amor a la democracia, porque la esencia de la empresa –la esencia– es el fin de lucro. Entonces, ese señor que aceptó financiamiento empresario de tal o cual empresa se va a ver en la disyuntiva de trabajar por el interés general o de trabajar por el interés de la empresa: de JP Morgan, de los bancos, de Monsanto, de Bayer, de la Barrick o de cualquier otra. Por eso digo que es muy peligroso.

¿Qué es lo que está rompiendo este proyecto de ley señora presidente? Y lo digo con el mayor de los respetos. Está rompiendo dos principios fundamentales: el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque cuando se sancionaron las PASO –las primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias– justamente se tendió a ir hacia un sistema que garantice la igualdad de los partidos políticos al momento de la competencia. Todos sabemos que hay partidos que tienen grandes estructuras económicas y hay otros que no tienen nada, nada, que tienen que sacar de su bolsillo para poder los afiliados, los candidatos, mantener la campaña, con el costo real que insume, que significa.

Entonces, en aquellas PASO que seguramente muchos de los senadores que hoy están aquí votaron y defendieron, se iba hacia ese sistema de mayor equidad entre los partidos políticos, los que tenían más estructura y los que tenían menos. Por ejemplo, en los espacios de lo que es la propaganda audiovisual, donde hoy todos los partidos, con mayor o menor proporcionalidad de acuerdo a los votos que obtuvieron en la elección nacional pasada, van a tener un espacio por sorteo para que puedan expresar sus propuestas, sus ideas. Y eso es la democracia.

Este proyecto de ley va a mermar esa igualdad. Y también rompe otro principio de la democracia –quizás el más importante–, que es el de la soberanía política. ¿En dónde está la soberanía política en una democracia? En el pueblo. Si la soberanía política está en el pueblo, es el pueblo, a través de sus representantes, tal como establece nuestra Constitución, el que va a decidir, por ejemplo, si vamos a tener la asignación universal por hijo, si la vamos a aumentar, o si vamos a tener un sistema previsional con mayores derechos para nuestros jubilados. Es el pueblo, somos nosotros. De ninguna manera podemos permitir que quienes tomen esas decisiones sean las grandes empresas.

Cuando recién hacía su alocución el miembro informante, a quien respeto mucho, él hablaba de Estados Unidos. El espejo es Estados Unidos. El sistema es que tenemos que mirar allá, a Estados Unidos. Genial Estados Unidos en la democracia. Bueno, no comparto en absoluto esa idea.

También hablaba de Europa. Yo le hablo de países latinoamericanos, de nuestros hermanos

latinoamericanos como Brasil, Uruguay y Chile, donde justamente se ha ido en sentido contrario. En el caso de Brasil, por ejemplo, por la causa “Lava Jato” el Tribunal Supremo ordenó o estableció la inconstitucionalidad del aporte empresario. Un escándalo que nos golpea a toda latinoamérica, inclusive a la Argentina.

Nosotros prohibimos el aporte empresario. Quizás algunos de los senadores que votaron el porqué de esa prohibición años atrás nos pueden explicar qué es lo que cambió, por qué ahora lo tenemos que abrir.

¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Son muy caras las campañas? Claro que lo son. Ahora, una cosa es que sean muy caras las campañas y otra es que permitamos a los bancos venir a financiar y a decidir. Porque –repito– no tienen fines benéficos las grandes empresas, vienen a buscar algo a cambio.

También tenemos que hablar de la colisión de derechos, porque acá no hay ningún tipo de freno o de requisito, ya que hasta le estaban buscando la vuelta para poner que esa empresa que va a poner plata después seguramente va a querer sacar su rédito. ¿Y de quién va a sacarlo? ¿De mi patrimonio o del suyo? No, esa empresa privada va a querer sacar el rédito del país, de la soberanía argentina.

Por eso digo que es un tema filosófico.

Entiendo que podemos discutir todo lo demás, los otros temas y me parecen bárbaros muchos de ellos como la bancarización, pero no es el elemento principal. La bancarización de los aportes de campaña es algo lógico que debe darse, pero no puede servir como una cortina de humo para el verdadero problema acá que es si abrimos la puerta al aporte empresario o no. Porque no hablamos de aporte nacional, hablamos de cualquier aporte, o sea que mañana viene cualquiera, un Joe Lewis, y dice: acá pongo plata y este señor después va a tener que responder a mis deseos e intereses.

¿Usted recuerda la denuncia que hizo el periodista Alconada Mon? La tengo aquí. Dice: Escándalo. Confirman a la justicia que Macri pidió el uno por ciento de su patrimonio a empresarios para ser presidente.

Bueno, es esto lo que se quiere blanquear, lamentablemente, con la denuncia de los aportantes truchos.

Según este conocido y reconocido periodista del diario *La Nación*, se le habría pedido un uno por ciento del patrimonio a muchos empresarios y después el presidente habría prometido multiplicar esa ganancia con creces.

Volvió a ratificar esa denuncia en la justicia. Vamos a esperar a ver cuál es el veredicto. ¿Qué es lo que se quiere blanquear? Porque hubo muchos funcionarios que seguramente fueron aportantes en negro y ahora están cobrando –por supuesto– los servicios prestados. Y seguramente son estas grandes empresas las ganadoras del modelo, como las mineras y las energéticas, por ejemplo. O los bancos directamente. Fueron los grandes ganadores del sistema.

Decíamos recién quiénes ganaron. Ya todos sabemos quiénes son los ganadores. Eso sí, ¿qué nos dejaron? Nos dejaron 191.000 despidos en la Argentina en pocos años. Un 15,7 por ciento bajó el comercio minorista; un 4,6, el consumo; un 14,7, la industria; las pymes, destruidas; uno de cada dos chicos son pobres en la Argentina, o sea que hay un 50 por ciento de pibes bajo la línea de la pobreza.

Eso es lo que nos dejó este sistema de transferencia de recursos a los ganadores, a las empresas que seguramente en negro pusieron plata.

El concepto de empresa, señora presidenta: la empresa no es un ciudadano, no puede estar dentro de lo que es un sistema democrático. Es una ficción jurídica que tiene, como decíamos recién, un fin de lucro. Por lo tanto, este proyecto como mínimo es inconstitucional porque viola el artículo 37 de la Constitución Nacional que establece quiénes son los que pueden ejercer derechos políticos. Las empresas no pueden ejercer derechos políticos. Porque la esencia de la democracia justamente es poner límites, establecer un equilibrio del poder económico sobre el político.

Por eso –voy a ir finalizando–, ¿quién financia la democracia? La tiene que financiar el pueblo. Es la única forma de tener un país soberano e independiente. No cometamos ese error de abrir la puerta a las empresas.

Como conclusión puedo decir que de ninguna manera vamos a legalizar, tanto el senador Solanas como yo, la cooptación del poder económico al poder político.

Insisto: no podemos volver para atrás del sistema de las PASO. Tenemos que ir hacia un financiamiento meramente público para realmente ser un país soberano.

Y voy a terminar con las palabras del doctor Alfonsín, quien decía que la soberanía del pueblo es la única fuente de legitimidad del poder político.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra la senadora Inés Brizuela y Doria.

Sra. Brizuela y Doria. – Señora presidenta: la verdad, no puedo creer que ya estemos por fin debatiendo este tema tan importante después de tantos meses de trabajo. Hemos trabajado muchísimo y discutido. Hemos debatido y escuchado para lograr consensos básicos, consensos que nos permitan avanzar en mejorar el marco legal existente, el cual, claramente, hasta ahora no ha sido suficiente, señora presidenta.

Es sabido que la democracia no tiene precio –algo ya se dijo acá–, pero tiene un costo, y ese es el costo del financiamiento de los partidos políticos. Por lo tanto, hay una necesidad imperiosa, urgente, de fortalecer los sistemas de control del financiamiento para avanzar en calidad democrática, para fortalecer, justamente, nuestro sistema y evitar que el dinero controle la política.

Como también se ha dicho acá, nuestra democracia es democracia de partidos. El artículo 38 de la Constitución Nacional nos marca una definición muy fuerte para todo el sistema; y son los partidos políticos las instituciones fundamentales que tienen, entre otras funciones, la finalidad y el monopolio de la oferta electoral. Por eso, la cuestión de cómo los partidos financian tanto su actividad normal y habitual como las campañas electorales es una cuestión pública por excelencia, no es una cuestión privada, propia de los partidos.

Como dijimos, es fundamental el dinero para poder financiar el funcionamiento de la actividad normal y del proceso electoral; y el control y su fortalecimiento es necesario para reforzar la calidad democrática.

Yo acá quiero hacer un pequeño apartado porque, por ahí, escuchábamos algunas críticas que nos hacían, de que “bueno, se ocupan de debatir esto que sólo les interesa a ellos”. Y la

verdad es que debatir, replantear y mejorar el sistema de financiamiento de la política es algo que le atañe a la sociedad en su conjunto porque se trata, justamente, del sistema propiamente dicho, del sistema democrático.

Por eso tiene que intervenir el Estado activamente y es fundamental avanzar en el origen y en el destino de los fondos de la política, porque se trata ni más ni menos que de la integridad electoral, ni más ni menos que del voto informado, de que los ciudadanos puedan saber quién financia a cada candidato y qué esperar en consecuencia después. También el Estado tiene la obligación, por mandato constitucional, de intervenir para generar las condiciones necesarias que aseguren un acceso más igualitario al financiamiento, porque el acceso desigual al financiamiento, a fuentes de financiamiento contribuye a ese desequilibrio en el campo del juego político y afecta profundamente la oferta electoral; y una democracia sin oferta electoral suficiente es una democracia débil.

La democracia se fortalece cuanta más cantidad y calidad de la oferta electoral. Por eso, entendemos como una responsabilidad y una obligación constitucional desde el Estado generar las condiciones necesarias.

Nuestro país viene haciendo enormes esfuerzos en la materia. Allá por 2002, con la ley 25.600 avanzamos mucho en la cuestión. Luego, con la ley 26.215, de financiamiento de partidos políticos que modifica la 25.600. Después, avanzamos en 2009 con la ley 26.571 que vino a modificar ésta última y la de partidos políticos. Pero, claramente, a pesar de todos los esfuerzos hechos hasta acá, no ha sido suficiente el marco legal; el marco legal no está a la altura de las circunstancias.

Como también se ha dicho acá, el dinero es, hoy por hoy, la mayor amenaza a la democracia en el mundo, no sólo en la Argentina, sino en el mundo; y la falta de transparencia genera descreimiento de la sociedad en sus representantes. Por eso es un tema muy sensible, un tema que nos interpela, un tema que nos obliga.

En nuestro país existe una imperiosa necesidad de poder avanzar para generar condiciones que nos permitan, por un lado, asegurar una competencia electoral equilibrada, con transparencia y, por otro lado, que nos ayude a recuperar esta cohesión perdida, esta confianza

quebrada entre la sociedad y sus representantes. Para ello hacía falta voluntad política, decisión y acción, porque esto hace a este proceso de construcción y consolidación de la democracia que nos hemos propuesto llevar adelante.

Así que, en verdad, señora presidenta, es muy bueno poder hablar y debatir estos temas. Los consensos logrados han sido sobre ejes fundamentales que ya fueron mencionados acá, como la bancarización de los aportes, con lo cual también estamos asegurando la trazabilidad de los aportes; la posibilidad de que tanto personas físicas como jurídicas realicen aportes para las campañas electorales, lo que hasta ahora para las personas jurídicas estaba vedado. Esto hace que nosotros podamos transparentar el financiamiento de las campañas, estableciendo un límite razonable, como es el dos por ciento del límite total de gastos autorizados para campaña que prevemos en este proyecto.

Desde nuestro interbloque entendemos que es necesario mantener las prohibiciones vigentes en el artículo 15 de la ley, y también entendemos que es necesario mantener la del inciso *h*), con respecto a los sindicatos y a las asociaciones profesionales.

También en este proyecto prevemos fortalecer los organismos de control; esta era una enorme deuda pendiente. Sin el fortalecimiento de los organismos de control y sin darle a la Justicia las herramientas necesarias para que pueda aplicar el sistema que nosotros estamos mejorando, nos vamos a quedar sólo en la intención y nos va a faltar, tal vez, la parte más importante.

Otro de los grandes acuerdos logrados es que se mejora el procedimiento penal electoral. Y aquí quiero resaltar –también se ha dicho, pero es difícil decir algo distinto cuando logramos tantos consensos– el enorme aporte que significa el proyecto de la senadora López Valverde, que también venía de la mano de una organización y que nos pone a la altura del cumplimiento de nuestras responsabilidades y obligaciones internacionales en materia de cumplimiento de los compromisos de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Digo esto porque con la incorporación del aporte que hace este proyecto –que consiste en que el 30 por ciento sobre el 20 por ciento que se destina para capacitación,

sea destinado a formación, promoción y desarrollo de habilidades de liderazgo político de las mujeres– también avanzamos para eliminar estas barreras sistémicas que dificultan la participación de la mujer en la política.

Quiero hacer un párrafo aparte, señora presidenta, para algo que vengo trabajando y planteando desde hace tiempo en distintos ámbitos y que creo que es aquí también donde debo dejar el guante para que asumamos el compromiso de debatirlo: la asimetría que existe en todo el territorio de la Nación en cuanto a los sistemas no sólo electorales, sino de financiamiento.

Nosotros, en nombre del federalismo político –yo siempre digo y me hago cargo de lo que digo, de que la Nación viene mirando para otro lado– y, so pretexto de no meterse en las autonomías provinciales, se ha permitido que subsistan, a lo largo y a lo ancho del país y especialmente en provincias como la que represento, sistemas predemocráticos, sistemas cuasi feudales, donde no solamente no tenemos establecida una mínima condición de previsibilidad –como la que planteaba hace un rato, de no saber cuándo y cómo se va a votar–, sino donde no hay financiamiento, no hay posibilidad de poder utilizar las herramientas del Estado, partido y gobierno son absolutamente lo mismo, y hay monopolio absoluto y exclusivo.

En definitiva, en las provincias, al no tener garantizadas ciertas cuestiones mínimas de previsibilidad y de institucionalidad, no tenemos tampoco garantizada nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía no es completa.

Lo peor –y es por eso que lo planteo acá– es que cuando se dan elecciones simultáneas –provinciales con nacionales–, justamente surge la oportunidad para vulnerar y burlar el sistema que nosotros diseñamos desde el Congreso Nación.

Entonces, todos los esfuerzos que hacemos, todo lo que podemos avanzar en materia de transparencia y de calidad democrática queda echado por tierra, porque al ser simultánea la elección, se aprovechan para vulnerar absolutamente todos los controles. No hay manera de lograr que se cumplan los límites establecidos en la ley nacional cuando se da una elección simultánea en provincias como la que represento.

Por lo cual, en algún momento tendremos que asumir el desafío de empezar a debatir esa ley que establezca un umbral mínimo de ciudadanía; es decir, cuestiones básicas y esenciales que nos devuelvan a todos los habitantes de la Nación la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos.

Finalmente, señora presidenta, quiero decir que el proyecto que vamos a sancionar hoy no es perfecto, que seguramente hay muchas cosas que nos quedaron en el tintero, que seguramente nos falta muchísimo para avanzar hacia un sistema más parecido al ideal, pero quiero decir también que es el proyecto posible hoy.

Esta es una iniciativa fruto de mucho debate, de mucho trabajo y de la búsqueda de consensos. Por eso quiero destacar –como también ya se hizo– la participación de la sociedad civil en cada uno de los debates, de los distintos actores, como jueces y fiscales y, por supuesto, el elemento fundamental que componen todos los integrantes de este Senado para avanzar en términos de transparencia, integridad electoral y calidad democrática. Gracias.

Sra. Presidente (Michetti). – Gracias a usted, señora senadora.

Tiene la palabra la senadora López Valverde.

Sra. López Valverde. – Gracias, señora presidenta.

La verdad es que el tema que nos está ocupando hoy creo que es de vital importancia para el sistema de partidos, para la vida democrática de los partidos y también para la vida democrática de la sociedad.

He podido presenciar distintas reuniones y escuchar diferentes organizaciones entendidas en tema y estoy convencida de que esta ley es necesaria. Tengo el convencimiento –porque la realidad así me lo muestra– de que la política, como tantas otras actividades, necesita de financiamiento; los partidos políticos necesitan de financiamiento.

Y como el dinero y los intereses van de la mano, el dinero busca siempre intersticios para escurrirse e ir más allá de lo que el mismo dinero puede obviamente con la finalidad de involucrarse en otros campos. Eso sucede en el ámbito de la política como en tantos otros. Lo que pasa es que el de la política siempre está más visibilizado y se estigmatiza, pero sucede

en muchos campos, como el de la educación y muchos otros, que uno cree que tendrían que ser objetivos, pero el dinero es escurridizo –como decía recién– y también lo son los intereses.

Por lo tanto, si el dinero siempre busca la manera de entrar y esto se puede transparentar, me parece que es saludable.

Creo que hemos llegado a esta instancia por la fuerza de los hechos. Han sucedido cosas no queridas y en el mundo suceden cosas no queridas para que la democracia, en su proceso de calidad, pueda mejorar. Y puede ser tal vez esa la causa que hoy nos tiene acá discutiendo y opinando sobre el funcionamiento y financiamiento de los partidos.

Me parece que más allá de detenernos en las causas y en los contextos, prefiero ver las consecuencias de la medida que vamos a tomar; y que creo –como dije recién– que apunta a mayor calidad democrática.

Por otro lado, considero que es muy importante que esto del financiamiento se esté discutiendo en este recinto a la luz de la opinión pública, porque eso también forma parte de nuestro sistema republicano y de una democracia moderna.

A lo largo de los años, se ha podido observar que la democracia no es perfecta y si no reconocemos esa imperfección caemos en una quimera y en eufemismos. La democracia tiene fallas, porque la democracia la construyen hombres y mujeres, la construimos los ciudadanos, pero tiene la posibilidad de autocorregirse; y creo que estamos bien encaminados en ese sentido.

Me parece que también nos debemos esta discusión por el esfuerzo que han hecho los partidos políticos desde que terminó la última dictadura militar; una dictadura que se llevó miles de vidas, ilusiones y generaciones. Los partidos políticos han venido haciendo un gran esfuerzo por llenarse de contenido, de participación, con todas las fallas que podamos señalar, que nos preocupan y nos deben ocupar hoy, mañana y pasado, en aras de perfeccionar el sistema en el que vivimos y de mejorar la representatividad y la participación.

Por lo tanto, en honor a esa historia, creo que el esfuerzo que se ha hecho en estos treinta y siete años no es nada comparado con la historia universal. Entonces, debemos enfrentar este

tema con la madurez suficiente y con el principio de realismo suficiente; y la realidad es que la política se financia y cuanto más transparente sea eso, mejor es para todos.

Sin dudas, este proyecto que está en discusión se rige por ciertos principios que me parece que son saludables para la vida democrática y para los mismos partidos políticos, que son un vehículo inherente. Tenemos una democracia con partidos y con sistemas de partidos. Los partidos políticos son los vehículos para operativizar y concretar ese concepto que a veces tenemos de democracia, que es el perfecto, el ideal, pero bajado al terreno tiene sus fallas.

Pero necesitamos sí o sí de ese vehículo, y cuanto más se perfeccione y se ajuste ese vehículo, que son los partidos políticos, en mejor situación estaremos como país y como Nación para desarrollarnos por nosotros mismos y ante el mundo entero.

Realmente veo que hay algunos principios que sustentan este proyecto, como es el de la autocorrección. Debemos tener la capacidad de sentarnos, sincerarnos, mirarnos y decir: “Bueno, acá esto está pasando, queríamos esto, porque esto es lo ideal, pero, en realidad, está pasando aquello; entonces, ¿cómo podemos morigerar la situación?”.

Debemos también asegurar cierto grado de independencia de los partidos políticos, porque ahora está registrado. Es decir, no solamente es transparente, sino que también se registra la cantidad de los aportes que pueden hacer las empresas privadas.

También, en cierto modo esto evita o trata de combatir un mal, que es el clientelismo político, y da una cuota muy alta dentro del contexto en el que vivimos de razonabilidad, de respeto y de seriedad a la formación de la opinión pública, que es también un pilar fundamental para cada ciudadano al momento de tomar la decisión de votar y también debe ser un *input* para el sistema político que sirva para retroalimentarse y estar siempre en estrecha relación con la sociedad.

Desde ya, voy a apoyar esta propuesta, siendo consciente de que la democracia es un procedimiento, un conjunto de instituciones, de prácticas y de procedimientos que siempre van buscando la perfección o tratando de encontrar un escalón superior.

Seguramente, mucho de lo que hoy estamos tratando —creo que lo dijo la senadora que me antecedió en el uso de la palabra—, tal vez, mañana o pasado, por la necesidad de los hechos de la realidad, de la tecnología, sea objeto de cambio.

Puntualmente, quiero focalizarme en el expediente de mi autoría —el expediente 4.382/18—, donde tomé la propuesta de una de las tantas organizaciones que expusieron en el tratamiento de este proyecto de ley. Haciéndome eco de este pedido, tomé la incorporación del 30 por ciento de financiamiento a la formación del liderazgo de la mujer dentro de la vida partidaria, así como también lo tienen los jóvenes en un 30 por ciento.

En realidad, este es un pequeño paso, uno más, pero así, paso a paso, hemos venido construyendo las mujeres —y yo diría la sociedad entera— esto de buscar la igualdad dentro de lo que es la diversidad.

Por lo tanto, agradezco y celebro que esta iniciativa, que es un paso, haya salido por unanimidad; lo que habla muy bien de nosotros como sociedad y de cómo nos vamos comprometiendo y tomando conciencia sobre la necesidad de igualarnos; no homogeneizarnos pero sí igualarnos.

Sabemos todos que estas cuestiones son importantes. Cuando hay una balanza desequilibrada, suceden en el ámbito de la política, de lo laboral y en tantos lugares en donde las mujeres no alcanzan a ocupar los mismos lugares o los lugares de jerarquía que ocupan los varones. Y no es porque haya a veces mala fe o cosas a propósito dibujadas de esta manera sino que están tan instauradas, tan naturalizadas —porque es una herencia cultural; casi diría una genética cultural que nos atraviesa a todos—, que a veces hasta de forma inconsciente se realizan determinadas prácticas que van en detrimento de las mujeres.

No necesitamos formación porque no seamos capaces, si no me estaría haciendo eco, y quedó muy lejos este discurso de que en la ley de evolución de Darwin las mujeres quedamos atrás o, como alguna vez se dijo al momento de discutir la ley del voto femenino, que el cerebro de las mujeres medía menos. No pasa por ahí hoy la discusión. Creo que todos somos

conscientes de que las mujeres somos capaces en tanto personas, ciudadanos y seres humanos.

Pero, insisto, debido a esta herencia cultural e histórica existen una serie de barreras, a veces infranqueables pero también casi transparentes, que hacen que la mujer no tenga las mismas posibilidades dentro de ciertos microclimas, en este caso, los microclimas que se generan dentro de los partidos políticos.

Entonces, cuando hablamos de formación, de liderazgo, no es enseñarles a hacer políticas sino que yo creo que es enseñar a la mujer, estimularla, para que aprenda a desentrañar la intrincada madeja en la que se mezclan cuestiones que, a veces, uno cree subjetivas y, otras veces, cree que son externas, culturales y, en definitiva, son cosas que se retroalimentan entre sí; diría condicionantes y condicionadas. A veces, las mujeres se sienten condicionadas a determinadas cosas porque hay una estructura que así lo fue internalizando.

Entonces, yo creo que conocerse a sí mismas, saber hasta cuándo puede cada una o hasta cuánto quiere cada una, conocer lo que se ha dado en llamar la gramática masculina, para después poder elegir luchar por lo que nosotras queremos, me parece que es fundamental.

Y no estoy instalándome en un discurso quejoso; todo lo contrario. Revisaba el último informe de la ONU, el de 2019, y comparándolo con el de 2017, por ejemplo, en los puestos ministeriales tenemos un 2,4 más, en los puestos parlamentarios se ha aumentado un punto, aunque no así en los de liderazgo a nivel presidencial, que ahí se ha bajado. Pero, bueno, son cuestiones de contexto de época.

En definitiva, vamos progresando, pero también tenemos que ser conscientes de que si vamos a este paso a paso, según quienes hacen prospectiva, necesitaríamos de 170 años para nivelar la balanza. Es como mucho.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Federico Pinedo.

Sra. López Valverde. — Así que será cuestión de acelerar estos pasos y, como sucede hoy, de compartirlos entre todos y sabiendo que aquí no hay competencias sino la necesidad de trabajar en equipo y de poder amalgamarnos.

Hay un autor que nos ha estado visitando por estos lados que titulaba en un libro que el mundo es ancho y ajeno. Bueno, podríamos hacer una metáfora de eso y decir que hoy el mundo se achicó con las nuevas tecnologías, pero puede seguir siendo ajeno si no aceleramos estos pasos, si no nos comprometemos todos a buscar la igualdad y, muy especialmente, en el ámbito político, donde necesitamos miradas diferentes, miradas que se complementen, donde necesitamos no la reproducción sino la innovación. No quiero decir que seamos gestoras de la innovación, pero miradas distintas suman, interactúan y pueden hacer esa innovación o esos cambios que como sociedad y como humanidad necesitamos.

Así que celebro que esto haya salido por unanimidad y seguiremos paso a paso construyendo un mundo para ser compartido por hombres y mujeres; y muy especialmente en el ámbito de la política y de los partidos políticos, que es el tema que nos ocupa. Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). — Gracias, señora senadora.

Tiene la palabra la señora senadora Fiore Viñuales.

Sra. Fiore Viñuales. — Señor presidente: la verdad que seré breve.

Recién la senadora preopinante hablaba sobre las miradas distintas, y yo creo que el mensaje que dieron los miembros informantes, sobre todo el senador Mera y la senadora López Valverde del mismo espacio y la senadora Brizuela y Doria; y esa coincidencia entre dos miradas realmente distintas demuestra que hubo un trabajo muy serio y muy responsable sobre este tema.

Fíjese, señor presidente, que se modifican 48 artículos y, dentro de ellos, hay capítulos que están integrados por varios artículos y demás, y solamente entre el dictamen de mayoría y el de minoría hay una sola disidencia.

Sin perjuicio de eso, y por una cuestión de honestidad intelectual, solamente me voy a referir a tres observaciones muy puntuales. Me encuentro contenida por todo lo que han dicho los miembros informantes, que comparto en un ciento por ciento, por lo que no abundaré en lo que ya han dicho. Pero me queda señalar tres cuestiones muy puntuales.

Una de esas cuestiones está conversada ya con los miembros informantes, y parecería haber acuerdo, tiene que ver con el artículo 24 del dictamen que estamos tratando, donde se incorpora como capítulo 4 ter del título III el siguiente. En primer lugar, me parece que es muy importante situarnos en la ley de partidos políticos. El título III al que se refiere el Orden del Día se llama “De las campañas electorales”. Este título III está integrado por varios capítulos. El capítulo 3 bis se llama “De la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual”. Y el capítulo 4 bis se llama “De las encuestas y sondeos de opinión”.

Por lo tanto, si lo que vamos a hacer es incorporar un capítulo que se llama “De la publicidad electoral”, pero no en los medios de comunicación audiovisual sino en las redes sociales y plataformas digitales, por una cuestión de correlación lógica tendría que ir luego del capítulo 3 bis, que se llamó “Publicidad electoral en los servicios de comunicación”, y no del capítulo 4, que tiene que ver con las encuestas. Porque, si no, estaríamos tratando publicidad, comunicación audiovisual, encuestas, publicidad en plataformas digitales.

Entonces, para evitar eso, simplemente, cambiar el capítulo; en lugar de 4 ter, 3 ter y después que el secretario legislativo haga la correlación numérica.

Ese es un tema.

El segundo tema...

Sr. Presidente (Pinedo). – Le voy a rogar que haga esa propuesta al momento de la votación en particular, así toma nota el presidente de la comisión.

Sra. Fiore Viñuales. – Sí, con todo gusto, señor presidente. De todos modos, estaba conversado y se lo iban a acercar al secretario legislativo, pero muchas gracias por la observación.

Luego, en este capítulo que se incorpora, referido a la publicidad electoral en redes sociales y plataformas digitales, se hacen dos cosas. Por un lado, se crea un registro de cuentas oficiales, donde los partidos políticos –las autoridades de esos partidos políticos o los candidatos– tienen que inscribir cuáles son sus plataformas digitales y demás, que me parece que es lógico.

¿Cuál es el problema, presidente? El problema es en la rendición de gastos de campaña de

esas plataformas. ¿Por qué? Porque el artículo dice: “Junto a las rendiciones de cuentas que presentan las listas y las agrupaciones deberá acompañarse el material audiovisual”.

No hay problema en acompañar el material audiovisual; el problema es en la rendición de cuentas y explico por qué. Cuando uno contrata con una red social, emite esta documentación o este instrumento que exhibo, donde se dice cuál es el partido que se está promocionando, por qué valor. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando uno rinde esto, la justicia electoral no lo toma por una sencilla razón: esta constancia de depósito, en todo caso, no es un documento de acuerdo a lo que exigen nuestras obligaciones fiscales. ¿Y cuál es el problema? Si ese problema se lo trasladan a los partidos políticos, los partidos políticos tenemos que ir a Dublín a pedir que nos registren y nos den una factura conforme al Estado argentino.

En virtud de eso, simplemente –algo ya se habló con las autoridades de la Cámara Nacional Electoral–, la idea, incluso con el aporte de la senadora Brizuela y Doria, que agradezco muchísimo, es, luego del artículo 44 septies, que habla de la rendición de cuentas, autorizar y solicitar a la Cámara Electoral Nacional que reglamente cómo los partidos políticos van a rendir esto.

Porque resulta que la Cámara Electoral, que es la que evalúa toda esta documentación, nos dice: “No, no, esto no se permite; vaya y haga de acuerdo a la legislación argentina”. Y si nosotros vamos a Dublín, la verdad es que no nos van a llevar mucho el apunte. Lo que queda es contratar una consultora. Ahora, me parece que tener que contratar consultoras para cumplir con esto es verdaderamente un absurdo, señor presidente. Y creo que la Cámara Electoral está en condiciones, ya que son ellos los que van a evaluar, que sean ellos que reglamenten cómo los partidos políticos vamos a rendir este tema.

Luego, hay otro artículo, que es el 44 nonies, que está dentro del artículo 24 al que me refiero, que habla del destino de inversión en la publicidad digital. Y ahí dice: “del total de los recursos públicos destinados a la inversión de publicidad digital”. No hay recursos públicos destinados a la publicidad digital. De acuerdo al artículo 43 de la ley de partidos políticos –y como usted lo explicó clarísimo–, los recursos

públicos, que uno los puede tener o en televisión o a través de la radio, tienen toda una pauta de espacios que si o sí tienen que cederlos, por las razones que usted explicó, a la publicidad política y a los partidos políticos. Pero no hay nada respecto de fondos públicos destinados a que un partido político pueda publicitar en la publicidad digital.

Por lo tanto, esto que se nos exige –fíjese que el 35 por ciento de esos fondos tiene que destinarse a sitios periodísticos generadores de contenidos nacionales y el 25 por ciento, a generadores de contenidos provinciales, siguiendo el índice de coparticipación– no lo veo de posible cumplimiento, por dos razones, presidente.

La primera de ellas: no hay recursos públicos destinados a la publicidad digital. Y la segunda: ¿a quién se está refiriendo este artículo? ¿A quién obliga? ¿Obliga al Estado? Porque, en definitiva, el criterio de coparticipación lo tiene que tener el Estado al momento del reparto de la publicidad. ¿Está obligando al Estado o a los partidos políticos?

Si está obligando al Estado, tendríamos que crear otro artículo u otra cosa donde establezcamos la obligación del Estado de generar estos fondos para solventarles a los partidos su publicidad digital. Y si no lo hacemos, no podemos obligar a los partidos el destino, dentro de la publicidad digital, de lo que va a ir a medios nacionales y de lo que va a ir a medios provinciales. Honestamente, en esto no hubo acuerdo. Yo voy a votar en contra. Anticipo, en todo caso, el voto contrario.

Después –y es lo último, señor presidente–, hay dos capítulos que me parecían realmente muy buenos y que avanzaban mucho. Coincido con la senadora Brizuela y Doria, que decía recién que esta es la ley posible; y, en función de eso, obviamente que con esta salvedad, voto afirmativamente todo.

Pero me refiero a un capítulo –uno de autoría de ella, casualmente, y otro también del senador Rozas– que está vinculado a la publicidad en la vía pública. A mí me parecía muy bueno. Yo presido un partido provincial y la verdad es que la distribución de los espacios en la vía pública es terrible, señor presidente. Es más, las elecciones en nuestra provincia van a ser en octubre y noviembre, las elecciones provinciales. Ya la publicidad en los espacios públicos está

prácticamente toda... no cedida, pero ya está toda contratada.

Entonces, me parecía muy bueno este capítulo por tres cosas. En primer lugar, establecía orden. Establecía orden y decía: Bueno, creemos un registro de quiénes son los proveedores de la publicidad en la vía pública; y me parecía bárbaro. Le daba al Estado el rol de regulador y de garantizar a todos los partidos políticos, a los grandes y a los chiquititos, que íbamos a tener nuestro espacio. Y después la parte sancionadora; volver hacia atrás en eso me parece un despropósito. No me parece abundar en los fundamentos que dieron tanto la senadora Brizuela y Doria como el senador Rozas, porque seguramente los conocen todos, pero me parece que era una muy buena idea y que hubiera estado muy bueno que ese capítulo esté.

Otro capítulo, y acá hago una mención aparte, con todo el afecto que le tengo al oficialismo, al caso del presidente de la Nación, en este último discurso del 1° de marzo: el problema de los eslóganes, señor presidente. ¿Cuál es el problema de los eslóganes? Hay cosas que se dicen, fundamentalmente durante las campañas políticas, que son muy lindas de decir y muy lindas de escuchar. El problema de los eslóganes es que, pasadas las campañas políticas, en el ejercicio del poder hay que estar a la altura de lo que se dice y lo que se promete.

¿Y por qué digo esto? No voy a ir a pobreza cero y todo lo demás porque, la verdad, es una chicana que no tiene ningún sentido; pero sí voy a ir al último discurso, cuando el presidente dijo: “Se cambia en serio cuando se termine el clientelismo y el uso político de los pobres, la denigrante costumbre de pedirles que vayan a marchar o a votar a cambio de un favor”.

Este proyecto de ley, el orden del día que firmamos el año pasado, tenía un artículo referido al tema del clientelismo, señor presidente, y un artículo referido también a la utilización de poder que hace el funcionario público que, malinterpretando cuál es su rol, hace prevalecer su jerarquía para exigirles a sus dependientes que voten o dejen de votar por determinados candidatos.

Tanto el clientelismo político como la situación de estos funcionarios en nuestro país todavía existen. Y me parecía muy importante, sobre todo a raíz de lo que decía el propio presi-

dente de la Nación, que un artículo de estos esté en la ley. Se ha retrocedido también en eso. No lo comparto, pero dejo esta salvedad planteada porque por una cuestión de honestidad intelectual me parecía importante decirlo.

Muchísimas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora senadora.

Tiene la palabra el señor senador Cobos...

Le pide una interrupción el senador Mayans, senador Cobos.

Senador Mayans: ¿le pide una interrupción al senador Cobos?

Sr. Mayans. – No, gracias. Le quería preguntar si era secreto el voto en Salta.

Sr. Presidente (Pinedo). – El senador Mera tiene la palabra, si el senador Cobos le da la interrupción.

Sr. Cobos. – Por supuesto.

Sr. Mera. – Gracias, senador.

Simplemente, sobre dos de las observaciones que ha hecho la senadora Fiore, tal cual ella lo mencionó. Estamos trabajando en el reordenamiento del articulado a partir de que un título quedaría mejor si está precedente a lo que se encuentra ahora en el dictamen.

Y respecto de la posibilidad de reglamentación por la Cámara de aquellos gastos que tengan en plataformas digitales, también estamos trabajando en un texto para que al final del tratamiento podamos votarlo con esas sugerencias.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.

Tiene la palabra el señor senador Cobos.

Sr. Cobos. – Gracias, señor presidente.

La verdad es que llegamos a esta sesión después de un largo proceso, como bien se había dicho, que ha llevado meses. Desde que inició el año, desde que iniciamos las sesiones ordinarias, hemos tratado de compaginar y consensuar no solo entre los distintos partidos políticos sino también con la otra Cámara, para que el proyecto salga consensuado.

Este tema que hoy estamos tratando tiene que ver básicamente con una mejora que persigue transparencia, que impone límites, que aumenta los controles, que busca mayor equidad y que también, obviamente, aplica penalidades.

Y está basada en modificaciones de la ley original, la 26.215, de 2006, que fue promul-

gada en 2007 pero que también impacta sobre la ley 26.571, que como bien decía la senadora Inés Brizuela fue la llamada de democratización de los procesos electorales, que modificó también la ley de partidos políticos. Fue la ley de primarias, que allá por 2009, después de una elección, se logró consensuar con la dirigencia política. Pero como bien decía el senador Mera, había requerimientos de la justicia electoral y de las entidades y organizaciones que buscan transparencia en la función pública.

A lo mejor, como bien decía el senador Fuentes, no es una ley que está hoy dentro de las prioridades de la sociedad. Pero hemos tratado una ley recientemente que tiene que ver con la realidad productiva, al prolongar la emergencia sobre la actividad frutícola en determinadas provincias. En definitiva, siempre habrá leyes de mayor o menor preponderancia en la sociedad.

Pero lo que sí es claro es que a la sociedad hay que brindarle la posibilidad de elegir a su dirigencia política de la mejor manera. Y mientras mejor sea el camino, en transparencia, en sana competencia –como pueden ser las primarias–, en algo que ha quedado pendiente como es la boleta única en versión papel o digital –que era el voto electrónico, lo cual hemos discutido pero no hemos avanzado–, estaremos quizás arribando a una mejor dirigencia política, que solucionará los problemas de la mejor manera posible para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía.

Voy a hacer una síntesis, un resumen del proyecto, porque hay poco que agregar, pero a lo mejor sintetizar qué es lo que buscamos con esta ley será de utilidad.

Primero, se busca asegurar un margen de la participación pública y privada, pero fundamentalmente privada, en el funcionamiento institucional de los partidos políticos. Y acá aparece el primer tope: 2 por ciento, que surge de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior, que puede realizar una misma persona humana o persona jurídica. Y acá lo que estamos regulando son los aportes de personas jurídicas o de personas humanas. Y es así esta distinción. También le ponemos límite a la campaña, que tiene que ver con el 2 por ciento de los gastos permitidos en esa campaña.

Y asimismo ponemos limitaciones, como uno de los objetivos que perseguimos, para que no sean anónimas estas donaciones, para que no sean de empresas prestadoras de servicios vinculadas con el poder de turno y que no vengan aportes de gobiernos extranjeros, de personas jurídicas que estén implicadas en hechos de corrupción o que estén sometidas a procesos judiciales en temas penales tributarios, entre otras cosas.

Se regula también el pago en especies y se habla de distintas modalidades, según surgen los aportes, pero estableciendo un mecanismo en que quede bien claro cuando el aporte se realice en especie.

Se disminuye el espacio cedido, que era del 10 por ciento y pasa al 5 por ciento –prácticamente a la mitad–, en el tiempo de programación, lo cual reduce la sobreexposición a la que por ahí sometemos a la ciudadanía en las fechas electorales.

Se vuelve a retomar algo que a lo mejor en los comienzos de la democracia vivimos –en aquella época de juventud–, donde estaban las escuelas del gobierno y se capacitaban y se formaban nuevos cuadros políticos, y es por eso que se exige que del total de aportes un 20 por ciento sea destinado para el desenvolvimiento institucional, pero también el 30 por ciento para la formación de liderazgos políticos de mujeres, cosa en la que ya hemos avanzado con la ley de paridad de género que aprobó este Senado meses atrás.

Por otra parte, no nos escapamos de la realidad laboral que hoy tienen los medios de comunicación. En mi provincia ha cerrado uno de los medios de papel más importantes, el cual ha quedado en versión digital únicamente. Entonces, sabíamos que en este artículo podíamos tener diferencias. Las hemos tenido inclusive internas dentro de nuestro bloque. Pero lo cierto es que en materia de publicidad digital, al menos el 35 por ciento deberá destinarse a sitios periodísticos generadores de contenidos de producción nacional y un 25 por ciento a aquellos generadores de contenidos provinciales. Así contemplamos lo que expresaba la senadora en su alocución: las realidades que se viven en otras provincias.

También reducimos los actos de gobierno, que por ahí cuando se acerca la fecha de

elecciones se tildan de electorales. Es decir, la habilitación de obras o de servicios, lo cual se limita a veinticinco días anteriores.

Y se refuerzan –como bien decía– las penalidades, estableciendo un sistema de sanciones para la práctica, así como de controles para evitar el clientelismo y el uso de recursos públicos con fines partidarios.

Nos parece que es una buena ley. Seguramente, será perfectible. Tenemos una sola diferencia con el dictamen de la mayoría, que tiene que ver con el aporte de los sindicatos. Ahí, con todo el respeto intelectual que le tengo al senador Mera, no coincido con él. Él hablaba de la igualdad entre empresas o empresarios y sindicatos, es decir que todo aquello que se les permite a las empresas también se debe permitir a los sindicatos. Yo discrepo con esa opinión, como discrepa mi bloque. Pero es la única diferencia que tenemos. La votación decidirá cuál será el texto de la sanción definitiva.

Entonces, dicho esto, me parece que es importante transparentar los aportes en la política, en las campañas en particular, y la publicidad, aumentando así la legitimidad de los actos públicos y buscando una mayor equidad en la participación política.

Fíjense que cuando salió la ley de primarias y se permitió asegurar a los partidos chicos –partidos que no tienen muchos recursos– la posibilidad de participar en los medios de comunicación, como es la televisión –que es lo más costoso–, lograron un crecimiento, tal como lo consiguió la izquierda.

Entonces, con esto también estamos buscando poner un límite a este financiamiento y solucionar un problema, como bien decía el miembro informante, el senador Mera, con las rendiciones de los partidos políticos. Hacen malabares los contadores y los jefes de campaña y también la justicia electoral, que trata de ver con buenos ojos; pero es mejor, para verla bien transparente, contar con un instrumento legal que regule perfectamente el aporte privado.

Dicho esto, quiero pedir a los senadores de este cuerpo que acompañen el proyecto de la mayoría. Después, en el tratamiento en particular, cada uno tendrá su posición, sobre todo en los aportes del sector sindical.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador. Tiene la palabra el señor senador Braillard Poccard.

Sr. Braillard Poccard. – Gracias, señor presidente.

Hago un breve comentario al comenzar. Siempre se habla de reforma política, y, muchas veces, se asoció este término como una especie de solución fundamental para salir de alguna crisis muy profunda en la Argentina.

Por ejemplo, en 2002, cuando dentro de los anuncios que se hacían se habló de la reforma política. Personalmente, no comparto esa designación. Yo la llamo adecuación de las normas y de las leyes a los cambios que impone la dinámica política, y que responden a las necesidades de la sociedad.

¿Por qué hago esta reflexión? Porque creo que si este Congreso puede estar orgulloso de algo, por lo menos desde que yo modestamente pertenezco al mismo, es de que ha dado nacimiento a una serie de leyes que significan reforma política en el más correcto sentido de la palabra.

Tenemos la ley de acceso a la información, el debate presidencial obligatorio, y ahora, avanzando un paso más en lo que tiene que ver con la transparencia del destino de los fondos que manejamos los partidos políticos, creo que estamos haciendo una adecuación más a las normas.

Recordemos que estamos cumpliendo un mandato constitucional al trabajar en este sentido. El artículo 38 de la Constitución, que por fin, después de tantos años que existían los partidos políticos pero no tenían rango constitucional, impone la obligación de que los partidos rindamos cuentas del origen y del destino de los fondos. Entonces, estamos también cumpliendo una manda constitucional que nos obliga a tener un sistema cada vez más transparente.

Creo que el gran cambio se dio con la ley 25.600, porque, a diferencia de la 23.298, lo que hace la 25.600 es darle entidad propia al origen de los fondos sacando lo que hasta ese momento era el título 5 de la ley que mencioné recién. La 26.215 también introdujo algunos cambios, y dependerá del criterio de cada uno establecer si fue un avance o un retroceso; personalmente no coincido con muchos de los cambios que se hicieron. Y ahora llegamos acá con esta propuesta. Tengo el honor de haber sido uno de

los firmantes de los proyectos presentados por invitación del senador Angel Rozas.

Trabajamos mucho, es cierto, se hizo un trabajo muy importante, y creo que estamos llegando a una síntesis muy importante.

En este sentido, creo importante resaltar dos o tres cosas. Es cierto que acá el gran debate es si la política la debe pagar el Estado o la sociedad a través del Estado, o si la debe pagar en parte el Estado y en parte la sociedad de manera directa; esta segunda modalidad es lo que se denomina sistema mixto. ¿Y qué implica el sistema mixto? El sistema mixto implica que el Estado directamente garantiza a los partidos políticos un mínimo de posibilidad de competencia. ¿Fundamentalmente con qué? Con la impresión de las boletas y con los espacios publicitarios que se otorgan a los partidos políticos. De esta manera es como que todos arrancamos de un principio de justo origen, de igualdad de origen. A partir de allí entra en juego el tema del aporte individual o de las personas jurídicas, como lo pretendemos introducir desde este momento.

Realmente este es un debate muy complicado que pensadores como Max Weber trataron en el libro *El político y el científico*. Un político de la talla de Barack Obama planteó cuando escribió la memoria de parte de su vida que la tarea más difícil que le tocaba a un político –y la más desagradable, por cierto– era la de recaudar fondos para financiar su campaña. Este es un tema que no está solucionado en el mundo, pero sin dudas todos los países, a medida que van adquiriendo mayor experiencia en el ejercicio democrático, van logrando mejorar. Por eso hablo de adecuación de las normas.

Lo que estamos haciendo hoy nosotros no es sacar una ley ideal, porque no lo es, sino avanzar fundamentalmente en lo que tiene que ver con la transparencia.

La verdad es que la ley aporta algunas cuestiones novedosas. Creo que todo lo que se ha reglamentado acá –y lo mencionaron ya, no vale la pena volver sobre el tema–, como el tema de las encuestas, o completar la reglamentación, y el tema de las distintas formas de publicidad constituyen un avance; pero, en ese contexto, si tenemos que sintetizar a qué debe apuntar una ley de financiamiento de la política, desde mi modesto punto de vista es a dos cuestiones fundamentales: a la transparencia y a la posibilidad

de que los fondos que se logren realmente sirvan para el funcionamiento de los partidos políticos.

Creo que se sabe perfectamente bien, pero conviene resaltar que de ninguna manera cualquier empresa o persona jurídica puede hacer aportes en dinero para la campaña política o para el funcionamiento de los partidos. Las prohibiciones que están desde 1983 son clarísimas en este sentido. Y acá surge el debate de si los sindicatos deben o no poder aportar. En lo personal, a mí no me disgusta que lo puedan hacer, simplemente quiero resaltar que esta prohibición viene desde el 83, como también con las asociaciones profesionales, porque se entiende que quienes administran dinero de los afiliados no deberían destinar parte de ese dinero al aporte de una parcialidad política. Ese es el sentido; no es cuestión de prohibir ni de discriminar a nadie, porque de última cada trabajador, cada profesional o cada persona que lo integra puede perfectamente bien hacer un aporte desde el punto de vista personal, individual.

Se introduce también una cuestión interesante, y es que dentro de los aportes relacionados con el porcentaje que se puede donar de la declaración anual del impuesto a las ganancias, en el artículo 40 se introduce una cláusula que establece que las personas o empresas que hagan donaciones a obras de caridad no necesariamente incluyen dentro de ese porcentaje permitido por ley el aporte a los partidos. O sea, se desagrega el aporte, de modo tal que el aporte partidario no signifique restarles fondos de donaciones a entidades de bien público.

Quiero aclarar que, dentro de las prohibiciones, en el debate en el plenario se estableció una cosa que seguramente se nos había escapado—creo que fue a propuesta del senador Pais—, y es que no solamente se prohíba a las empresas contratistas de obras públicas o concesionarias de servicios públicos sino también a proveedores del Estado, y me pareció una medida sumamente adecuada, porque si no caemos en lo mismo.

Y, volviendo al tema de las prohibiciones, esto tiene que ver con alejar ese temor de que las empresas que aportan lo hacen solamente pensando en las eventuales compensaciones que tendrán si esa parcialidad política llega al gobierno. Esto me recuerda a alguna consideración que hizo creo que el presidente Eisenhower, en Estados Unidos, cuando alertó

sobre el complejo industrial militar y los financiamientos de la política. Bueno, por eso es que ese país ha avanzado tanto en materia de poner limitaciones y de registrar perfectamente bien quién aporta cada céntimo que se destina a una campaña política.

Si me permite, senadora Fiore, la voy a aludir. Con todo respeto, usted sabe que la respeto mucho. Con lo único con lo que no estoy de acuerdo es con el tema del clientelismo. Esa es una figura que la verdad es que yo la considero bastante riesgosa de ser incorporada a una ley, sobre todo porque muchas veces los partidos políticos hacemos una tarea social que puede ser tomada por alguno... Con recursos propios, eh, no hablemos de recursos del Estado. Creo que a lo mejor esta figura está mucho más relacionada con lo que tiene que ver con la transparencia de los fondos que provienen del Estado. Por eso yo compartí que no se incluyera la figura del clientelismo dentro del proyecto.

Quiero aclarar una cuestión que voy a pedir cuando se vote en particular si la podemos incorporar.

La senadora Brizuela había introducido en el proyecto que ella trabajó que las donaciones de hasta 300 módulos—que al valor del módulo de hoy estamos hablando más o menos de 4.000 pesos—podrán realizarse en efectivo, debiendo acreditarse en la cuenta bancaria del partido el origen de los fondos. ¿Con esto qué logramos? Se mantiene la publicidad del aporte, porque el aportante va a decir “Señor: yo soy el que pongo”, pero facilitamos; porque el gran desafío que tenemos los partidos políticos es que la sociedad, de manera global, quiera aportar a nuestra actividad, y eso está muy relacionado con la legitimidad y con el prestigio de las instituciones políticas, pero también tenemos que ver la forma de facilitarlo. Entonces yo pediría, sinceramente, que esta medida—que creo que está en el artículo 16 bis—sea incorporada cuando lo tratemos y votemos en particular.

Realmente creo que el plenario de comisiones hizo un trabajo excelente en materia de consulta a la sociedad civil. Escuchamos muchas cosas, incluso algunas que nos tildaban casi de personas absolutamente incorrectas, por ser suaves en la terminología.

Creo que nos faltó algo. Digo que nos faltó porque yo formo parte de dos de esas comisio-

nes. En efecto, nos faltó la opinión de los que tenemos la responsabilidad de administrar un partido político. Es decir, hablaron los magistrados, que son los que controlan, hablaron los que estudian el tema desde afuera, pero faltó –repito que es un error nuestro, mío también– la opinión del que tiene la responsabilidad de administrar un partido.

Recordemos algo rápidamente. Los partidos políticos hoy están sometidos por lo menos a un triple control en materia de rendición de sus aportes. Primero, porque va la firma del responsable máximo del partido, que es el presidente; del responsable económico-financiero y de un contador público, con un balance anual. Lo único que hacemos ahora con el balance es ponerle fecha, pero el balance es anual. El segundo control es el que hace el Consejo Profesional de Ciencias Económicas sobre el trabajo del contador. Si el contador comete un error o avala una rendición equivocada, es responsable como profesional ante su consejo. El tercer control es el que hacen los auditores de la Cámara Nacional Electoral, a donde llega el balance desde el juzgado electoral de cada provincia. Realmente creo que es un exceso de celo en los controles, pero todo sea bienvenido en aras de la transparencia.

Con esto termino. Posiblemente me quedaron por decir algunas cosas, pero acá se ha dicho mucho y muy valioso. Entonces, no voy a aportar mucho más.

Hoy leí un artículo en el diario *La Nación* del doctor Alejandro Carrió sobre la deuda del republicanismo en la Argentina. En una parte dice que a Benjamin Franklin, uno de los redactores de la Constitución de los Estados Unidos, cuando sale de la sesión una señora le pregunta qué sistemas les van a dar. Entonces, le dice: “La República, señora, siempre y cuando se la pueda mantener”.

Es decir, toda legislación es perfectible, toda legislación tiene sus pros y sus contras, pero está en nosotros, en la sociedad, y fundamentalmente en los que tenemos una responsabilidad política, la voluntad de que esto funcione correctamente. Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Caserio.

Sr. Caserio. – Señor presidente: quiero brevemente hacer algunas consideraciones sobre el proyecto de ley que hoy tenemos en tratamiento.

Primero quiero dar una mirada política, porque es muy importante que en un año electoral, en un año en el que tenemos muchísimas dificultades, el Senado tenga la valentía de tratar una ley como esta, porque la necesitamos, porque no podíamos seguir en la circunstancia de tener la ley anterior, que no daba tranquilidad a los partidos políticos o a los candidatos, y que además estaba sospechada por la sociedad por falta de transparencia.

Mucho se ha hablado de la ley. Evidentemente, todos la han tratado con profundidad. Quiero aportar tres conceptos mínimos únicamente.

Primero, el control de las redes sociales; que la Cámara Nacional Electoral lleve un registro de las cuentas de las redes sociales, los sitios de Internet y demás cuentas de los dirigentes, precandidatos y candidatos, habla, al fin y al cabo, de que tenemos la voluntad de controlar lo que pareciera de algún modo que siempre fue difícil de controlar.

Evidentemente, fue fácil durante los últimos años hacer auditorías sobre el uso de la televisión. Ahora, con las modificaciones que se hicieron a la ley, no lo necesitamos como antes porque es gratuito. Pero el tema de las redes es importante, porque creo que es un elemento muy utilizable hoy en el mundo moderno. Es muy importante que exista la voluntad de controlarlo para que todos estemos en las mejores e iguales condiciones para llevar adelante las campañas de nuestros partidos políticos.

Segundo, me parece que es importante cuando el proyecto habla del destino de la inversión, especialmente en el tema de publicidad digital, que un 35 por ciento sea destinado a los grandes medios de producción nacional pero que también se haya dispuesto un 25 por ciento para los sitios digitales provinciales. Eso habla también, especialmente para nosotros, los que somos dirigentes del interior, de un acto de federalismo; que no esté centralizado por las grandes empresas haciendo que sea muy difícil que llegue al interior y que sea utilizable por los sistemas que realmente se están dedicando a esto y dan esta cobertura en el interior provincial.

Por último, hay un punto fundamental de esta ley, un punto que todos desde hace tiempo consideramos que debía tratarse, que debía modernizarse, que debía cambiar. Se trata específicamente del aporte en dinero y la bancarización. El dinero en efectivo se va a aportar solamente mediante depósito bancario electrónico, identificado además con la identidad del depositante mediante un sistema electrónico. Me parece un sistema elemental, señor presidente, porque de una vez por todas van a quedar de lado todas las suspicacias y todo el uso del dinero en efectivo que de algún modo, durante los últimos años, puso en duda la transparencia de las elecciones.

Esto es bueno para nosotros, los dirigentes políticos, para nosotros los que estamos al frente de los partidos. Me ha tocado en varias elecciones estar al frente de mi partido en la provincia de Córdoba. Esto es de suma tranquilidad porque sabemos que el dinero en efectivo va a ser bancarizado, que va a ser controlado, que nadie va a poder utilizarlo de un modo que no corresponda. Evidentemente, si alguien incumple la ley, no va a poder decir que no lo conocía porque esos registros van a estar en manos de todos.

Por eso, celebro, primero, el tratamiento de la ley. Segundo, me parece que era indispensable tratarla. Tercero, lo peor que nos podía pasar era seguir como estábamos. Más allá de la expresión de algunos senadores que legítimamente creen que a lo mejor esta ley no es todo lo que necesitamos, me parece un gran avance en un año electoral y en la Argentina que vivimos hoy. Muchísimas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador. La senadora Sacnun no está. Tiene la palabra el senador Pais.

Sr. Pais. – Señor presidente: esta es una ley importante que ha sido trabajada en el ámbito parlamentario, con importantes aportes de senadores, con coordinación y dedicación por parte de los presidentes de las comisiones, e incluso con consultas e interconsultas con jefes de bloques y representantes legislativos de la Cámara de Diputados.

Este no es un dato menor. Nos parece importante y trascendente esta ley, que en muchos aspectos varios legisladores han dicho que es necesaria, para modificar tanto la ley de partidos políticos como el Código Electoral, y en tiempos

electorales como los que se avecinan a nivel federal, ya que esta regulación es justamente federal también.

Los partidos políticos, conforme la Constitución del 94, ingresaron al texto constitucional con inusitada fuerza, porque el sistema democrático constitucional de gobierno tiene su basamento en la actividad política; esa participación política está incentivada y reconocida expresamente en el artículo 37 de la Constitución, y tras cartón en el artículo 38 de la parte dogmática se los reconoce expresamente, se los nombra y se dice que son instituciones fundamentales del sistema democrático, son instituciones fundamentales y necesarias de la República, pues el acceso a los cargos electivos únicamente es a través del sufragio universal y a través de los partidos políticos.

Con relación a estas instituciones necesarias y fundamentales del sistema democrático, reconocidas por la Constitución, se establecen determinadas obligaciones al Estado, entre ellas, la de contribuir al sostenimiento económico de las mismas, de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Esa es una obligación del Estado.

Por otra parte, la Constitución les impone a los partidos políticos obligaciones y le da a la ciudadanía determinados derechos. Esas obligaciones son fundamentalmente dar cuenta a través de los medios de comunicación, a través de la publicidad, de actos de publicidad adecuados, del origen de los fondos y del destino de los fondos. Esto es lo que venimos a trabajar en el marco de esta ley, una mayor trazabilidad de los fondos, a aventar las dudas y, además, a tratar de eliminar las prácticas reñidas con esta transparencia y con esta legitimidad de origen de los fondos; porque convengamos que, justamente, la motivación de la necesidad de esta ley es que existen y han existido graves irregularidades, que uno busca, con esto, fundamentalmente aventarlas o eliminarlas.

Ahora bien, se han logrado grandes coincidencias; tal vez la disidencia, que no es menor, es esta suerte de *capitis diminutio* de un solo sector, el sector de las organizaciones sindicales, organizaciones patronales y asociaciones profesionales. El resto, fíjese usted, se ha legitimado y se habla de las empresas que tienen fin de lucro. El “lucro” es la utilidad, la ganancia.

Estas están legitimadas y pueden hacer aportes a los partidos políticos.

Se habla de que no, de que como tienen afiliados y los representan, esta afiliación, estos afiliados, no están representados. Mire, hay muchas sociedades anónimas que cotizan en bolsa que, tal vez, en un año o al año siguiente hacen una asamblea de accionistas y no le van a consultar en forma previa si hacen aportes a un partido político.

Fíjese que no se les impone ningún tipo de restricción a las asociaciones mutuales; también tienen afiliados. Ellas pueden aportar. Cooperativas: pueden aportar. Son entidades sociales de capital, pero pueden aportar.

¿Por qué la prohibición, justamente, a una entidad que sí está reconocida por la Constitución? Yo les voy a decir algo, presidente. La Constitución no habla de persona jurídica. La Constitución no habla, salvo en dos partes, de empresas. Pero la Constitución sí habla de gremios y sindicatos. El artículo 14 bis es fundamental. Los menciona en el primer párrafo y en el segundo párrafo. Establece garantías al reconocimiento y a la actividad sindical. Ahora, tiene una legislación que ha sido muy trabajada: la ley 23.551. Se avanzó en paridad de género a nivel de las representaciones sindicales y de las conducciones sindicales. Esta ley les establece sus ámbitos específicos, sus derechos y obligaciones.

Ahora bien, a través de esto, nosotros tenemos injerencia en una entidad también necesaria, porque los gremios son entidades necesarias conforme también la manda constitucional del 14 bis; pero a esa le establecemos una *capitis diminutio*. Yo creo que hay mucho de preconcepción, pero cuando hablamos de afiliación, los sindicatos no tienen afiliación obligatoria, es voluntaria, y, por supuesto, sus dirigentes pueden actuar siempre en el marco de la ley.

Pero fíjense ustedes que, incluso, a diferencia de otras entidades, los sindicatos tienen la obligación entre sus actividades –y la deben incluir en los estatutos– de propender al mejoramiento de la legislación laboral y de la seguridad social. Ahora, no pueden prácticamente ni participar en política ni apoyar a la actividad política. Todo un contrasentido. Y cuando hablamos así, un contrasentido muy grave, porque fíjese que si no se logra la mayoría absoluta en esta norma, en el artículo 17 puede quedar la norma

vieja vigente; puede quedar el antiguo artículo 15 que no va... que va por posibilitar que los proveedores del Estado puedan hacer aportes y otros que estamos restringiendo acá.

Hay que tener responsabilidad y yo creo que estamos haciendo una discriminación. No puede ser que desde algunos sectores se legitime el aporte de quienes persiguen el fin de lucro y de quien tiene la obligación legal y hasta constitucional de bregar por el mejoramiento de la legislación, por el mejoramiento de las condiciones sociales, por el mejoramiento de la legislación, dice la ley 23.551, artículo 23.

Uno de los aspectos para trabajar por el mejoramiento de la legislación también es la participación política y no digo de determinados partidos políticos. Yo creo que hay mucho de preconcepción y, fundamentalmente, de discriminación a las asociaciones gremiales y no así con otro tipo de entidades. Una ONG, que muchas veces puede recibir fondos del extranjero, va a poder participar; una fundación va a poder participar; va a poder también hacer aporte a los partidos políticos. Se elimina un sector importante que además tiene una obligación legal y constitucional de intervenir para bregar por un fin que no solo es lícito, sino que es loable, como es el mejoramiento de las condiciones sociales de los trabajadores. El trabajador es un sujeto de tutela especial, ha dicho la Corte Suprema; es un sujeto de tutela especial por imperativo constitucional, y esa tutela especial está garantizada también por el accionar de los sindicatos.

Aclarado esto, y creo yo que suficientemente, quiero también mencionar que conforme la OCDE, la mayoría de los países integrantes de la misma tienen legislaciones que permiten los aportes de las entidades sindicales, de los sindicatos. Países como Alemania, Turquía... me voy a permitir leerlos porque son muchos e importantes los que permiten el aporte sindical. Mire: Australia, Austria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido. Son muchos los países que pertenecen, incluso, a entidades que nosotros estamos bregando por incorporar, que no consideran un demérito la participación y los aportes a la actividad política de

los sindicatos; y nosotros parece que estamos retrocediendo.

Mire, si en el año 83 nosotros los discriminamos y si alguno lo discriminó porque lo vincula más con el Partido Justicialista o con el peronismo, yo creo que esa es la cuestión de fondo que no queremos resolver.

Los sindicatos apoyan y han apoyado diferentes candidatos de formas expresas, explícitas o implícitas. Alguno, incluso, trabajó—algunos dirigentes importantes y representando a algún sector muy importante, como puede ser el agro—por la campaña presidencial del actual gobierno. Los sindicatos entienden y participan conforme los intereses que representan. No hay que tenerle miedo a esto ni tampoco colocarlos en una situación de una suerte de *capitis diminutio*, una incapacidad y, además, una incapacidad discriminatoria en relación con otras entidades; otras entidades, incluso, que persiguen fines sociales y no persiguen fines de lucro. He hablado de las ONG, de las fundaciones, de las cooperativas, mutuales, a ellas no se les prohíbe. A ellas no se les prohíbe.

Sobre esta base tenemos un disenso importante. Creemos que si queremos podemos trabajar y reformular la legislación de asociaciones profesionales; pero evidentemente esto no es una cuestión que tenga una raíz filosófica. Yo creo que tiene una raíz mucho más concreta, específica y en términos políticos, y se los está discriminando. Por eso nosotros vamos a insistir con esto. Pedimos responsabilidad y tratemos, señores senadores, de que la norma, el artículo 5° de este proyecto, el artículo que modifica el artículo 15, sea sancionado con la mayoría de 37 legisladores, porque, de lo contrario, vamos a hacer una reforma, vamos a hablar de trazabilidad y vamos a dejar la vieja legislación, que era más restrictiva o más permisiva; y que realmente no queremos tanto el oficialismo como la oposición. Nada más, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). — Gracias, senador. Senador Castillo: tiene la palabra.

Sr. Castillo. — Gracias, señor presidente.

En verdad, sobre la ley en sí nos dejan poco por hablar, lo cual nos permite avanzar quizás sobre otras cosas. Desde afuera nos van a decir que tenía que ser la financiación de los partidos para que se reúnan en Semana Santa. (*Risas.*) Pero frente a eso les vamos a contestar que esto

está desde noviembre, como nos dijo el senador Mera, por distintas razones. En verdad, cada vez que se trata una ley de estas no hay neutralidad, porque cada uno le pone el sesgo político que tiene y esto —lo que acaba de hablar Pais también— son los sesgos políticos. Entonces, ¿cómo hacemos? Esa neutralidad debe ser solamente suplantada por el consenso. En esto es en lo que, en verdad, se ha avanzado y creo que ha hecho que esta ley demore. Muchos teníamos miedo de que no la lleguemos a tratar.

La verdad es que es ponderable lo que han hecho las comisiones. Es ponderable lo que han hecho en el ejercicio del trabajo, de la paciencia. Se han expresado todos los que lo querían hacer, lo han hecho de la manera posible. Es más, hemos traído a las autoridades electorales, a los miembros del Poder Judicial, a los que están en contacto directo con esto a expresarse y lo han hecho de una manera realmente importante.

A comienzos de siglo, en el año 2001, en junio, en la ciudad de México hubo una reunión de pensadores de las ciencias políticas que empezaron a darle a este tema un contenido político-filosófico.

Ahí se hizo, diríamos, el primer debate amplio. Yo voy a ver quiénes estaban allí. Estuvo auspiciado por las Naciones Unidas, por el Instituto Internacional de Asistencia y la Democracia Electoral —IDEA—, estuvieron la Fundación Internacional de Sistemas Electorales, el Instituto de Elecciones de Canadá, el Ministerio del Interior de España y, por supuesto, el Instituto Federal Electoral de México.

En verdad, a esa reunión los pensadores son los que le dieron luego un gran contenido de carácter universal, sobre todo a la parte occidental en materia de este tipo de pensamiento. ¿Y qué era lo que en verdad venía a llevar adelante esta motivación? No era quizás el tema del financiamiento ni de la transparencia, sino que lo que se observaba era la fuerte participación de los partidos, de las instituciones democráticas, en la vida democrática de Occidente. Es decir, en verdad, a partir de la Segunda Guerra Mundial existe todo un proceso de constitucionalismo que surge de allí, y con el nacimiento de los organismos internacionales, también surge un valor jurídico de cada una de estas instituciones; la necesidad no solo de que estas funcionen sino de que sean financiadas; que los partidos políticos puedan financiar programas en donde sus afilia-

dos puedan tener sus cátedras de dirigentes, sus cátedras de trabajo, y esto necesitaba en alguna medida el requerimiento y el auspicio político de los mismos.

Esto me parece que ha sido lo más importante que se ha venido desarrollando en esta segunda mitad del siglo XX.

Hay muchas Constituciones que han venido trayendo esto a instancias. Fueron la italiana del año 47, la alemana del 49, la Constitución francesa del año 58, cuando entra el tema de la Tercera República; la griega, la portuguesa y sobre todo la española del año 1978. Digo la española porque la impronta de los debates de la española es lo que la Argentina tomó y siguió a partir del proceso del año 83 en adelante. Es decir que nosotros hemos seguido en alguna medida el tema de los españoles, en aquel concepto de haber salido de una larga dictadura como fue la de Franco.

Desde ahí se dan la intensidad y la profundidad de estos debates. En verdad, en la intensidad y en la profundidad de estos debates surge que, cada vez que lo hacemos, tenemos mejor calidad democrática, y en alguna medida es el camino al cual nosotros estamos yendo. Y estos debates tienen mayor o menor profundidad de acuerdo a los países, de acuerdo a la originalidad de los mismos. Por ejemplo, el pragmatismo de los norteamericanos, que realmente es todo un tema para los norteamericanos la cuestión de la recaudación de fondos. Ellos llegan a decir, incluso, que no hay campañas derrotadas (*risas*), dicen que hay campañas que se han empobrecido, es decir, en el medio de la campaña a algunos se les va acabando la financiación y muchas veces el resultado electoral está dado por lo mismo.

El anteaño pasado, algún candidato nuestro en la Argentina también dijo que tenía un tope de gastos y hasta ahí llegó su campaña, y eso lo hizo tener el resultado...

Son normativas que buscan la equidad, que no sean campañas empobrecidas, y que entonces un político pobre no sea, luego de una campaña, un pobre político. (*Risas.*) Tenemos que buscar este tipo de acuerdos.

Hay cinco puntos que cada una de estas leyes tiene que tener y esta lo tiene.

El primer punto es el tema de la financiación pública, cuál es la parte que se le asigna a la

financiación privada, con los límites que acá están bien puestos, las prohibiciones de algunas fuentes de la financiación, los límites a los gastos, la fiscalización y la sanción.

Cualquier ley que se precie debe tener estos elementos y estas cuestiones que esta misma los tiene y en alguna medida evita lo que llamamos normalmente, en política, "la cancha inclinada". Lo que pasa es que la cancha inclinada no solamente se da en la cuestión de la financiación sino que la cancha inclinada también se da en otras cuestiones y aspectos políticos. Nosotros hoy estamos discutiendo casi una sola parte, que es la financiación. Hay otra parte, que es el régimen electoral en sí.

Todavía tenemos muchas deudas, como el tema de la boleta única, el tema de los controles sobre lo mismo. De manera tal que, claro que hay mucha cancha inclinada con respecto a este tema.

Yo adelanto que mi voto va a ser hacia el despacho de la minoría.

Entre las cosas que han evolucionado, en alguna medida es esto que hemos hablado mucho acá, que es el control bancario, la trazabilidad, a los efectos de que al menos tengamos la tranquilidad de que los dineros electorales no provienen del narcotráfico ni vienen del lavado de dinero. Pero también hay otras fuentes de financiación indirectas que nosotros debemos tener en cuenta, y acá el senador Pais lo ha traído, fruto luego de las expresiones también del senador por Corrientes.

Es muy difícil tener un equilibrio con respecto al tema del artículo 15, inciso h), una posición. Yo coincidí en que desde el punto de vista dogmático-jurídico es difícil. Coincidí con lo que usted plantea de no a la *capitis diminutio*, pero también veamos cuestiones reales. Las asociaciones profesionales y las administraciones de la obra social han demostrado acá, en nuestro país, severas falencias de renovación y severas falencias de prácticas democráticas. Entonces, es una cuestión de hecho que hay que controlarlas. Esta ley trae las herramientas.

En alguna medida también hay otra cuestión. Muchas de nuestras obras sociales tienen que ser luego avaladas y financiadas por el propio fisco. En muchas oportunidades esto ocurre. Sin embargo, me parece que puede haber allí

una especie de doble imposición, es decir, el que paga, desde el punto de vista como una asociación que es privada pero que también está recibiendo un sistema público...

Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Pais: tiene la palabra para una interrupción.

Sr. Pais. – Mínimamente.

Lo habíamos abordado en el debate en comisión. Quedó claro que las obras sociales tienen expresamente prohibido, por la ley 23.660, realizar aportes a partidos políticos.

Fíjese, las que no lo tienen prohibido son las prepagas. Pero las obras sociales, que están enmarcadas en la ley 23.660, que reciben los aportes y contribuciones del sistema de seguridad social, lo tienen prohibido. Por eso, lo que hablábamos era de sindicatos, y yo no las mencioné. Sí mencioné que, por ejemplo, puede ser hasta una mutual también vinculada a un sindicato, una mutual de jubilados o una cooperativa, pero a las obras sociales se lo prohíbe su legislación. Como no se lo prohíbe a los sindicatos la legislación específica, que es la 23.551. Y es más, decíamos que los sindicatos tienen el deber de trabajar y propender por el mejoramiento de la legislación; tienen incluso un deber proactivo en materia de actividad política dentro del marco del sistema democrático.

Nada más, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador. Senador Castillo.

Sr. Castillo. – Por el aporte del senador Pais, nos quedamos entonces en la cuestión de los gremios, con lo cual yo sigo teniendo el mismo tema.

Mire, yo lo he dicho varias veces acá. Hay veces que me pasa que no puedo “amar sin presentir”, como es en el tango.

En el año 2003, en este mismo recinto, hemos discutido este tema, y en ese momento había una presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales que hoy sigue siendo senadora, en donde saltó el tema acá de un escándalo político que ocurrió en mi provincia, provincia a la cual yo represento, que terminó con un espectáculo lamentable de urnas quemadas, votos quemados, auspiciado por algunos grupos de choque.

Un gremialista muy conocido, no solo de uno de los grandes gremios sino también de las obras sociales más importantes del país,

era financiado en esa campaña electoral, en forma abierta, tajante. Daba la casualidad de que su esposa era la ministra de Trabajo de la Nación en ese momento. (*Risas.*) Entonces, a ver, con ese candidato del sindicato y esa ministra terminamos con las urnas quemadas en la provincia de Catamarca, con un espectáculo dantesco, con una campaña que fue, diríamos, yo tengo varios años en política, nunca vimos tanto dinero moviéndose, en forma muy...

Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos queda esto de “más vale prevenir que curar”. Diríamos, hay alguna cuestión que siempre queda en esto, y han pasado dieciséis años de aquel entonces, y me parece que muchas veces, desde el punto de vista de la política, no damos las respuestas para tener un cierto grado de tranquilidad.

Desde el punto de vista de la objetividad, yo creo que la norma debería ser –diríamos– en el punto equidistante y coincidir con usted. Ahora, desde el punto de vista de los hechos, de lo que hemos visto, me parece que tener todas las prevenciones no es malo.

De todos modos, esta ley es un gran avance. De todos modos, creo que clarificamos y que la hemos tomado con mucha valentía. De todos modos, también creo que estamos diciendo que no están saldadas todas las deudas que tenemos desde la política con el sistema y con los financiamientos.

Hoy, creo que esta ley es un gran avance. En política siempre se hace lo que realmente está al alcance y se puede. Hasta acá ha llegado el consenso, y eso lo festejo.

Sr. Presidente (Pinedo). – Tal vez no se lleve el voto, pero se llevó la convicción, senador Pais.

Senadora Mirkin, tiene la palabra.

Sra. Mirkin. – Muchas gracias, señor presidente.

Después de escuchar el debate sobre este proyecto, la verdad que tengo que transmitir una sensación: no me voy con la idea de que es un buen proyecto. Me voy con la idea –como dijo algún senador– de que es el proyecto posible.

Pero me llama la atención que, siempre que se habla sobre un nuevo proyecto en esta época del gobierno de Macri, se habla de la mayor

transparencia. Es como si todo ha cambiado, nos miramos en el espejo y está todo tranquilo.

Por ejemplo, el senador preopinante se acordó de Catamarca y del sindicalista Barrionuevo, pero no se acuerda del “Momo” Venegas. O sea, no se acuerda del que apoyó a Cambiemos.

Lo que digo es que me llama la atención. Yo soy parte de un sindicato; soy fundadora de un sindicato. Soy fundadora del Sindicato de Amas de Casa, que tiene pago voluntario. No tiene pago por la vía correspondiente porque no tienen salario las amas de casa. Y fíjese: ahora soy candidata en mi provincia y tengo que poner mis recursos. Obviamente, el sindicato me acompaña; mis compañeras me acompañan con su militancia y con sus posibilidades. Entonces, la campaña es mucho más que lo que se puede poner...

Los norteamericanos no son ejemplo, para mi gusto, de lo relacionado con la plata para la campaña. Yo le pregunto...

Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora: el senador Castillo le pide una interrupción.

Sra. Mirkin. – Sí, cómo no.

Sr. Presidente (Pinedo). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Castillo.

Sr. Castillo. – Gracias, senadora.

Sin ánimo de polemizar, no tengo nada en contra de que un dirigente sindical tenga participación política, que ejerza funciones políticas, que sea candidato. Yo he sido gobernador en mi provincia y mi jefe de acción social era un dirigente gremial; hemos tenido candidatos en nuestra fuerza que eran gremialistas. Al contrario, muy al contrario: son parte de la sociedad, militan en política, tienen sus valores.

Yo solamente hice referencia –usted dio el nombre, no yo– al sindicalista porque se terminó con urnas quemadas, votos quemados, con prácticas que no fueron democráticas.

En alguna medida le doy la razón a lo que dijo Mera. Es decir, nosotros muchas veces nos vamos por el “fulano de tal”; pero yo no ataco a la institución. El sindicalista es parte de nuestra sociedad y si quiere militar, votar y ser candidato, ¡bienvenido sea! Yo me refiero a las malas prácticas y a la financiación no controlada.

Con todo respeto, le doy las gracias, senadora.

Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Mirkin.

Sra. Mirkin. – Agradezco que me dé las gracias, pero me da más razón.

A ver: si un sindicalista, un dueño de una prepaga, un supermercadista que no es proveedor directo del Estado, pero que es mayorista y que provee a otros... Mire: yo tengo experiencia también en la función pública siendo ministra y comprando; y sé cuándo se arreglan las licitaciones; sé de los acuerdos de precios; y gana uno y después gana el otro. O sea, lo que quiero decir es que no se puede plantear un panorama como si ahora saliéramos todos bien peinados, bien arreglados, somos todos buenitos, porque hemos sacado una ley de financiamiento de los partidos políticos como si antes los partidos políticos, ¡o los mismos políticos!...

A mí me da la sensación permanente de que se está actuando contra la política; la política es como algo sucio; y el resto de las actividades o funciones de los seres humanos en otras áreas, esto está bien. El comerciante, el profesional, el de las asociaciones profesionales, ¡esos son impolutos! Y los sindicalistas la verdad es que serían una especie de mala palabra; serían algo reñido con lo legal. Obviamente, por lo que he dicho, no comparto eso.

Estoy acostumbrada a militar en política poniendo plata y no sacándola. Milito desde los catorce años. No sé si algunos de los que están acá han visto el planograf, un sistema mediante el cual uno hacía los carteles. Se armaba todo con madera y pasábamos un secador de piso con pintura; después, todos los pisos de los partidos políticos estaban llenos de carteles. También hacíamos los lápices con sebo de vela, íbamos a pintar las paredes... No nos daban un mango. Ahora, ¿qué había del Estado en ese momento? Había los pases de los partidos políticos. Teníamos pases en avión, pases en tren –en el caso de Tucumán, había un tren que iba al sur de la provincia– y pases en ómnibus. Con eso aportaba el Estado. El resto tenían que bancárselo los partidos.

Siguieron otras leyes y otras cuestiones de mejoramiento, y tuvimos la posibilidad de tener una ley que otorgaba un porcentaje de los minutos de televisión y radio –de los medios de expresión–, gratuitamente y en igualdad de oportunidades, a todos los partidos políticos.

Por ejemplo, hoy se está realizando la campaña en Tucumán. Se vota el 9 de junio; no hay PASO. La campaña es provincial; y, obviamente, como en todos lados, hay televisión, radio, cartelería pagada, cartelería en lugares que no es paga, cartelería —como habrán visto acá— anónima contra uno de los candidatos: o sea, hay de todo. ¿Y saben quién participa, por ejemplo, en una cartelería anónima? Un sindicato —gente de un sindicato—; y hay gente de otro sindicato que acompaña. Quiero decir con esto que no es una organización. No comparto bajo ningún punto de vista que un sindicato tenga que estar fuera de todas las normas; que a todo el resto se le permita, que a todas las asociaciones se les permita, pero a los sindicatos no.

Por ejemplo, en cuanto a las empresas de medicamentos: ¿ustedes se imaginan cuánto cuesta un medicamento y cuánto pueden aportar a los partidos políticos, a los que están en la gestión de gobierno, en forma directa o indirecta? Porque si nosotros creemos que esta ley se va a cumplir al pie de la letra, creo que estaríamos cometiendo un gran error.

Voy a leer un artículo y les daré un ejemplo. Les aclaro que votaré favorablemente, salvo el artículo que firmé en disconformidad y que pasaré a leer. El artículo 9° dice así —siempre en difícil, como hablan los abogados—: Incorpórese como artículo 16 quáter de la ley 26.215 el siguiente: Artículo 16 quáter: Aportes en especie.

Ya el nombre —la verdad— me resulta horrible. Yo les pregunto: hay partidos políticos que hacen cenas y hay un amigo del candidato, o del partido, que les regala el *catering*; pero al que va a la cena le cuesta. ¿A dónde va esa plata? ¿A dónde figura? ¿Cómo está registrado por el partido político? No está registrado, ¿no es cierto? No hay trazabilidad de los recursos. Cuesta 10.000, 20.000, 30.000 o 50.000 pesos; estar sentado en la mesa presidencial cuesta hasta 500.000 pesos. ¿Cuánto ha costado? Supongamos que no le dan el *catering* gratis, que tenga que pagarlo el partido político; pero no cuesta eso una cena, un cubierto.

Entonces, dice así: Los aportes que consistan en la prestación de un servicio o la entrega de un bien en forma gratuita serán considerados aportes en especie. Cuando el aporte supere los cinco mil módulos electorales se hará constar en un acta suscripta por la agrupación política

y el aportante. En esta acta deben precisarse los datos de identificación del aportante, del bien o servicio aportado, el monto estimable en dinero de la prestación y la fecha en que tuvo lugar.

Trazabilidad no hay, transparencia menos.

Yo les digo: dentro de dos semanas están invitados todos los que quieran, tengo una chori-paneada en Tucumán. Me río porque es verdad; están donados el chorizo, la gaseosa y el pan. Nosotros ponemos algo, pero esta es la verdad. Ahora, ¿dónde figura ese aporte? Porque dicen que algunos partidos damos choripanes y alguna otra cosa; otros partidos darán hamburguesas McDonald's, no sé.

Lo que quiero decir es que se ponen como muchas cosas y después son de imposible cumplimiento. Y yo prefiero, como dije, que haya trazabilidad.

Porque, ¿saben qué? Acá este año salió en discusión —y ahora no se discute más; por lo menos no está en los medios públicos— que el financiamiento en la provincia de Buenos Aires por parte de Cambiemos ha tenido el financiamiento de plata que ha ingresado al banco —en un mismo banco, en un mismo cajero, en dos cajeros paralelos— muchísima plata pero de poco monto de gente que, cuando se la va a ver, tiene menores ingresos al monto que ingresó; y que dice que no estuvo en el banco ni aportó. Aquí me hace la acotación el senador País.

Yo digo: es posible que sea esa la situación; se está investigando y es posible que sea de otro partido. Pero, entonces: ¿cómo garantizamos la trazabilidad? Porque si digo que aporté o si hay alguien que dice que no aportó, va y declara, ¿quién es el responsable? ¿El partido político que declara el aporte? La verdad es que yo no veo que el proyecto...

Yo sí entiendo la idea de que hay que fortalecer a los partidos políticos; de democratizar la vida interna de los partidos políticos; de poner la información de los afiliados; no solamente la vida cotidiana, sino los recursos que son usados y en qué.

No estoy de acuerdo en esa idea de que todo es transparente porque tengamos la ley o porque hacemos una ley que es posible, para dejarnos tranquilos. Porque, ¿saben qué? Mañana los diarios van a decir: “Se aprobó en el Senado la ley de financiamiento de los partidos políti-

cos”; se logró mayor transparencia, que forma parte de la transparencia que el gobierno, que vino hace pocos años, logra en varios aspectos transparentar. Y yo no estoy de acuerdo con eso porque no considero que antes no fueron transparentes algunas cuestiones de la política.

La verdad es que, como militante política, siento que se está denostando a la política y se está favoreciendo a otros sectores de la vida nacional que son, parece, carmelitas descalzas. La verdad es que no comparto ese punto de vista.

Entonces, yo estoy de acuerdo con que los partidos políticos tengan recursos y estén obligados a la capacitación, cosa que no se hace. Yo estoy de acuerdo en que haya partidos políticos que tengan un ideario –que esa es la razón de ser de los partidos políticos– y que ese ideario se pueda expresar, y que se pueda expresar también en la capacitación, en la formación de cuadros, de militantes de los partidos. No estoy de acuerdo con que yo arme un partido político para presentarme a elección y diga una cosa... Por ejemplo: ahora estamos obligados por la ley a que haya debate presidencial. Ahora, si en el debate no se dice la verdad, después no importa. Entonces, ¿es la forma o el fondo lo que estamos tratando? ¿O la forma hace al fondo, al contenido? Esas son las cosas que yo quiero expresar porque me parece que, si no...

Es verdad que nosotros hemos venido acá porque estaba la ley de financiamiento de los partidos políticos. Hoy estamos acá, un martes de Semana Santa, increíblemente, porque estaba esta ley en debate. Y hay un dictamen de mayoría y hay un dictamen de minoría; los dos dictámenes se dividen en el tema de lo sindical, pero cada vez que uno avanza en el texto...

Por ejemplo, uno dice: Ejercicio contable. El cierre del ejercicio contable anual de los partidos hay que presentarlo el 31 de diciembre. Muy bien. Entonces, andan todos los partidos buscando facturas, boletas. Hay boletas truchas. Ustedes saben que hay gente que vende boletas, ¿no? En la Argentina hay gente que vende boletas; es delito, pero hay. También es un delito que me den dos vacas para que haga un asado y le ponga valor a la vaca; aunque a mí me la hayan donado y yo la presente al partido político. Es delito. Pero, bueno: hay delitos que se cometen; y esto es lo que yo quisiera poder expresar. Cosas que no aparece en el fondo sino

en la forma. Pero el proyecto de ley le da ese resquicio para que parezca que está bien cuando no está bien: está mal.

Esas son las cosas que quería expresar porque no me voy contenta hoy con que se apruebe ninguno de los dos dictámenes por más trabajo que realmente hayan tenido en la comisión.

Creo que es importante tener una nueva ley de financiamiento de los partidos, pero creo que es muy importante tener un muy buen sistema de control sobre el financiamiento de los partidos, que no me parece que se controle.

Yo escuchaba anteayer en la televisión –y con esto termino– a la autoridad de la OA que decía que no va a investigar los supuestos... los expedientes de funcionarios de este gobierno; y yo digo que alguien de la Justicia debería haber actuado de oficio; y lo mismo hay que hacer con el financiamiento de los partidos políticos. Tiene que actuar la Justicia, que es el tercer poder del Estado, que tiene mucho que ver en cómo se utilizan los fondos no solo de los partidos políticos: de los sindicatos, de las empresas, de los proveedores del Estado, de las prepagas, de los dueños de los camiones, de los que tienen trabajando más de ocho horas a los trabajadores, de los que ejercen violencia contra las mujeres.

Quiero decir: hay cosas que ocurren todos los días –y que las estamos viendo que ocurren– y nosotros nos quedamos callados frente a esas circunstancias; muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.

Tiene la palabra la señora senadora Rodríguez Machado.

Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, presidente; le pedí al senador Ángel Rozas simplemente unos segundos y me permitió una interrupción, le agradezco.

Simplemente para hacer una aclaración: yo fui responsable financiera de rendir fondos en campañas electorales y cuando se producen... Digo, porque hay que dejar en claro también que las cosas bien hechas están hechas en los partidos políticos. Cuando se recibe una donación –a nosotros no nos donaron una vaca, sino algo más blandito como un novillo, por ejemplo, o un local para alquiler– lo que se debe hacer y lo que hace –por lo menos, lo que va a hacer esta ley– es que uno le pone un valor en dinero de mercado. Eso se rinde como una donación.

También hay que dar el origen de los fondos y forma parte del total de los fondos que un partido político destina para la campaña. Se considera aporte en especie donado y hay que ponerle un valor; pero es legítimo. Lo que es ilegítimo es no declararlo: es decir, hacer una “choripaneada” y no decir de dónde vinieron los chorizos; o hacer un asado y no decir quién te donó la vaquillona. Pero, una vez que se produce una donación en especie —es muy habitual que alguien preste un local; o que, para una comida, alguien te done el vino o las gaseosas—, hay que darle el valor real de mercado, informarlo a la justicia electoral y decir quién donó esos fondos: de esa manera se transparenta; nada más; gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). — Gracias, senadora. Senador Rozas.

Sr. Rozas. — Gracias, presidente

La verdad, estamos abordando una cuestión clave para la integridad electoral y para la calidad democrática, como es el financiamiento a los partidos políticos y a las campañas electorales.

No coincido con la senadora preopinante; si bien respeto, lógicamente...

Sr. Presidente (Pinedo). — ¿Con la senadora Rodríguez Machado? (*Risas.*)

Era un chiste...

Sr. Rozas. — Usted no vio que yo miré hacia la bancada justicialista. (*Risas.*) Gracias, presidente.

No, me refiero a la senadora Mirkin.

Creo que es un avance importante. Lo que sí entiendo es que es probable que mucha gente, o una parte importante de la sociedad, no coincida con nosotros en esta circunstancia por el contexto económico y social que está transitando el país. Es probable que gente que no llega a fin de mes diga: “Esto no es prioridad circunstancialmente para mí”. Desde su punto de vista lo entiendo, lo comparto; pero creo que nosotros debemos actuar también sin hipocresías y saber que este es un aporte importante a la calidad democrática, a la vida de los partidos políticos y a la transparencia que necesita cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo necesita transparencia en el funcionamiento pleno de los partidos políticos y de las campañas electorales; y hay que hacer lo que hay que hacer.

Personalmente, estoy convencido de que es un buen aporte el que estamos haciendo. Repito: tiene que ver con saber el origen y el destino de los fondos.

Por supuesto que es verdad que puede no cumplirse la ley: siempre tenemos esa posibilidad. Conductas delictivas hay siempre. Ahora, las leyes se hacen pensando que la gente va a actuar con conductas razonables dentro de la convivencia normal de un país. ¿Si alguien quiere infringir esta ley lo puede hacer? ¡Claro que lo puede hacer! Y si en vez de hacer el aporte con límite, como fijamos nosotros, en el 2 por ciento, por debajo de la mesa quiere poner el 20 por ciento, ¿lo puede hacer? ¡Sí, lo puede hacer! Pero eso ya corre por cuenta y orden de la conducta delictiva de quien lo haga. No es producto de que esta ley no sea una buena iniciativa legislativa. Para mí es una buena iniciativa legislativa porque se pone de manifiesto la trazabilidad de los fondos.

Y después, ¿está mal o está bien el aporte privado? Personalmente, coincido —por eso voy a acompañar el proyecto— en que el aporte privado es bueno. Lo que hay que hacer es ponerle límites y lograr que la política no dependa del dinero. Ya decía Max Weber —no es nuevo— que la política no tiene que depender del dinero. Entonces, le ponemos un límite y sabemos, además, quiénes son, quiénes pueden aportar y quiénes no pueden aportar a las campañas políticas o a los partidos políticos.

Acá lo que se busca es transparencia y, además, equidad electoral. Por eso, también es importante el acompañamiento del Estado; porque, si no, alguien puede tener una idea brillante desde el punto de vista democrático, puede ser un gran candidato, pero si no tiene igualdad de oportunidades con otros candidatos que tengan muchos recursos económicos, le es imposible competir. Esto también hay que ponerlo como un factor de equilibrio en las democracias. Para mí, esto es fundamental también.

Entonces, ¿en dónde radica la cuestión, a mi criterio, para que termine siendo efectiva la legislación? En los controles. Este es el problema histórico en la República Argentina: los controles fallan. No falla la ley, ni la iniciativa de un legislador o del Poder Ejecutivo: fallan los controles; y los controles tienen que ser severos.

Nosotros tomamos acá medidas donde se amplía el cupo del Juzgado Electoral, si mal no recuerdo, aumentando en 8 la composición del Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Electoral. Esto también lo reclamaba permanentemente dicha cámara.

Entonces, para concluir el concepto y noirme en el tiempo: creo que es una buena iniciativa porque, en cualquier lugar del mundo donde haya democracia, naturalmente hay partidos políticos; y, si hay partidos políticos, tiene que haber fondos para la capacitación y naturalmente tiene que haber fondos para las campañas electorales. Esto es al margen de que me pueda agradar a mí o no. Sucede en el mundo.

Ahora, si nosotros no transparentamos de dónde vienen los fondos y quiénes pueden ponerlos, y autorizamos a que el Estado sea uno de los contribuyentes, tenemos que ser categóricos. La plata de algún lado sale en la campaña. Si nosotros no hacemos lo que estamos haciendo, corremos el riesgo de que suceda lo que hemos visto en otros países donde el financiamiento proviene del narcotráfico o de las organizaciones criminales. ¡Eso sí es tremendo para cualquier país o cualquier democracia en el mundo!

Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de poner transparencia al tema del financiamiento político; y creo que la propuesta es correcta, es buena y la voy a acompañar.

Para no pasarme de lo establecido, termino con esto.

Con respecto al tema de los sindicatos y de las asociaciones profesionales, estoy en contra de que puedan hacer aportes. Y para mí no es lo mismo el aporte de un sindicato que el de un supermercadista, porque el supermercadista es dueño de su supermercado y, si quiere poner el 2 por ciento para el partido peronista, que lo haga; si lo quiere poner para Cambiemos, mejor; y si lo quiere poner para el Partido Comunista, que lo haga. Ahora, el sindicalista no maneja fondos de él: maneja fondos que pertenecen a los afiliados al sindicato; y los afiliados al sindicato son radicales, peronistas, socialistas, comunistas, del PRO, del socialismo. Esto es así.

Ahora, en la Argentina pasa –no me molesta, lo respeto– que en una altísima mayoría coinciden, trabajan y se manifiestan a favor del partido peronista –repito: no me preocupa–; pero no

hay que confundir al dirigente con la masa de afiliados del sindicato. Eso no significa que si el sindicalista que conduce ese sindicato es de un partido político, nos confundamos con que todos los afiliados a ese sindicato son de ese partido político. ¡No lo son! Serán, quizá, un número menor, sí, pero no son todos. Hay diversidad. Esa es la característica de los sindicatos en el mundo y acá en la Argentina, también.

Entonces, ¿por qué vamos a permitir que un sindicalista que conduce accidentalmente, o aunque venga conduciendo hace cuarenta años el sindicato, decida, con la plata de todos, dónde va a poner su dinero? Por consiguiente, nos dicen: “¿cómo puede ser que a los sindicatos les pongan esta negatividad y dejen a otras instituciones o a otros empresarios que hagan lo contrario?”. ¡Porque el origen de los fondos es distinto, repito, absolutamente distinto!

Para terminar –y no reiterar todo lo que se ha dicho aquí, que ha quedado suficientemente claro–, hay un tema que sí me parece importante, es muy cortito y lo voy a decir con precisión.

Con relación al destino de la inversión en publicidad digital se fija que un 35 por ciento del total de estos recursos debe destinarse a sitios periodísticos digitales, generadores de contenido de producción nacional y al menos otro 25 por ciento a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y producción provincial, siguiendo un criterio similar al de la coparticipación federal. El objetivo de esta norma es que el gasto digital en publicidad electoral no se destine únicamente a las plataformas de alcance global como Google o Facebook, sino que se asegure una mayor participación de los medios de comunicación nacional y local, así como el desarrollo de la industria cultural de la producción de contenidos nacionales y provinciales.

Creo que también esta iniciativa es excelente porque los medios digitales nacionales y provinciales pagan impuestos aquí en la Argentina, generan trabajo aquí en la Argentina. ¡Google no está acá en la Argentina! ¡Facebook no está acá en la Argentina! Es decir, ingresan, pero no tienen las características de las plataformas digitales propias en el país o de las que existen en cualquiera de nuestras provincias. Entonces, me parece que este es un aporte muy importante.

Y, finalmente, también se beneficia a la televisión y a la radio hacia adelante con una

baja del 10 por ciento actual del tiempo total de programación para fines electorales de los partidos políticos que lo hacen en forma gratuita con las explicaciones que dio hoy el presidente provisional del Senado. Se lo baja del 10 al 5 por ciento, estableciendo que a partir de 2020 un 2,5 por ciento de ese 5 por ciento será considerado pago a cuenta de impuestos nacionales.

Por eso, voy a acompañar esta ley porque, repito como palabras finales, creo que es una muy buena iniciativa que puede ser mejorada, naturalmente, que puede ser modificada en el tiempo naturalmente que sí, pero no podemos dejar de desconocer que es una iniciativa legislativa. Por eso, creo que hemos conseguido un consenso, prácticamente, de todos los sectores políticos.

Personalmente, no estoy aquí exclusivamente porque haya que votar esta ley. Está en el orden del día, me parece importante, coincido con el contenido y la voy a acompañar.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.

No está el senador Martínez.

Tiene la palabra el senador Closs.

Sr. Closs. – Gracias, señor presidente.

Se ha dicho mucho y todos lo han hecho con su punto de vista. Días pasados, cuando se pidió un cuarto intermedio para que esto sea votado junto con la visita del jefe de Gabinete, yo planteé que consideraba que este tema merecía una tarea y un debate mucho más profundo, que se está dando hoy. Y me parece que la palabra “consenso”, de alguna manera, es la que está dominando el debate. Seguramente, si cada uno de nosotros pudiera ejercer de manera individual la tarea legislativa, cada uno tendría una ley muy distinta a la que hoy está saliendo.

Pero, bueno, como es un tema tan discutido, como es un tema donde hay cuestiones filosóficas, ideológicas, de práctica, se ha llegado a estos dos dictámenes, el de mayoría y el de minoría, prácticamente iguales, que hoy estamos debatiendo y está bien que lo vayamos a votar. Y está bien que lo votemos porque la política se merece tener esto en un buen marco y en una buena legislación; porque si no, esta situación de sospecha permanente –que también decía una senadora preopinante– nos termina, de alguna manera, afectando a todos.

Yo creo que se pueden asumir –y ya se ha repasado acá, en el derecho comparado– tres tipos o formas de financiar la política. Aquellas que tienen un financiamiento privado, diríamos muy poco limitados. Se habló mucho acá del caso de los Estados Unidos de América con una muy baja participación o casi nula de financiamiento por parte del Estado. Muchos otros casos de los que también se habló acá, básicamente en Occidente, y también en países como México, de un financiamiento público prácticamente exclusivo. Y, por último, el sistema mixto que, de alguna manera, uno puede ver que es el que estamos adoptando en esta legislación. Un sistema donde el Estado participa con una buena parte del financiamiento y no solamente en dinero, sino también en los espacios televisivos que recién veíamos, en la incorporación de nuevas tecnologías, en las boletas. Y, obviamente, ahora la apertura al financiamiento del sector privado.

Lo que sí veo es que nosotros, para lograr este consenso, hemos logrado un sistema mixto, con financiamiento público-privado; pero al financiamiento privado le pusimos muchos límites, digo, para mi gusto, porque uno tiene que decir lo que piensa y lo que cree, y por una situación no de practicidad, sino porque me parece que el rol del legislador es que tiene que hacer muchas veces que la norma que surja –ese deber ser– sea más parecido al ser, a la situación que se vive de hecho en la política.

Pero, bueno, vemos que hay límites y yo dividía en tres a esos límites que hoy establece nuestra legislación que estaremos votando.

Hay un límite al valor total de la campaña que, en mi interpretación, difiere, depende de las categorías electorales que se vayan a votar.

En estos días se habla mucho de que no habrá elecciones de parlamentarios del Mercosur, lo que a mi modo de ver sacaría bastantes recursos a las campañas electorales. En una campaña en Misiones uno podría decir que el tope de la campaña, del espacio político al que nosotros pertenecemos, no podría superar los 12 millones de pesos. Ese sería, más o menos, el número que da. Pero si uno tuviera, por ejemplo, una campaña en el Chaco, donde se elige senador, ya toma más color y es una campaña de treinta y seis millones de pesos, si hubiera parlamentarios del Mercosur; de lo contrario, perdemos otra fuente de aportes.

Hay un límite también que es al monto del aporte. A mí me hubiera gustado que fuera bastante superior al 2 por ciento, pero, bueno, es lo que se logró en consenso. Me hubiera gustado que fuera mucho menos restrictivo.

Ya vemos dos límites, entonces: hay un límite global a la campaña, que resulta de la diferencia entre ese número global más el aporte del Estado que, a su vez, depende de los votos que se sacó en las elecciones; y tenemos este límite que se está planteando concretamente, de que nadie puede aportar más de un 2 por ciento de ese límite total. En el caso de la provincia de Misiones, a mí me gusta poner ejemplos: más o menos está en doscientos cincuenta mil pesos para nuestro espacio político. Es un límite, para mí modo de ver, bastante bajo; pero, bueno, es el límite del consenso.

Y luego viene un límite bastante discutible, que es el que está dando vueltas acá porque, en definitiva, de alguna manera, el pato de la boda lo están pagando los sindicalistas o los sindicatos, pero es el límite a la persona que está habilitada o no para aportar. Y ahí somos sumamente restrictivos. Y me parece que —y quiero que se me entienda bien—, lo que estamos transformando en deber ser, en norma, dista mucho de lo que, de hecho, es el ser de la política. Entonces, excluimos y decimos que no pueden aportar un montón de personas, que, en definitiva, en la historia de las campañas políticas —me parece que de Ushuaia a La Quiaca— han sido los que de hecho han financiado el movimiento de la política. Pero, bueno, hemos escrito una serie de personas que no pueden aportar.

Yo me imagino que por ahí en la historia de la política un panadero del conurbano bonaerense o un agricultor de Rafaela o una persona que vende indumentaria de pesca en Misiones no aparece en el listado tradicional de los aportantes. Hay otros que históricamente aparecen en el listado tradicional de los aportantes, dentro de ellos los sindicatos que hoy aparecen como que son los que pareciera que separan las aguas en lo que ha sido este casi pleno consenso.

Yo anticipo, aunque mi visión es que los límites debieran ser mucho más flexibles, que obviamente vamos a acompañar el dictamen de la mayoría, porque en esa exégesis que se viene haciendo de que la plata del gremialista o del gremio es en realidad la plata del afiliado,

yo haciendo entonces otro nivel de abstracción, puedo decir que las personas jurídicas que tienen un montón de socios y capaz que un socio es un jubilado y con el mismo criterio tendríamos que impedirle que haga el aporte, porque, en definitiva, es exactamente lo mismo. No viene el señor supermercadista a poner la plata; por ahí viene un señor que tiene un montón y que quizás cotiza en distintos lugares y que tiene muchos accionistas. Entonces, con la misma lógica yo creo que ambos debieran estar permitidos.

Como bien lo planteó el miembro informante, si en una legislación se permite que un lado —es decir, la patronal— pueda aportar; del otro lado se debiera permitir que el sector del trabajo pueda aportar. Pero en todos los casos que se hubieran dado discusiones y debates, nosotros íbamos a acompañar las interpretaciones más amplias, aquellas que limiten lo menos posible el aporte del sector privado.

Quizás —esa es mi propuesta, una que acercamos— lo que sería mejor es que tengamos un sistema mucho menos limitado, pero mucho más informado. Creo que el voto informado es lo que debemos buscar. Nosotros proponemos en el artículo 55 que haya una publicidad y un listado de quiénes son los aportantes, y que esa publicidad y ese listado de quiénes son los aportantes se haga público, así como se hace la publicidad de los espacios políticos. Entonces, el votante sabe quién es el sponsor de tal o cual candidato.

Me parece que el artículo 55 debiera tener la posibilidad de que el miembro informante considere luego un simple agregado que simplemente diga que se ordenará la inmediata publicación de la lista de los veinte aportantes más relevantes. Y sígue el artículo diciendo que esto se deberá hacer público una semana antes de las elecciones.

Por último, algunas cosas que tienen que ver con aspectos buenos. Yo celebro que se imprima la mayor cantidad de boletas. Lo celebro porque es una buena decisión. Si hay una desigualdad a la hora de votar entre quienes tienen estructuras y quienes no las tienen, sabemos que es que la boleta esté o no en el cuarto oscuro. Y eso ocurría hace varias décadas y sigue ocurriendo.

Yo soy un defensor acérrimo del voto de papel. A mí no me van a correr con el hecho de que porque el resultado de la elección se tiene

que saber inmediatamente vamos a quedar en manos de la tecnología y de la informática, porque me genera muy, muy, poca confianza. Prefiero esperar tres o cuatro hora más y que se cuenten.

Ahora, sí creo que esto de dar mayor cantidad de boletas genera una igualdad de condiciones, como también me parece razonable la disminución de la publicidad del 10 al 5 por ciento, porque, en definitiva, la gente queda aturrida, recontra aturrida de escuchar publicidad, y los dueños de las radios de los pueblos –por ejemplo– te dicen: “Si yo tengo que cumplir con toda la pauta publicitaria y tengo que, a su vez, pasar la publicidad de mi anunciante, no me queda tiempo para desarrollar el programa”.

Los que anduvimos haciendo campaña –a mí me tocó en 2017–, me pasó que estás en pleno reportaje y te termina diciendo el periodista por lo bajo: “Che, te tengo que cortar, porque sí o sí tengo que cumplir la pauta”. La pauta que por ley le obligamos. Después, al ratito, te dice: “Che, sí o sí tenemos que cortar de vuelta el reportaje porque tengo que cumplirle a mi anunciante porque, si no, se me ofende”. Entonces, un 5 por ciento me parece razonable.

Por último, yo creo que hay algunas cosas que no tienen que ver con esta ley, pero que merecen un debate muchísimo más profundo, y que hacen al financiamiento de la política y a la calidad de la democracia que tanto nosotros buscamos y apelamos.

Muchos dijeron acá que la boleta única sería una enorme solución a los costos de la política. Una enorme solución. Ya hay provincias que la están usando, y tendríamos una fuerte disminución del costo de la política. Yo soy un defensor de algo que lo veo en las dos fronteras. Yo digo que los brasileros y los paraguayos lo pudieron hacer; uno, con un sistema, una forma de Estado más unitaria y el otro con un sistema federal parecido al nuestro, y creo que esto tiene que ver con la unificación del cronograma electoral.

La República Argentina vive una comparsa de federalismo. Todo el mundo desdoblamos las elecciones o las juntamos, dependiendo de las conveniencias temporales. Saben ustedes –y esto es así– que nuestros dos vecinos que los conozco, Brasil y Paraguay, han llegado a un consenso, siendo federal el Brasil y de prácticas mucho más federales que nosotros, donde en un

mismo día se elige al presidente de la República con todos los gobernadores, con un régimen electoral parecido y con segunda vuelta en cada uno de los estados, y en otro año y en otra fecha distinta se eligen todos los intendentes. Eso hace a la calidad democrática.

Y lo mismo ocurre en Paraguay. En un mismo día se elige al presidente con los gobernadores –gobernadores que tienen muchísimas menos atribuciones que las que tienen en la Argentina– y otro día distinto, en otro año distinto, se eligen los intendentes, y eso genera sin duda alguna mucha más transparencia y, por sobre todas las cosas, previsibilidad al sistema electoral.

Digo previsibilidad porque el problema de los sistemas electorales y de las leyes de financiamiento y de todo es que merecen de nosotros, de la clase política, una autocritica. Porque cuando estamos en el gobierno y tenemos el poder, tenemos una enorme tentación a ir adecuando esa legislación a lo que a nosotros nos conviene. Y digo “tenemos”, porque yo no tengo autoridad para decir: “Este es el mejor sistema”, porque convoqué dos veces a elecciones y una vez las junté y otra vez las desdoblé. “¿Y por qué lo hacés?”. Por conveniencia y oportunidad política, como lo hace ahora el presidente que por una situación compleja –para mí básicamente de la provincia de Buenos Aires– elimina el esquema de las colectoras.

A mí como espacio político provincial me preocupa muchísimo esto de la eliminación de los colectoras, y no tiene nada que ver con esto del diseño de Buenos Aires, sino que tiene que ver con que como espacio provincial en alguna oportunidad por ahí nos gustaría tener un referente nacional. De la forma en que está planteado, por ahí terminamos siendo obligados siempre a estar con boleta corta.

Pero la conclusión es que desde la política cuando tenemos poder, muchas veces terminamos adecuando el sistema electoral y también en este caso la ley de financiamiento a las cosas que nos terminan conviniendo.

Por último, pido que se tenga en cuenta la posibilidad de esta incorporación de este párrafo en el artículo 55 si es posible; lo que abunda, no daña. Vamos a acompañar este proyecto, sabiendo que ha sido el resultado de un consenso y que, por lo menos, pone reglas claras para saber cómo nos tenemos que mover. Ojalá que este

deber ser sea cumplido en lo máximo posible y que sirva también para que la política recupere prestigio. Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Solanas.

Sr. Solanas. – Gracias, señor presidente.

A nosotros nos ha causado una enorme sorpresa, desagradable sorpresa, porque hemos escuchado tantas voces esta tarde coincidentes en elogiar este proyecto de la mayoría que nos plantea muchísimas preocupaciones.

Como muy bien lo dijo mi compañera, la senadora Odarda, autora del excelente proyecto de la minoría, esta es una ley fundamental, pero no solamente es una ley fundamental relacionada con la calidad de la democracia, sino que el proyecto de la mayoría es un proyecto profundamente peligroso, señor presidente.

Estamos ante una nueva vuelta de tuerca o, mejor dicho, de una vuelta hacia atrás, degradante de la calidad de la democracia.

Estamos ante la privatización de la política, nadie da algo a cambio de nada. Acabemos con ingenuidades.

La verdad, hemos escuchado discursos de una ingenuidad extraordinaria. Son todos buenos. Son todos buenos en esta Argentina tan degradada, señor presidente. Una Argentina que en las últimas décadas ha sido incapaz de afrontar los grandes problemas nacionales. Y no hemos ido hacia adelante en la calidad de la democracia argentina; hemos retrocedido, señor presidente.

Los índices de corrupción son muy grandes y mucho más grandes los índices de pobreza. En esta fábrica de comida, hay millones de argentinos y de indigentes que hoy su problema es poder comer diariamente.

Estamos en una Argentina que la han endeudado hasta los huesos.

Entonces, esto es preocupante. Ahora, directamente, los grupos empresarios, nacionales o extranjeros, pueden oficialmente financiar la política nacional. ¡No, pero es el 0,2 por ciento o el 2 por ciento!

Los grupos económicos son una seguidilla de muñecas rusas –digamos–, de empresas, son *holdings*.

Entonces, señor presidente, acá ponemos a la política en dependencias del mandamás, que es el que la sustenta y la financia.

En este país de pobreza, lo que más nos debería preocupar es cómo limitamos la publicidad en la política. Es inmoral que en la Argentina se gasten 70, 80 o 100 millones de dólares en una campaña política. Yo no lo he escuchado a esto.

¿Cuál es la defensa y cuál es el instrumento que le queda al ciudadano de a pie?

¿Cuál es el arma que tiene el ciudadano para incidir en los cambios políticos si no es el voto, señor presidente? Pero no, ahora el voto está en dependencia, es rehén de la corporación que financia al partido político. ¡Bravo estimados colegas!

Ahora vamos a legalizar que tendremos un grupo Techint, un grupo Panamerican Energy, un grupo Shell, un grupo JP Morgan, un grupo Roggio, etcétera.

¿Podremos ordenar el sistema de los supermercados donde son prontos en actualizar los precios en cada corrida del dólar, pero nunca a la baja cuando el dólar empieza a bajar? ¿Cómo va a ser esto?

Por supuesto, es tal la degradación política y en la conciencia ética argentina que esto se discute cuando ya estamos en plena campaña electoral y están votando en varias provincias.

Esto es una farsa, señor presidente. En todas las elecciones sucede que se modifica la ley electoral a la medida de quien manda. Ahora se modifica la ley de las colectoras, luego de que la usaron en Formosa, Jujuy y en otras provincias. Y me refiero al partido gobernante.

Entonces, estamos en problemas, señor presidente.

La democracia se sustenta en la igualdad y en la libertad que tienen los ciudadanos. Y la única arma que tiene es el voto.

Ahora, ese voto y su partido político, porque, como bien se dijo, el artículo 38 de la Constitución pone a los partidos políticos en la centralidad del sistema democrático, serán rehenes de las corporaciones y los candidatos, voceros de las corporaciones.

Entonces, señor presidente, yo creo que estaremos en la legalización del festín de la patria contratista.

Esto, lamentablemente, creo que hiere profundamente a la democracia argentina.

Para terminar, señor presidente, diría que aquel párrafo que le dedica el proyecto mayoritario a prohibir en los últimos quince días de campaña la publicidad oficial de los actos de gobierno, la verdad también es una burla al ciudadano.

No queda otro camino para la democracia que el autofinanciamiento de los afiliados, del pueblo, de sus simpatizantes, limitado y con depósitos o transferencias bancarias con pleno control de su origen. No queda otro camino que el aporte estatal y público al financiamiento de la publicidad, absolutamente acotada. Porque le repito: es muy raro que no se haya desarrollado este tema de cuáles son los topes grandes generados de los montos que se van a estar invirtiendo en publicidad.

En consecuencia, señor presidente, defendemos el proyecto de la minoría que pone límites a todos estos temas y prohíbe taxativamente toda financiación empresarial o de fundaciones en la vida política del país.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra el señor senador Romero.

Sr. Romero. – Señor presidente, colegas: sin dudas que este es un avance, un tema importante.

La política se hizo costosa, es costosa. No vamos a caer en la nostalgia de los cuentos de los abuelos de las campañas de tiza y carbón. Yo no sé si eso alguna vez existió.

Por supuesto, en el caso de mi provincia, si eran 200.000 habitantes, era más fácil para cualquier dirigente político conocer a 80.000 o 100.000 personas y con eso ganaba. Pero se hizo grande.

Ya hoy día en mi provincia hay en el padrón un millón de votantes. Yo empecé haciendo política con un padrón de 500.000 o 600.000.

Hay varios sistemas. Este es un sistema mixto porque permite aportes estatales, como la impresión del voto, los espacios publicitarios, que es una forma donde el Estado les saca el espacio a los medios de comunicación, que son concesiones del Estado, y hay algunos avances más.

En mi provincia pusimos el aporte en dinero por ley según los votos. En su momento, había convertibilidad y era un dólar por voto.

Hoy, si hay un millón de votantes y votan 800.000 votantes, serían 800.000 dólares. Igualmente, no alcanza. Creo que hoy 800.000 dólares en una campaña para todas las fuerzas políticas no alcanza.

La otra sería que el 100 por ciento lo financie el Estado. Pero acá es un sistema mixto. Es un poco la tradición argentina.

Yo no voy a caer en la negatividad de pensar que aquí aprobamos leyes que son para no cumplirse. Tenemos que partir del principio de que las leyes son para cumplirse.

Yo recuerdo una campaña nacional en la que participé hace muchos años y nos pasamos varios años explicando en la justicia electoral aporte por aporte. Y lo mismo le pasó a las otras fuerzas que compitieron con nosotros. No es tan fácil. Y con esta ley se va ajustando un poco la vuelta de tuerca.

¿Nos sorprende el aporte de los empresarios? Siempre la fuente cercana eran los empresarios, pero ahora va a estar blanqueado. Esa es la diferencia. Y va a haber rendición por la guita; establecía la rendición. Es decir, no solo se tienen que preparar los balances que siempre hacen los partidos, sino que tienen que rendir cuentas de las campañas. El artículo 11, que sustituye al 23 de la ley, dice que tienen que presentar listas completas de las personas humanas y jurídicas; que deben poner a disposición de la Justicia la documentación.

O sea, yo creo que hay avances en la transparencia. El aporte bancarizado es un avance. Y yo estoy confiado en que la Justicia va a controlar. Seguramente, en algún lado algún bandido podrá... Bueno, eso pasa todos los días con todos los temas, pero no voy a pensar que la minoría que comete delitos se va a convertir en mayoría. Yo no creo en eso; no tengo una visión tan nihilista del mundo y del país, por más crisis que tengamos.

Coincido con el senador Rozas en que nuestras fallas son los controles. Pero ya lo decía el general Perón: el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Entonces, no tenemos que asustarnos.

En cuanto a las prohibiciones de la modificación de la ley 26.215, esa ley no es de la década infame ni nada. Néstor Kirchner estaba en el gobierno cuando se aprobó esa ley: se aprobó en diciembre de 2006. Y ahí estaba la prohibición de los sindicatos de poner plata. ¿O es invento nuestro esto de que los gremios no pueden poner plata? Ya es la tradición argentina. Y ahora nos rasgamos las vestiduras con esto de los gremios.

Ahora, yo aclaro: hice política toda mi vida en mi provincia. A los compañeros sindicalistas nunca les sacás una moneda, porque no tienen, seguramente. No les sacás una moneda. Sí, parece que ayudaban históricamente los sindicatos. Si eran afines al justicialismo, ayudaban con movilización, movilidad. Pero también es cierto que el sindicalismo de hoy tampoco es el sindicalismo de la década del cuarenta, con capacidad movilizadora. Están preocupados por preservar las fuentes de trabajo, luchar por el salario. Son temas más concretos.

Yo no creo que prohibir el aporte sindical sea una pérdida para los partidos políticos, pero sí contribuye a la transparencia. Y voy a dar mis motivos.

Acá están prohibidos los aportes anónimos, los que no sean bancarizados, los de las entidades públicas. Los contratistas están prohibidos expresamente, los que cobran del Estado. Está prohibido. También está prohibido que aporten los que tienen concesiones de juegos de azar, los extranjeros, los gobiernos extranjeros, las empresas extranjeras. Entonces, yo creo que se ha tratado de que no se escape nadie. Los imputados, los condenados, las acciones sindicales y patronales.

Yo estoy de acuerdo en que no comprometamos a las entidades gremiales. No es una empresa que maneja fondos privados. Tiene dos cosas una organización gremial: primero, que no se puede uniformar a todos los afiliados por la adhesión de la comisión directiva; y, segundo, recibe fondos públicos. Miren si reciben fondos públicos que hace poco, la semana pasada, las obras sociales sindicales recibieron 13.000 millones de pesos, 14.000 millones de pesos de obras sociales y 18.000 de otras deudas. Hay un tire y afloje con este y con todos los gobiernos, y un tironeo por recursos. Entonces, saquemos ese tironeo del riesgo del financiamiento político para bien de todos: de las propias organizacio-

nes sindicales y de los propios funcionarios, que no se van a ver tentados a cometer irregularidades, ni a pedir plata de campaña a cambio de pagarles deudas.

Yo tengo acá una lista de países donde los sindicatos tienen una prohibición de aportar a los partidos políticos. El 69 por ciento de los países que están en esta lista lo tienen prohibido; en el 24, solamente, está permitido. Entre los países que lo tienen prohibido figura, por la "A", después de Afganistán, la Argentina; pero también están Bélgica, Chile, Costa Rica, Francia, Alemania, Luxemburgo, México, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos. Es el sistema que existe en muchísimos países. No sé si estarán los 200 países acá, pero, de esta lista el 69 por ciento lo tiene prohibido.

Eso es en cuanto a la prohibición de donar a los partidos políticos, pero también está prohibido donar a los candidatos en el 65 por ciento de los países, casi los mismos de la lista anterior. Solamente el 28 por ciento de esta lista lo permite.

Entonces, no es cierto que estamos escapándonos del mundo y que queremos establecer una rareza persecutoria. Es lo que había en la Argentina y es lo que hay en muchos lugares del mundo. Y creo que, habiendo hecho una lista tan importante de limitaciones a las donaciones y a los aportes, la rareza sería que después, como pone tantas limitaciones este artículo, que es el 15, tengamos exceptuados a los sindicatos, a los gremios y a las obras sociales, obviamente, que dependen de los gremios.

Por lo tanto, no está muy clara la línea divisoria organizativa entre la actividad gremial puramente y la actividad social de obra social. No está tan clara, no están tan divididas las aguas ni hay esa autonomía. Por lo menos, a mí no me consta que hubiera una autonomía. Entonces, saquemos la tentación, cumplamos con el apotegma del general Perón —el hombre es bueno, pero si lo controlamos es mejor— y tratemos de que esta ley se cumpla una vez aprobada.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). Gracias, senador.

Senador Pichetto: tiene su cierre.

Sr. Pichetto. — Muchas gracias, presidente; brevemente, porque venimos de un largo debate

con este tema en el ámbito de la comisión, donde han habido esfuerzos importantes para tratar de consensuar una ley de financiamiento de los partidos políticos.

Este tema tiene, indudablemente, un trasfondo en los problemas que tienen los partidos para poder demostrar después, en sus respectivas rendiciones, los gastos de campaña. Hemos visto en la campaña electoral última, de 2017, inconvenientes en el oficialismo. Hay rendiciones pendientes todavía del año 2015 de los principales partidos mayoritarios de la Argentina. Y hay también en el sistema electoral una gran hipocresía, porque todos sabemos que los recursos que se gastan son ingentes. Hay mucha inversión, incluso, en infraestructura pública, en cartelería, en gastos de comunicación. Y luego, por supuesto, los números no cierran. Les resulta muy difícil a los partidos poder acreditar de dónde salieron esos fondos.

Hay un riesgo, para mí, mucho más grave, de una mayor entidad, que está agobiando a muchos países latinoamericanos, que han pasado por el financiamiento de las organizaciones delictivas en los partidos políticos y en los procesos electorales. Colombia, en la década de los noventa, con el narcotráfico, había inficionado los dos partidos o los tres partidos. Hay que recordar que Escobar Gaviria, una de las figuras más emblemáticas del cartel de Medellín, el jefe del cartel de Medellín, había sido elegido diputado suplente, que tiene un rango totalmente distinto al concepto de suplencia que tenemos en la Argentina. Escobar había jurado y asistía de manera reiterada a las sesiones del Congreso bogotano, de Colombia. Además, había sido una de las figuras importantes de una de las divisiones del partido liberal. Y los fondos del narcotráfico nutrieron, fundamentalmente, la estructura de todos los partidos políticos colombianos.

También pasa en México, en donde la estructuración del partido único, del PRI, también fue infectada por la plata del narcotráfico. Es uno de los temas que agobia a la democracia mexicana. El resultado último, reciente, con el triunfo de López Obrador, implica una reacción del pueblo mexicano frente al aparato del PRI mexicano, que es un aparato electoral aceitado y que, pese a los recursos del Estado, a la estructura del Estado, salió tercero en la última elección,

terminando un ciclo decadente y de fracaso de Peña Nieto.

¿Qué quiero decir con esto? Que en la Argentina, aun cuando no se diga con precisión y con fuerza, el riesgo es que el financiamiento oscuro de las campañas políticas pueda ser realizado por el narcotráfico. Este es un riesgo que tiene el sistema de partidos y el sistema democrático en la Argentina, que empieza a verse y a analizarse en el desarrollo de elecciones municipales. Por ahora, aborda la problemática de municipios, en zonas complejas donde el narcotráfico tiene desarrollo, en donde hay distribución, en donde está la ruta de la marihuana, en donde hay pueblos donde los intendentes están ligados al delito del narcotráfico. No voy a mencionarlo, porque no quiero acá hacer ningún tipo de persecución, pero hay un proceso abierto y todavía no se ha dirimido la responsabilidad de un importante intendente de una ciudad importante de la provincia de Entre Ríos, que está siendo sometido a juicio con relación a este tema, en donde la plata del narcotráfico ha entrado en los procesos municipales.

Por lo tanto, como el sistema es insuficiente, porque los aportes del Estado no alcanzan a comprender todas las demandas y porque las campañas tienen un costo, es importante imitar a algunos países desarrollados que han logrado resolver en parte esta cuestión. Siempre hay inconvenientes, aun cuando tengan una buena ley de financiamiento, pero Francia tiene una buena ley. Sin embargo, Sarkozy tuvo problemas con la viuda de L'Oréal, quien le dio plata ilegal por encima de los requisitos que exigía la ley francesa.

Y en la campaña española reciente ha habido casos resonantes, como el caso Bárcenas o el caso Gürtel, que demuestran el sistema de financiamiento ilegal del Partido Popular español, donde tuvo que irse precisamente Mariano Rajoy, que era el primer ministro de España, quien tuvo que renunciar —era presidente del gobierno— cuando eclosionó el caso Gürtel y el caso Bárcenas se puso en descubierto, con un sistema de financiamiento ilegal.

Si analizamos la base del “Lava Jato”, también allí está el financiamiento ilegal de todo el sistema de partidos brasileños, más allá de poder ahí analizar de qué forma o cómo se manejaba la obra pública y la concentración de mega empre-

sas como Odebrecht o Petrobras, que financiaba prácticamente a todo el sistema político.

Y esto nos lleva a una necesidad en la Argentina, que es implementar un sistema de financiamiento en donde hoy estamos dando el primer paso; un paso significativo e importante que permite el financiamiento privado en las campañas electorales, con un límite de las ganancias que tienen las empresas y, fundamentalmente, con un esquema de bancarización. Es decir, la necesidad de que la plata que ingresa a un partido para una campaña electoral esté bancarizada. Yo le hubiera incorporado el elemento de la información; la necesidad de que los candidatos antes del cierre de su campaña electoral, unos treinta días antes, fijen claramente quiénes son los aportantes, para definir hasta el perfil del candidato y cuáles son los intereses que va a sostener en el marco del gobierno. Y no es ilegal esto. No es de ninguna manera improcedente: cuando el ciudadano sabe quiénes son los que lo financiaron, indudablemente, también está definiendo un perfil para su gobierno.

Si determinadas empresas aportan en función de un candidato, que tiene detrás de él definiciones frente a determinadas actividades económicas, no es esto ilegal ni ilícito, sino que está definiendo con claridad quiénes son sus aportantes y va perfilando también cómo va a ser su gobierno, por lo menos en temas centrales.

Quizás no es la mejor ley, presidente. Pero me parece que es el comienzo de un sistema que tiene que ser más transparente, que tiene que estar bancarizado, que tiene que permitir claridad en las rendiciones y que tiene que evitar precisamente inconvenientes a los empresarios que aporten. Si no, terminan todos en la causa “cuadernos”, en donde ahí también se refleja lo que es el financiamiento ilegal o el aporte ilegal, con imposibilidad de ser blanqueado. Y hay procesos judiciales de empresarios o de funcionarios, que están allí siendo investigados precisamente por esos aportes.

Estos son datos de la realidad, son hechos concretos. ¿Y por qué no decirlo acá? Los oficialismos tienen una ventaja comparativa. Ser oficialista en el sistema electoral argentino es una ventaja impresionante: se arranca treinta metros adelante del otro corredor. ¿Por qué? Porque el que gobierna tiene el Estado; tiene los recursos; tiene el esquema de asistencia; hace

política siempre con las obras; se mueve al compás del proceso del gobierno. Esto es objetivo. No estoy haciendo ninguna descalificación. Por eso, cuando analizamos los procesos electorales de los últimos tiempos, en general siempre ganan los oficialismos. Es muy difícil derrotar al oficialismo en una elección de los estados provinciales. Y por qué no decirlo, también a nivel del Estado nacional es complejo. En elecciones de medio tiempo. Es muy complicado.

Por lo tanto, si no hay ley acá esta noche... Yo sé que algunos plantean cuestiones de todo o nada. A mí me gustaría que estén los sindicatos. En el sistema político inglés los sindicatos saben que aportan al Partido Laborista. No es un hecho dramático. No se puede aportar con recursos de las obras sociales porque está prohibido. Tienen un destino específico. Y si lo hacen, cometen un delito.

Pero voy a decir otra cosa más, desde el punto de la experiencia política que tengo: la verdad es que los sindicatos no ponen un peso en las campañas. En la Argentina, por lo menos, los sindicatos son reacios a poner plata en las campañas. Muchas veces ayudan con logística, con afiches. Estoy hablando de la realidad. No estoy hablando de cosas que ocurren en otro planeta. Estamos hablando de cosas concretas, que los que hemos tenido una dilatada carrera política, una trayectoria política, sabemos cómo son. Y no estoy diciendo nada que los ofenda. Estoy describiendo datos objetivos y muy claros, de aquellos que hemos pasado en determinadas campañas electorales por distintos espacios y sabemos cómo funciona el sistema.

Pero tampoco es una cuestión de vida o muerte. Nuestro bloque va a sostener la posición. Si se cae este tema, porque no tenemos los treinta y siete votos –porque se requiere una mayoría especial–, encontremos un camino de salida para poder votar la ley. El éxito del Senado es que tengamos ley y que la Cámara de Diputados la pueda tratar con rapidez, para que haya un sistema público de financiamiento que sea transparente. De lo contrario, los partidos políticos en la oposición..., y seguramente el oficialismo va a tener elementos, aunque también va a tener problemas, porque de hecho los tuvo en la elección parlamentaria pasada. En la construcción de los aportes los tuvo. En esa construcción que se hace con ciudadanos anónimos, que hacen

aportes o cenas que no se realizan, estás ahí en el borde del abismo, siempre transitando la cuerda, porque es muy difícil todo eso.

Y por lo tanto, me parece que el éxito es que haya ley; que tengamos la ley y que la Cámara de Diputados la pueda votar rápidamente para que los empresarios y los sectores interesados en la vida y en el destino de la democracia y del sistema político argentino puedan hacer aportes y no lo hagan con el riesgo de ir mañana al cemento de Comodoro Py, que es el triste lugar donde todas las cosas terminan mal en la Argentina. Ahí está siempre la noche. Acá te votan, está todo bárbaro, te vitorean y después terminás en Comodoro Py.

Entonces, si queremos tener un sistema de financiamiento más o menos razonable para que los empresarios puedan hacer aportes sin el temor de ser mañana procesados, tenemos que tener una ley, que precisamente garantice con claridad y con bancarización los requisitos para que estos empresarios puedan hacer aportes. O las personas físicas. Yo lo vi a Macron en una visita que hizo a Nueva York –y voy terminando– ir a pedir el apoyo de los ciudadanos de ascendencia francesa de Estados Unidos para su campaña con Marine Le Pen y no se puso colorado; y juntó a la comunidad francesa en Nueva York y los muchachos pusieron, lo registraron, y había aportes mínimos que no requerían ni siquiera registro en la ley francesa. Bueno, han aprendido. Tienen un sistema que medianamente funciona.

Algunos sostienen la bandera de lo público, de que el Estado tiene que hacerse cargo de todo; y yo no sé si el Estado tiene que hacerse cargo de todo. Demasiado esfuerzo hace el Estado con la elección primaria, con el tema de la televisión gratuita. Hay un esfuerzo. Yo me quedo más con el sistema americano o con el sistema que tienen los países europeos en términos de la recaudación y en el tema de los aportes a los partidos políticos.

Así que, con estos argumentos y esperando que podamos votar con el número necesario para que tengamos la ley y que Diputados lo trate y aborde con rapidez, estos son los fundamentos por los cuales voy a votar positivamente.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.

Senador Petcoff Naidenoff, tiene el cierre.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Seré muy breve, presidente, porque creo que este debate ha sido muy claro y creo que realmente es un debate importante y trascendente para la propia política, porque tiene que ver con la reforma y para transparentar el sistema del financiamiento de los partidos y de las alianzas electorales y de los candidatos.

Nosotros venimos de un sistema que tiene una reforma que cumple diez años, en la cual en su oportunidad se estableció como uno de los parámetros o ejes rectores fijar un límite al financiamiento privado, para que este financiamiento privado de alguna manera no genere distorsiones en las reglas de juego o en la competitividad electoral.

Pero la verdad es que ese sistema que se trazó allá por 2009 y que fue un sistema mixto, en donde conviven dos filosofías absolutamente distintas, es decir, el financiamiento estatal y el financiamiento privado limitado a lo que tiene que ver con el andamiaje o la vida institucional de los partidos, chocó contra la propia realidad; se quedó a mitad de camino.

¿Y por qué se quedó a mitad de camino? Bueno, es muy simple: porque no alcanza únicamente con el aporte o el aspecto positivo de la reforma de 2009, que tiene que ver con el acceso a los medios de comunicación de todos los partidos en los espacios cedidos a los partidos políticos. Eso fue un avance. Pero, en cuanto al aporte privado, en realidad generó una gran hipocresía bajo el argumento del acompañamiento estatal. Y esa hipocresía termina de la peor manera no solo por el no aval de la rendición de cuentas de los principales contendientes en 2017, por la propia justicia federal con competencia electoral, sino porque los partidos necesitan financiarse.

Y para evitar justamente el temor de lo que se hablaba, que tiene que ver con la plata sucia, con la plata oscura, esa plata oscura generada por el narcotráfico, a mí me parece que es un gran avance, en primer lugar, el aporte de las empresas o de las personas jurídicas privadas en un tope del 2 por ciento.

¿Qué implica transparentar el aporte? Bueno, poner las cosas blanco sobre negro. Esta es una bocanada de aire fresco –esto lo dice un informe

del CIPPEC— para el propio elector. Cuando el ciudadano tiene conocimiento de manera pública de quiénes son las empresas que aportan a un frente electoral, a un partido político, se reduce el margen del propio lobby a la hora de implementar una política pública o a la hora de sancionar una ley.

Siempre se habla de las influencias de las corporaciones. Cuando el sector privado acompaña y aporta de manera no transparente, de manera no pública, lógicamente que también el lobby está a la orden del día; el tema es si tenemos la capacidad de dejar de lado la hipocresía y poner blanco sobre negro.

Bueno, yo creo que esto es un avance. Permitir que las personas jurídicas privadas aporten en un tope del 2 por ciento es dejar en claro lo que ocurre en la realidad; y, por otra parte, también es un alivio para los propios partidos, porque el financiamiento es un gran dolor de cabeza. Es decir, no solamente con una cena...

Lo que se pretendió con la ley generó justamente el efecto inverso a lo que se pretendía, porque la ley posibilita el aporte anónimo, el aporte de particulares en las propias cuentas. Sin embargo, cuando uno mira los aportes de las campañas 2015 y 2013 observa que en esas dos campañas el 90 por ciento fue dinero en efectivo de los partidos políticos. En 2009 creo que fue el 92 por ciento. ¿Y por qué fue con dinero en efectivo? Porque no hay trazabilidad, no hay registro.

Entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora es terminar con el depósito anónimo y bancarizar los depósitos. Tenemos la trazabilidad de quiénes son los que aportan y se va a terminar esta idea del anonimato y, fundamentalmente, del aporte de dinero en efectivo. Porque ahí está el riesgo al que hacía referencia el senador Pichetto, que no solamente se da en municipios limítrofes o comunas chicas, que tiene que ver con la influencia del narcotráfico y de la plata sucia. Venimos de largas historias, y entre aportantes anónimos o desconocidos también la efedrina entró en el juego de la política en la Argentina; y salpica a todos los partidos, porque nadie está exento.

Entonces, cuando algunas se aferran al ideal del financiamiento público en un ciento por ciento, la verdad es que es un ideal, porque si uno mira el relevamiento en el derecho com-

parado, de 180 países —según el relevamiento de IDEA—, el 22 por ciento es financiamiento estatal, el resto permite el financiamiento del sector privado. Esto surge de un relevamiento de 180 países. Y en el derecho constitucional argentino no es obligatorio el aporte estatal, es decir, el Estado contribuye al acompañamiento de los partidos políticos pero no tiene la obligación de sostenerlo. Entonces, creo que nosotros estamos dando un paso. Yo quiero destacar estos dos temas.

Por último, también tenemos una disidencia con el dictamen de la mayoría que tiene que ver con el aporte de los sindicatos. A mí me parece que tienen que estar excluidos por una sencilla razón: una cosa es un empresario que es dueño de sus excedentes y aporta a los partidos que quiere; y otra cosa es un sindicato, en donde uno es afiliado a un sindicato único y una comisión directiva resuelve per se cuando quizás la voluntad de ese afiliado que es parte de ese sindicato no tiene nada que ver para quien colabora el propio sindicato en la vida de los propios partidos.

Entonces, me parece que este es un paso y es un avance. Hay deudas pendientes, claro está. Pero me quiero quedar, como reflexión final, con lo que decía el senador Closs: este federalismo de comparsa o el federalismo de la oportunidad electoral que hoy rige en la Argentina.

Todos los meses tenemos elecciones. La verdad es que se recortan los cierres porque los vuelos y los compromisos de muchos de nuestros pares nos urgen; y a mí me parece que terminar con este federalismo de comparsa también es un abordaje, una reforma política integral en la Argentina.

Las PASO fueron un avance y esto es otro gran avance. Pero eso se deja de lado con acuerdo político; así que, espero que en los próximos debates y en la Argentina que se viene el acuerdo sea la prioridad y este federalismo de comparsa sea parte de la historia, presidente.

Gracias.

Sr. Presidente (Pinedo). — Gracias, senador.

Corresponde autorizar las inserciones y las abstenciones.

Se vota a mano alzada.

—Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta afirmativo.¹

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
RODRÍGUEZ MACHADO

Señora presidente:

“El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades. (Artículo 5º. – De la Carta Democrática Interamericana. OEA).”

A partir del año 1957, la Argentina adoptó el sistema mixto de financiamiento de gastos partidarios y campañas electorales. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 incluyó a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, estableciendo la obligación del Estado de proveer a su sostenimiento económico y la de los partidos políticos de dar publicidad al uso y destino de sus fondos (artículo 38. – CN).

Se trata de un sistema mixto y completo porque comprende el fondo permanente de sostenimiento y también las subvenciones directas e indirectas en las campañas electorales.

En el año 2002 se sancionó la primera ley específica, la ley 25.600, como respuesta a la situación de falta de control que se encuentra claramente expuesta por la Cámara Nacional Electoral en el *leading case* “Incidente de control patrimonial Partido Nacionalista Constitucional” del 21 de marzo de ese año, donde señaló que “entre otras tantas cuestiones que podrían indicarse, se hallan en juego: a) la necesidad de que exista un equilibrio razonable entre los recursos de los distintos partidos políticos en la competencia electoral; b) la fiscalización de la utilización de fondos del erario público; c) el control de posibles prácticas ilícitas de recaudación y contribución a través de vías que la ley vigente, por su imperfección, no alcanza a conjurar –vrg. mediante fundaciones que, al poseer un régimen jurídico especial, podrían permitir a ciertas entidades recaudar fondos de modos que la ley 23.298 limita–; d) la existencia de publicidad encubierta bajo la apariencia de ‘campañas de puesta en conocimiento de las acciones de gobierno’; o, de un modo más genérico, e) el peligro que representa el dinero como fuente de influencias en beneficio de intereses particulares por encima del bienestar general, etcétera”.

La ley 26.215, del año 2007, fue aprobada en esta Cámara sin discusión y con la única disidencia del senador Giustiniani, plasmada en una inserción en la que defendió con vehemencia la necesidad de que el financiamiento fuera únicamente público, como manera de garantizar la equidad e igualdad en la competencia

electoral. Esta norma muy importante tuvo la bondad de establecer mecanismos de control de los fondos recibidos y de formalizar los modos y formas de los aportes privados, la contratación de publicidad de campañas únicamente a través de los representantes políticos, y la obligación de los proveedores de bienes o servicios útiles para las campañas electorales de entregar a la Justicia toda la información que se les requiriera sin restricciones, entre muchas otras.

En el año 2009 la ley 26.571, sobre primarias abiertas, incorporó el concepto de “modulo electoral”, la prohibición de contratar espacios de publicidad privada y la de recibir aportes de personas jurídicas para las campañas. Esto inició la costumbre no prevista en la ley de recibir aportes de personal directivo de empresas y otras personas jurídicas de dinero en efectivo, aun cuando la misma norma había establecido la bancarización de aportes. También estableció un límite temporal de las campañas y de los recursos que se pueden destinar a las mismas; registro de empresas de sondeo y encuestas de opinión; presentación de estados contables, apertura de cuentas especiales, carácter público de la información financiera; un régimen sancionatorio para los casos de violación de las prohibiciones de recibir aportes que van desde multas hasta la pérdida de aportes públicos y otras de carácter personal como la inhabilitación para ejercer cargos públicos de aquellos dirigentes responsables de las finanzas de partidos y campañas; criterios de distribución de los aportes públicos directos e indirectos referidos al uso de pautas en medios de comunicación del sistema federal de medios audiovisuales; impresión de boletas electorales en función de los electores registrados por distrito, entre muchas otras normas. No podemos dejar de lado que esta ley que además estableció las primarias abiertas y que fue sancionada con el solo apoyo de los legisladores oficialistas de entonces, con el único objetivo de obtener créditos electorales inmediatos. En el debate en esta Cámara, la discusión se refirió exclusivamente al nuevo sistema electoral y no hubo casi mención a las modificaciones de financiamiento de campañas electorales, a excepción de la senadora Estensoro que, como en el caso del senador Giustiniani planteó la financiación pública.

Sin embargo, así como en las elecciones de 2007 bajo el paraguas de la ley 26.215 hubo denuncias sobre aportes de empresas, sobre todo farmacéuticas, ligadas al tráfico de efedrina, la modificación en el año 2009 (ley 26.571) prohibió el aporte de personas jurídicas y dio lugar a mayores escándalos referidos a aportes de directivos de empresas a “título individual”. (Nota de *El País* de España “La financiación electoral, un agujero negro en la Argentina”, del 28 de junio de 2017 en *El País online*).

Más tarde la realidad volvió a golpear a la clase política, en la llamada “causa de los cuadernos”, donde vuelve a surgir el financiamiento espurio: “Según dichos de arrepentidos del caso ‘cuadernos’, parte del dinero obtenido del pago de sobornos por parte de

1. Ver el Apéndice.

empresas vinculadas a la obra pública en el kirchnerismo se destinó a financiar actividades y campañas políticas” (diario *Clarín*).

A fin de corregir los defectos de las normas actuales y de propender a lograr un mayor control de los fondos públicos y aportes privados en las campañas electorales, varias iniciativas fueron presentadas, la mayoría han coincidido.

En relación con los dictámenes que hoy la Cámara se encuentra tratando, debo decir que se trabajó con ahínco para lograr un texto único, y casi se consiguió. En la Comisión de Asuntos Constitucionales hubo acuerdo en la mayoría de las normas insertas en el texto, que además fue revisado detalladamente, incorporando el aporte de personas jurídicas, asegurando la trazabilidad y origen de los aportes, la disminución de los plazos judiciales de revisión, estableciendo definitivamente la bancarización de aportes, modificando el uso de las pautas en medios audiovisuales en las campañas electorales, regulando la publicidad en las redes sociales y plataformas de Internet, modificando la responsabilidad de los representantes de los partidos y el régimen sancionatorio, entre otras medidas. También amplía el presupuesto y la cantidad de integrantes del Cuerpo de Auditores Contables de la Cámara Nacional Electoral, conforme el pedido de los jueces que participaron activamente en las reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El punto de desacuerdo fue la posibilidad de permitir a las asociaciones profesionales y sindicatos aportar a las campañas electorales, utilizando el mismo criterio que el que se emplea para permitir el aporte de empresas, y debemos decir enfáticamente que no es el mismo caso.

Una empresa tiene objetivos definidos, la ley no impide el aporte pero le pone límites y obliga a la publicidad de dicho aporte, así como la reversibilidad en algunos casos. El objetivo es claro, que la ciudadanía pueda saber qué empresas aportan a qué partidos o alianzas. Esta información es clave para el elector que se transformará en custodio de las propuestas de dichos partidos y analizará la vulnerabilidad de sus acciones a la vista de un aporte que ya no se guardará bajo la alfombra.

En el caso de los sindicatos no está en sus objetivos influir frente al poder político a través del dinero, sus afiliados nada pueden hacer para torcer el destino de un aporte hacia un partido u otro. Se pone en tela de juicio las preferencias políticas de las conducciones frente a las posibles y diferentes preferencias de los trabajadores. Vulnera el objetivo básico de los sindicatos y compromete el accionar de los mismos al mezclarlos con el gobierno de turno. La prohibición que sostenemos respecto de los sindicatos rige en 45 países en el mundo bajo el mismo fundamento, evitar situaciones de cohecho anticipado y captura por parte de intereses sectoriales, esto surge de un informe de CIPECC, ONG

que fue invitada a exponer en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La Organización de Estados Americanos, en un trabajo presentado en el año 2011, rescata las mejoras en la región respecto a las medidas tendientes a evitar el fraude electoral, pero respecto del financiamiento de campañas sostuvo: “el efectivo cumplimiento de las regulaciones sobre financiamiento político es un factor relevante para el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones y los procesos electorales, los desarrollos recientes en América Latina siguen apuntando a la necesidad de afrontar los desafíos de aplicación efectiva de los marcos regulatorios y de mecanismos de control y aplicación de sanciones, incluyendo el constante riesgo de la infiltración de dinero proveniente del crimen organizado transnacional en las campañas y el uso indebido de los recursos del Estado para financiar actividades políticas”. Con la sanción de esta norma nos acercaremos aún más a la recomendación de la OEA.

Finalmente, la Argentina como siempre ha sido pionera en dictar normas modernas y de vanguardia, no ha sido tan prolija en el cumplimiento de las mismas, y el caso del financiamiento de partidos políticos y campañas electorales no es la excepción. Podríamos haber hecho más, pero esta es una norma de naturaleza dinámica que necesita de corrección permanente. Es muy probable que en dos años más volvamos a abocarnos a adecuar la norma, ya sea para flexibilizarla o hacerla más rígida, todo va a depender de su aplicación en las próximas elecciones nacionales.

Nuestra responsabilidad en este caso es doble, como legisladores y como dirigentes políticos debemos demostrar a nuestro electorado que la transparencia en las elecciones y en los actos de gobierno, se han instalado definitivamente en la Argentina.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA BRIZUELA Y DORIA

Señora presidente:

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522, establece a los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual la obligatoriedad de cumplir los requisitos establecidos en materia de publicidad política y ceder espacios en su programación a los partidos políticos durante las campañas electorales.

El dictamen que estamos discutiendo dispone en la modificación del artículo 43 quáter: “De acuerdo a lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522, los servicios de comunicación y de televisión por suscripción están obligados a ceder en forma gratuita el 5 por ciento del tiempo total de programación para fines electorales. A partir del año 2020, del porcentaje mencionado en el párrafo anterior, la mitad será cedida a título gratuito y la otra mitad será considerada pago a cuenta de impuestos nacionales”.

Esta cesión gratuita forma parte de las obligaciones de los licenciatarios que utilizan el espectro radioeléctrico, ya que este no es propiedad de los medios de comunicación, toda vez que ellos son meros licenciatarios del mismo. La cesión de espacios constituye una carga pública impuesta por las leyes 26.215, 26.522 y 26.571 a los operadores de los servicios de comunicación audiovisual en aras de garantizar el libre debate de ideas y propuestas políticas que se encuentra entre los presupuestos de un sistema democrático en efectiva vigencia, colocando a los distintos espacios políticos en pie de igualdad.

Decimos que es una carga pública porque es impuesta por ley del Congreso, es temporaria, es igual para todos lo que están en idéntica situación, es intransferible, es gratuita, corresponde a un servicio concreto y responde a situaciones especiales.

Como contraprestación del lucro que obtienen los licenciatarios se les imponen estas cargas publicas porque se originan por situaciones especiales (campañas electorales) que hacen al sistema republicano y a los derechos políticos.

Por último, cabe recordar que durante la vigencia de las leyes 22.285 –artículo 72, inciso g)– y 25.600 se dictaron las resoluciones del Ministerio del Interior 641/1995, 2.013/1999, 288/2003, 74/2003, 90/2003, 1.551/2005, 2.023/2007, 285/2009 disposición conjunta 5/2009; el ex COMFER 425/1991, 939/1995, 619/1999, 1.523/2001, 352/ 2003, 483/2003, 786/2003, 789/2003, 1.207/2005 y 12/2007; de la Dirección Nacional Electoral disposiciones 5/2001; 2/2003; 3/2003; 7/2003; 8/2003; 10/2003; 11/2003; 12/2003; 10/2005; 12, 13, 14, 15 y 16/2007; entre otras; y estas fueron cumplidas por los licenciatarios durante años sin reclamos ni impugnaciones. Por otro lado, tampoco se colige un daño directo, en tanto los medios siguen manteniendo igual tiempo comercializable para publicidad.

Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a votar en general...

Sr. Mera. – Pido la palabra, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Mera: le propongo que votemos en general y después le doy la palabra para que usted me diga cómo vamos a proceder en particular.

Sr. Mera. – Bueno.

Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a votar primero en general en forma electrónica.

Aclaro que estamos votando el dictamen de mayoría. De todas maneras, requiere mayoría especial, así que los de la minoría también se supone que lo van a acompañar.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden del Día 41, en general: afirmativo, 47 votos; negativo, 2 votos; cero abstenciones.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra el senador Mera para indicarnos cómo vamos a votar en particular.

Sr. Mera. – Gracias presidente. En el transcurso del debate hemos alcanzado consenso en algunas modificaciones, que obran en Secretaría.

Una tiene que ver con una reubicación de un capítulo vinculado a la publicidad digital. Tendríamos que ubicarlo en el capítulo III ter, tal como lo tiene Secretaría y hemos consensuado los distintos bloques, para lo cual debiéramos autorizar al secretario parlamentario a que reenumere el articulado subsiguiente.

El otro consenso arribado es respecto de la rendición de cuentas que debe hacerse por el pago de la pauta digital, para habilitar a la Cámara Electoral que reglamente su respectiva acreditación.

Y el último sería un agregado con relación a las PASO, ley 26.571, artículo 32, relativo al responsable económico financiero. Antes teníamos una campaña de treinta días. La ley en ese artículo preveía que cuarenta días antes esté el responsable económico financiero. Entre los cambios que tenemos hemos extendido ese plazo de campaña, por lo cual para respetar el espíritu de la ley debiéramos poner que el responsable económico financiero deba presentarse cuarenta y ocho horas antes de iniciada la campaña.

En esos tres puntos estamos de acuerdo. Si todos lo ratifican, dejaríamos separado el artículo 5°, sobre el que tenemos disenso respecto del aporte sindical, y votaríamos todo el articulado en particular, salvo el artículo 5° del Orden del Día, que se votará a posteriori.

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra el senador Braillard Poccard.

Sr. Braillard Poccard. – Simplemente es para que se registre mi voto positivo, por favor.

1. Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Pinedo). – En la votación en general.

Sr. Secretario (Tunessi). – Son 48 votos positivos en general, entonces.

Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Mirkin, ¿usted quiere hacer alguna propuesta diferente en particular?

Sra. Mirkin. – Simplemente que cuando se vote en particular, voy a votar negativamente el artículo 9°.

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia del voto negativo de la senadora Mirkin en el artículo 9°.

Senadora Fiore Viñuales.

Sra. Fiore Viñuales. – Muchas gracias, señor presidente.

Simplemente para que quede constancia de mi voto negativo, dentro del artículo 24, el artículo 44 nonies.

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia de su voto, señora senadora.

Vamos a hacer lo siguiente, señor miembro informante: le voy a pedir al secretario que lea los textos de los artículos que se están agregando y después votamos en particular todos los artículos juntos menos el artículo 5°. Después vemos cómo seguimos con el artículo 5°.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se agrega el segundo párrafo del artículo 44 septies, dentro del artículo 24 con el siguiente texto: “La Cámara Nacional Electoral reglamentará la normativa tendiente a garantizar la rendición de cuentas de este tipo de publicidad por parte de las agrupaciones políticas participantes, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de esta contratación”.

El segundo agregado es como artículo 39: “Modifícase el último párrafo del artículo 32 de la ley 26.571, el que quedará redactado de la siguiente manera: Las agrupaciones políticas cuarenta y ocho horas antes del inicio de la campaña electoral de las elecciones primarias designarán un responsable económico financiero ante la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda”.

Sr. Presidente (Pinedo). – De la manera mocionada por el miembro informante y con estos agregados, se van a votar por medios

electrónicos en particular todos los artículos, menos el artículo 5°.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día N° 41, en particular, excepto el artículo 5°, hay 47 votos afirmativos; negativos, 2 votos y cero abstenciones.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sr. Presidente (Pinedo). – En el artículo 5° vamos a votar en primer lugar, como corresponde, el dictamen en mayoría que, para que quede claro, no incluye la prohibición de los aportes sindicales.

Necesita 37 votos para ser aprobado. De manera tal que si no hay número suficiente, voy a someter a votación el dictamen en minoría. Si hay número suficiente queda sancionado el de la mayoría.

Vamos a votar, en primer lugar, el dictamen en mayoría. La Presidencia anuncia que se va a abstener.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Dictamen en mayoría: afirmativo, 25 votos; 23 votos negativos; una abstención. No resulta aprobado.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.²

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Frente a la importancia que tiene la ley, vamos a votar positivamente el artículo de la minoría, para que pueda haber ley de financiamiento de los partidos políticos y la Cámara de Diputados la trate.

Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar el artículo 5° del dictamen en minoría.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículo 5°, dictamen en minoría, en particular: afirmativo, 42 votos; negativo, 7 votos y cero abstenciones.

1. Ver el Apéndice.

2. Ver el Apéndice.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sr. Presidente (Pinedo). – Resultado aprobado. Se comunica a la Cámara de Diputados de la Nación.²

25

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CON LAS MUJERES (O.D. Nº 1.019/18 y O.D. Nº 1.024/18)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde el tratamiento en conjunto de los órdenes del día que por Secretaría se enunciarán.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se trata del Orden del Día Nº 1.019. Comisiones Banca de la Mujer y de Población y Desarrollo Humano. Dictamen en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (C.D.-32/17).

Y el Orden del Día Nº 1.024. Comisiones de Banca de la Mujer y de Población y Desarrollo Humano. Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora González y otros por el que se modifica la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. (S.-587/18).

Sr. Presidente (Pinedo). – En consideración. Tiene la palabra la senadora Durango.

Sra. Durango. – La pidió primero la senadora González.

Sr. Presidente (Pinedo). – La senadora González tiene la palabra.

Sra. González, María Teresa Margarita. – Buenas noches, señor presidente.

Realmente muy conformes desde la Banca de la Mujer por todo el trabajo realizado para poder llegar a un consenso con este proyecto de ley.

El principal objetivo del mismo es la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales; una nueva modalidad de violencia. Pretende visibilizar una problemática que se ha sedi-

mentado y naturalizado, principalmente, en los medios de transporte público, ámbito en el que el proyecto busca legislar.

Desde sus orígenes, el concepto de acoso sexual estuvo muy ligado al ámbito laboral. Sin embargo, actualmente puede ocurrir en una variedad de circunstancias y lugares.

En nuestro país se encuentra especialmente vinculado a los espacios públicos y también al transporte. En estos espacios se concentran una serie de modalidades de acoso sexual y es así que se considera de especial relevancia ampliar el espacio de ocurrencia de estas conductas, haciendo mención específica en los distintos medios públicos, incluidos también los de transporte.

Es importante destacar que se registran 160 denuncias de casos de acoso y abusos diarios en medios de transporte público; y otros tantos en distintos espacios públicos.

Asimismo, es importante también destacar que esta ley va a cubrir y a proteger a un sinnúmero de mujeres que, en este momento, realmente están carentes de este derecho, que vamos a tener –si Dios quiere y todas las compañeras aquí lo votan– a partir de este momento.

Quisiera destacar este proyecto de ley, ya que realmente es un avance muy importante para el género y cubre un espacio muy importante que, hasta este momento, no lo teníamos. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora senadora.

Senadora Durango, creo que tiene la palabra.

Sra. Durango. – Iba a cerrar como presidenta de la Banca.

Sr. Presidente (Pinedo). – Ah, iba a cerrar, no, no, no...

Senadora González: tiene la palabra.

Sra. González, Nancy Susana. – Gracias, señor presidente.

Me voy a referir específicamente al proyecto de violencia política. Realmente hoy puedo decir que me invade un gran sentimiento al poder estar tratando este proyecto. Es una iniciativa que presentamos allá por 2016, que tuvo un gran recorrido y un gran debate dentro de esta Cámara. Realmente tengo que agradecerles a las integrantes de las comisiones de Población

1. Ver el Apéndice.

2. Ver el Apéndice.

26 APÉNDICE

I CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Senado de la Nación

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abril de 2019

Señora
Presidenta del
Honorable Senado de la Nación
Lic. Gabriela Michetti
Presenta

Tenemos el agrado de dirigimos a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 19 del Reglamento del H.S.N., la realización de un Sesión Especial el día martes 16 de Abril del corriente año, para dar tratamiento a los siguientes puntos:

Cumplimentar el artículo 22 del Reglamento del H. Senado para dar cuenta a los Mensajes enviados por el Poder Ejecutivo, solicitando pedido de acuerdos y retiros de mensajes.


Y asimismo, considerar los siguientes temas:


- Sesión de Acuerdos (OD 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y Anexo, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72/19)
- Dictamen en los Proyectos de Ley de varios señores senadores por el que se modifica el Régimen de Financiamiento de los Partidos Políticos S-3898, 4011, 3727, 3730/18 (OD 41/19 y Anexos)
- Dictamen en el Mensaje 78/19 y Proyecto de Ley por el cual se proroga por el término de 365 días la Emergencia Económica, Productiva, Financiera y Social a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa- ley 27.354- y s/m. PE 82/19 (OD 134/19)
- Dictamen en el proyecto de ley senador Bultrich, por el que se solicita la conciliación de obligaciones a cooperativas de trabajo, Expte S-4088/19 (OD 4/19)
- Proyecto de Ley enviado en revisión por el que se modifica la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (CD 32/17) (OD 1018/18)
- S-587/18 Gonzalez y otros Proyecto de Ley por el que se modifica la ley de Protección Integral para Prevenir Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (OD 1024/18)

Sin otro particular la saludamos a usted atentamente


OSCAR ANIBAL CASTILLO
SENADOR NACIONAL

OSCAR ANIBAL CASTILLO
SENADOR DE LA NACIÓN


DÑA. INES GRAZIELLA Y SORIA
SENADORA NACIONAL
PROVINCIA DE LA RIOJA


HUMBERTO SCHIAVONI
SENADOR NACIONAL


JULIO CESAR C. CORCOS
SENADOR NACIONAL

*Presidencia
del
Senado de la Nación*

DPP- 28 /19

Buenos Aires, 12 de abril de 2019.

VISTO:

la solicitud formulada por varios señores Senadores para que se convoque a sesión pública especial, y

CONSIDERANDO:

que dicho pedido se encuadra en las disposiciones reglamentarias en vigencia,

POR ELLO:

LA PRESIDENTA DEL H. SENADO DE LA NACIÓN,
D E C R E T A :

Artículo 1º- Por Secretaría citese a las/los señoras/es Senadoras/es para celebrar sesión pública especial para el día martes 16 de abril del corriente, a las 13.00 horas, a efectos de considerar los siguientes temas:

- Complimentar el artículo 22 del Reglamento del H. Senado para dar cuenta a los Mensajes enviados por el Poder Ejecutivo, solicitando pedidos de acuerdos y retiro de mensajes.

Y asimismo considerar los siguientes temas:

- Ordenes del día: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y Anexo, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72.
- Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se prorroga la Emergencia Económica, Productiva, Financiera y Social a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa (Orden del Día 134/19) (PE-82/19)



balh
E. Caligaris

Senado de la Nación

DPP-28/19

- Dictamen en los proyectos de ley de varios señores Senadores, por el que se modifica el Régimen de Financiamiento de los Partidos Políticos. (Orden del Día 41/19, Anexo y Anexo I) (S-3698, 3727, 3730 y 4382/18)
- Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se modifica la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. (Orden del Día 1019/18) (CD-32/17).
- Dictamen en el proyecto de ley de la señora Senadora N. GONZALEZ y otros, por el que se modifica la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer. (Orden del Día 1024/18) (S-587/18)
- Dictamen en el proyecto de ley del señor Senador BULLRICH, por el que se solicita la condonación de obligaciones a cooperativas de trabajo. (Orden del Día 4/19) (S-4088/18).

Art. 2º- Dese cuenta oportunamente al H. Senado.

Art. 3º- Comuníquese.



L. L. H.
El Calcyro

Proyecto: ORDEN DEL DÍA 41/19. ANEXO Y ANEXO I



Descripción: SE VOTA EN GENERAL

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 16/04/2019 19:51:17

Acta : 4

Mayoría: MAS 1/2

MIEMBROS DEL CUERPO

Miembros del cuerpo: 72

Votación: NOMINAL

Presidente: Pinedo, Federico

Presentes: 49 Ausentes: 23 AMN: 37

Afirmativos:	47
Negativos:	2
Abstenciones:	0
Resultado:	AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Aguilar, Eduardo Alberto	SI	52	37. Lovera, Daniel Anibal	SI	5
2. Almirón, Ana Claudia	AUSENTE		38. Luenzo, Alfredo Héctor	AUSENTE	
3. Alperovich, José Jorge	AUSENTE		39. Marino, Juan Carlos	SI	20
4. Basualdo, Roberto Gustavo	SI	64	40. Martínez, Ernesto Félix	SI	68
5. Blas, Ines I.	SI	11	41. Martínez, Julio	SI	44
6. Boyadjian, Miriam Ruth	SI	70	42. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
7. Brailard Pocard, Pedro	AUSENTE		43. Menem, Carlos Saúl	AUSENTE	
8. Brizuela y Doria, Ines	SI	43	44. Mera, Dalmacio	SI	17
9. Bullrich, Esteban	SI	6	45. Mirkin, Beatriz Graciela	SI	32
10. Caserio, Carlos Alberto	SI	30	46. Montenegro, Gerardo Antonio	AUSENTE	
11. Castillo, Oscar Anibal	SI	8	47. Odarca, Maria Magdalena	NO	71
12. Catalán Magni, Julio César	SI	54	48. Ojeda, José Anatolio	SI	34
13. Catalfamo, Eugenia	AUSENTE		49. Pais, Juan Mario	SI	33
14. Closs, Maurice	SI	9	50. Pereyra, Guillermo Juan	AUSENTE	
15. Cobos, Julio	SI	23	51. Perotti, Omar Angel	AUSENTE	
16. Costa, Eduardo	SI	46	52. Petcoff Nardenoff, Luis Carlos	SI	21
17. Crexell, Carmen Lucila	SI	63	53. Pichetto, Miguel Ángel	SI	14
18. De Angeli, Alfredo Luis	AUSENTE		54. Pilati Vergara, Maria Ines P. E.	AUSENTE	
19. Durango, Norma Haydee	SI	4	55. Pinedo, Federico	SI	Presidente
20. Elias de Perez, Silvia Beatriz	SI	42	56. Poggi, Claudio	SI	25
21. Espinola, Carlos Mauricio	SI	31	57. Porcel de Riccobelli, Blanca	AUSENTE	
22. Fernández de Kirchner, Cristina	AUSENTE		58. Reutemann, Carlos Alberto	AUSENTE	
23. Fernández Sagasti, Anahel	AUSENTE		59. Rodríguez Machado, Laura Elena	SI	26
24. Fiad, Mario R.	SI	24	60. Rodríguez Saá, Adolfo	AUSENTE	
25. Fiore Vinales, Maria C. del Valle	SI	40	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Fuentes, Marcelo Jorge	AUSENTE		62. Rozas, Ángel	SI	22
27. García Larraburu, Silvina Marcela	AUSENTE		63. Sacnun, María de los Angeles	AUSENTE	
28. Giacoppo, Silvia del Rosario	AUSENTE		64. Schiavoni, Humberto	SI	48
29. González, Gladys	SI	47	65. Shopek, Guillermo	SI	2
30. González, Maria Teresa Margarita	SI	18	66. Solanas, Fernando Ezequiel	NO	72
31. González, Nancy Susana	AUSENTE		67. Solari Quintana, Magdalena	SI	10
32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel	SI	13	68. Tapá, María Bélen	SI	66
33. Ianni, Ana Maria	AUSENTE		69. Uñac, José Ruben	SI	28
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa	SI	49	70. Urtubey, Rodolfo Julio	SI	15
35. Kunath, Sigrid Elisabeth	SI	12	71. Varela, Marta	AUSENTE	
36. López Valverde, Cristina	SI	53	72. Verasay, Pamela	SI	45

Observaciones: El Senador Brailard Pocard, Pedro con signa su voto "positivo".

Proyecto: ORDEN DEL DÍA 41/19, ANEXO Y ANEXO I

Descripción: SE VOTA EN PARTICULAR



Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 16/04/2019 19:56:53

Acta : 5

Mayoría: MAS 1/2

MIEMBROS DEL CUERPO

Miembros del cuerpo: 72

Votación: NOMINAL

Presidente: Pinedo, Federico

Presentes: 49 Ausentes: 23 AMN: 37

Afirmativos: 47
 Negativos: 2
 Abstenciones: 0
 Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Aguilar, Eduardo Alberto	SI	52	37. Lovera, Daniel Anibal	SI	5
2. Almirón, Ana Claudia	AUSENTE		38. Luenzo, Alfredo Héctor	AUSENTE	
3. Alperovich, José Jorge	AUSENTE		39. Marino, Juan Carlos	SI	20
4. Basualdo, Roberto Gustavo	SI	64	40. Martínez, Ernesto Félix	SI	68
5. Blas, Ines I.	SI	11	41. Martínez, Julio	SI	44
6. Boyadjian, Miriam Ruth	SI	70	42. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
7. Brailard Poccari, Pedro	SI	65	43. Menem, Carlos Saul	AUSENTE	
8. Brizuela y Doria, Ines	SI	43	44. Mera, Dalmacio	SI	17
9. Bullich, Esteban	SI	6	45. Mirkin, Beatriz Graciela	SI	32
10. Caserio, Carlos Alberto	SI	30	46. Montenegro, Gerardo Antenor	AUSENTE	
11. Castillo, Oscar Anibal	SI	8	47. Odarca, María Magalena	NO	71
12. Catalán Magni, Julio César	SI	54	48. Ojeda, José Anatolio	SI	34
13. Catafano, Eugenia	AUSENTE		49. Pais, Juan Mano	SI	33
14. Closs, Maurice	SI	9	50. Pereyra, Guillermo Juan	AUSENTE	
15. Cobos, Julio	SI	23	51. Perotti, Omar Angel	AUSENTE	
16. Costa, Eduardo	SI	46	52. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos	SI	21
17. Crexell, Carmen Lucila	SI	63	53. Pichetto, Miguel Ángel	SI	14
18. De Angeli, Alfredo Luis	AUSENTE		54. Platt Vergara, María Inés P. E.	AUSENTE	
19. Durango, Norma Haydee	SI	4	55. Pinedo, Federico	SI	Presidente
20. Elías de Pérez, Silvia Beatriz	SI	42	56. Poggi, Claudio	AUSENTE	
21. Espinola, Carlos Mauricio	SI	31	57. Porcel de Riccobelli, Blanca	AUSENTE	
22. Fernández de Kirchier, Cristina	AUSENTE		58. Reutemann, Carlos Alberto	AUSENTE	
23. Fernández Sagasti, Anahel	AUSENTE		59. Rodríguez Machado, Laura Elena	SI	26
24. Fiad, Mario R.	SI	24	60. Rodríguez Saá, Adolfo	AUSENTE	
25. Fiore Viñuales, María C. del Valle	SI	40	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Fuentes, Marcelo Jorge	AUSENTE		62. Rozas, Ángel	SI	22
27. García Larraburu, Silvina Marcela	AUSENTE		63. Sacconi, María de los Angeles	AUSENTE	
28. Giacoppo, Silvia del Rosario	AUSENTE		64. Schiavoni, Humberto	SI	48
29. González, Gladys	SI	47	65. Snopce, Guillermo	SI	2
30. González, María Teresa Margarita	SI	18	66. Solanas, Fernando Ezequiel	NO	72
31. González, Nancy Susana	AUSENTE		67. Solar Quintana, Magdalena	SI	10
32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel	SI	13	68. Tapia, María Belén	SI	66
33. Ianni, Ana María	AUSENTE		69. Uñac, José Rubén	SI	28
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa	SI	49	70. Urtubey, Rodolfo Julio	SI	15
35. Kunath, Sigrid Elisabeth	SI	12	71. Varela, María	AUSENTE	
36. López Valverde, Cristina	SI	53	72. Verasay, Pamela	SI	45

Observaciones: Se vota en particular excepto el Art. 5º.

Se vota el con modificaciones.

Senadora Mirkin, Beatriz Graciela consigna su voto "negativo" al Art. 9º.

Senadora Fiore Viñuales, María C. del Valle consigna su voto "negativo" al Art. 24º (Art. 44º no es)

Proyecto: ORDEN DEL DÍA 41/19. ANEXO Y ANEXO I ART5

Descripción: SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 16/04/2019 19:58:44

Acta : 8

Mayoría: MAS 1/2

MIEMBROS DEL CUERPO

Miembros del cuerpo: 72

Votación: NOMINAL

Presidente: Pinedo, Federico

Presentes: 49 **Ausentes:** 23 **AMN:** 37



Afirmativos: 25
Negativos: 23
Abstenciones: 1
Resultado: NEGATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Aguilar, Eduardo Alberto	SI	52	37. Lovera, Daniel Anibal	SI	5
2. Almirón, Ana Claudia	AUSENTE		38. Luenzo, Alfredo Héctor	AUSENTE	
3. Alperovich, José Jorge	AUSENTE		39. Marino, Juan Carlos	NO	20
4. Basualdo, Roberto Gustavo	NO	64	40. Martínez, Ernesto Félix	NO	68
5. Blas, Ines I.	SI	11	41. Martínez, Julio	NO	44
6. Boyadjian, Miriam Ruth	NO	70	42. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
7. Brailhard Poccard, Pedro	NO	65	43. Merem, Carlos Saúl	AUSENTE	
8. Brizuela y Doria, Ines	NO	43	44. Mera, Dalmacio	SI	17
9. Bullrich, Esteban	NO	6	45. Mirkin, Beatriz Graciela	SI	32
10. Caserio, Carlos Alberto	SI	30	46. Montenegro, Gerardo Antenor	AUSENTE	
11. Castillo, Oscar Anibal	NO	8	47. Odarca, María Magdalena	NO	71
12. Catalán Magni, Julio César	SI	54	48. Ojeda, José Anatolio	SI	34
13. Catalfamo, Eugenia	AUSENTE		49. Pais, Juan Mario	SI	33
14. Closs, Maurice	SI	9	50. Pereyra, Guillermo Juan	AUSENTE	
15. Cobos, Julio	NO	23	51. Perotti, Omar Angel	AUSENTE	
16. Costa, Eduardo	NO	46	52. Petcoff Nardenoff, Luis Carlos	NO	21
17. Crexell, Carmen Lucila	SI	63	53. Pichetto, Miguel Ángel	SI	14
18. De Angeli, Alfredo Luis	AUSENTE		54. Pilati Vergara, María Inés P. E.	AUSENTE	
19. Durango, Norma Haydee	SI	4	55. Pinedo, Federico	ABS.	Presidente
20. Elias de Perez, Silvia Beatriz	NO	42	56. Poggi, Claudio	AUSENTE	
21. Espinola, Carlos Mauricio	SI	31	57. Porcel de Riccobelli, Blanca	AUSENTE	
22. Fernández de Kirchner, Cristina	AUSENTE		58. Reutemann, Carlos Alberto	AUSENTE	
23. Fernández Sagasti, Anabel	AUSENTE		59. Rodríguez Machado, Laura Elena	NO	26
24. Fiad, Mario R.	NO	24	60. Rodríguez Saá, Adolfo	AUSENTE	
25. Fiore Vinales, María C. del Valle	SI	40	61. Romero, Juan Carlos	NO	19
26. Fuentes, Marcelo Jorge	AUSENTE		62. Rozas, Angel	NO	22
27. García Larraburu, Silvina Marcela	AUSENTE		63. Sacconi, María de los Angeles	AUSENTE	
28. Giacoppo, Silvia del Rosario	AUSENTE		64. Schiavoni, Humberto	NO	48
29. González, Gladys	NO	47	65. Snopce, Guillermo	SI	2
30. González, María Teresa Margarita	SI	18	66. Solanas, Fernando Ezequiel	NO	72
31. González, Nancy Susana	AUSENTE		67. Solari Quintana, Magdalena	SI	10
32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel	SI	13	68. Tapia, María Bélen	NO	66
33. Ianni, Ana Maria	AUSENTE		69. Uñac, José Rubén	SI	28
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa	SI	49	70. Urtubey, Rodolfo Julio	SI	15
35. Kunath, Signid Elisabeth	SI	12	71. Varela, María	AUSENTE	
36. López Valverde, Cristina	SI	53	72. Verasay, Pamela	NO	45

Observaciones: Corresponde a la votación del Art. 5º, OD 41 (dict. Mayoría).

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

Art. 3° – Modifíquese la ley 26.485, incorporando al artículo 5° el siguiente inciso:

6. *Política*: La que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones.

Art. 4° – Modifíquese la ley 26.485, incorporando al artículo 6° el siguiente inciso:

h) *Violencia pública-política contra las mujeres*: Aquella que, fundada en razones de género,

mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros.

Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

GABRIELA MICHETTI.

Juan P. Tunessi.

V

INSERCIONES

Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos, con posterioridad a la finalización de la sesión, son las siguientes:

1

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
LUENZO

Modificación al Régimen de Financiamiento de los Partidos Políticos (O.D. 41/19. Anexo y Anexo I)

Señora presidente:

Estamos hoy frente a una gran oportunidad en este Senado. La oportunidad de dar un debate amplio respecto a todos y cada uno de los desafíos y reformas que está necesitando nuestro sistema político.

Y con esto, me refiero a si estamos dispuestos los legisladores a discutir y aprobar una ley que sea propia del siglo XXI o si seguiremos atrapados en esta visión tradicional sobre el fenómeno electoral, que yo interpreto como arcaica.

Hemos visto, durante el tratamiento de esta iniciativa, una visión restrictiva sobre el proceso, a la que intentamos sortear desde la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que presido y a la que no se la ha escuchado pese a que, en definitiva, son los medios de comunicación tradicionales y las TIC'S quienes van a recibir gran parte de los aportes electorales a los que hacemos referencia con este proyecto.

Estamos atrapados en un debate “rengo”. Y digo “rengo” porque no estamos dando cuenta de la dinámi-

ca actual de las campañas electorales. Fenómeno que no solamente está sucediendo en la Argentina desde hace unos años, sino que se ve también en nuestros países hermanos de la Patria Grande y en todo el mundo. En algunos casos, con denuncias de irregularidades que restringieron el derecho de la ciudadanía a una información veraz.

Existe actualmente un sujeto nuevo en las campañas electorales que está entrando con fuerza y que no contaba ni este volumen ni con esta penetración social y cultural cuando hace una década este Congreso Nacional debatió la incorporación de las PASO, la financiación electoral y la asignación de espacios con equidad en los medios de comunicación.

Este sujeto al que hago referencia son las redes sociales, que en la actualidad están recibiendo un caudal cada vez mayor de aportes privados de las campañas electorales. Esto es porque, como actor de la dinámica electoral, las redes sociales tienen fuerte impacto sobre los climas de opinión imperante, por su capacidad para llevar un mensaje segmentado a públicos específicos; y en otros casos, porque algunos aprovechan esta herramienta para la difusión de las conocidas *fake news*, que en todo caso hay que llamarlas como lo que son: “campaña sucia”.

No obstante, señora presidente, las redes sociales no están presentes hoy aquí en esta ley. Una norma que, por este motivo, ya antes de nacer es anticuada.

Estamos convencidos de que podemos incorporar ya mismo a las redes sociales en la iniciativa, dado que hoy son integrales al financiamiento de las campañas políticas, a la coordinación de militantes, a la movilización de votantes y a la denuncia política.

Quisiera señalar algunos datos que ponen de manifiesto la relevancia de las redes sociales en los últimos tiempos.

En el año 2017 el 30 por ciento de la inversión electoral se hizo en internet; mientras que en 2011 solo fue del 4 por ciento. Es importante destacar que la inversión en internet se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Por otro lado, el principal destino de la inversión es Facebook, Twitter y Google, pero las razones sociales son de un grupo de agencias de publicidad. Amnistía Internacional y una investigación judicial ya advirtió sobre este tema y sobre el uso de *trolls*.

Estos datos revelan lo que acá ya todos estamos en conocimiento, que los partidos políticos utilizan cada vez más las redes como motor de comunicación política.

En primer lugar, por la versatilidad del medio que permite segmentar de formas mucho más precisas y ajustar campañas en función de intereses, o interacciones previas.

La segunda es que internet crece en toda la industria publicitaria; es lógico que la política acompañe eso porque lo que se busca es generar contactos publicitarios.

No obstante, hay un elemento vital que este debate ha dejado afuera: que gran parte de la conversación cívica en nuestras sociedades pasa por las redes sociales.

Señora presidente, las redes sociales juegan un papel muy importante en el debate público ya que le están dando voz al ciudadano, y esto es un elemento que está cambiando la dinámica electoral, pero fundamentalmente el debate sobre la agenda gubernamental.

Hasta hace unos años el ciudadano tenía un rol más pasivo. Es decir, si su vocación no era la participación activa en la vida de los partidos políticos o en entidades intermedias de representación, el rol que tenía era el de analizar las propuestas y asentar su voz con el voto cada 2 o 4 años.

En todo caso, la elección en muchos casos puede servir a los fines de plebiscito de gestión de los representantes lo que es la rendición de cuentas, pero lo que han hecho estas nuevas tecnologías es que el ciudadano tenga la oportunidad de expresar con instantaneidad el sentimiento o pensamiento hacia propuestas, candidatos o partidos políticos, lo que politólogos llaman *accountability vertical* del pueblo sobre los dirigentes.

En este sentido, las redes le permiten a la ciudadanía expresarse sobre sus representantes en el mismo momento que suceden los acontecimientos políticos. Sea tanto para brindar su apoyo como para remarcar que aquello que hacemos no es lo que esperan de nosotros. Y entonces se da un intenso debate, incluso, entre los propios usuarios, generando climas de opinión que posteriormente están impactando en los medios tradicionales.

Es a partir de esta dinámica que en los últimos años y frente a la instancia electoral las redes sociales avanzaron en su protagonismo y han cobrado relevancia en las estrategias electorales de los partidos políticos y sus candidatos, para propagar sus mensajes y llegar a la ciudadanía. Pero sobre todo han ganado espacio para acercarse a nuestros jóvenes, que tienen otra forma de informarse, otra forma de entender el acceso a la información y que se están mostrando cada vez más reacios a los medios tradicionales.

Es así que el público de la televisión se fue desgranando. El de la radio también. Y el de los diarios de papel está casi extinto. Las audiencias migraron. Las mediciones finales de 2018 muestran que más del 75 por ciento de los usuarios se informaron a través de sus dispositivos móviles y a partir de enlaces interactivos con redes sociales y el buscador Google.

Por otro lado, hoy en día las redes sociales en términos de estrategia de campaña son mucho más que complementarias. Sirven para ampliar los espacios audiovisuales.

Las transmisiones en vivo, por ejemplo, ocupan un lugar importante en los contenidos. Al saturar a los medios tradicionales con la publicidad cedida a las alianzas electorales, las redes serán un espacio de diferenciación de la campaña. Son un recurso clave: una gran vidriera para monitorear a los ciudadanos/votantes y alcanzarlos con distintas acciones. Las redes sociales generan comunidades autorreferenciales, a las que les cuesta convivir con el que piensa distinto. Acá lo identificamos con la famosa “grieta”, pero es una lógica cada vez más asentada entre distintas poblaciones, cuyos grupos se miran cada vez más a sí mismos, se vuelven más intolerantes.

La inversión del sector privado se trasladó junto con la audiencia hacia las redes sociales y la tan precisa segmentación que ofrece el universo de los algoritmos. A los medios les quedó la pauta oficial casi como única columna de ingresos, con los riesgos que eso implica. Sin embargo, dicho riesgo no es únicamente económico, a pesar de la reducción del 45 por ciento que sufrió el presupuesto en los últimos tres años.

Es por ello, señora presidente, que quiero dejar constancia de las modificaciones que propuse oportunamente durante el debate de esta iniciativa.

Entre ellas, me parece pertinente destacar: la creación de un registro de las cuentas de redes sociales, sitios de Internet y canales digitales de comunicación de parte de los candidatos, agrupaciones políticas y autoridades partidarias; establecer que la contratación de publicidad electoral en Internet y redes sociales u otras plataformas digitales solo podrá realizarse a través de las cuentas de los responsables económico-financieros de las listas de candidatos y de los partidos políticos; que la Cámara Nacional Electoral sea la autoridad que reglamente la normativa para la rendición de gastos; promover la instrumentación de campañas de concientización y formación cívica en entornos digitales

dentro de los 30 días antes de cada comicio para que la ciudadanía tome conciencia sobre un uso responsable y crítico de la información electoral disponible en Internet. Atendiendo especialmente a los jóvenes, nuevos votantes.

En este sentido, solicité que del total de la inversión en publicidad en plataformas digitales y redes sociales, al menos un 35 por ciento debería destinarse a sitios periodísticos digitales de producción nacional y al menos otro 25 por ciento a sitios periodísticos digitales de producción provincial.

En este orden de ideas, estamos convencidos, que contar con una normativa propia del siglo XXI implica necesariamente regular la publicidad en las plataformas digitales y en las redes sociales, entendiendo que el Estado, además de su función regulatoria, debe generar debate plural para generar conciencia ciudadana.

La importancia de distribuir la inversión publicitaria digital radica en la necesidad de regular de manera federal, a su vez de preservar las fuentes de trabajo de cientos de periodistas y productores que ven peligrar su futuro laboral. Quiero enfatizar esto: una ley de inversión de los partidos políticos en publicidad digital garantiza el federalismo.

Asimismo, debe entenderse como un aporte al desarrollo cultural del país. Sin reacción de la política, el deterioro de los mecanismos democráticos y sus formatos representativos es inevitable y podría ser incluso irreversible.

En esta coyuntura tan complicada que atraviesa la Argentina, la ciudadanía nos está pidiendo que la política dé un paso al frente y sancione una legislación moderna que le permita a nuestro sistema institucional, económico y social poder dar una respuesta adecuada a los desafíos que está presentando a nivel global el avance de la tecnología en cada uno de los campos que antes pertenecían a una sociedad analógica.

Convencido de que debe haber una ley acorde a nuestros tiempos, donde las redes sociales tienen un rol fundamental, dejo constancia de mis propuestas en relación con el tratamiento de esta iniciativa.

2

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VERASAY

**Modificación de la Ley de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(O.D. N° 1.019/18 y O.D. N° 1.024/18)**

Señora presidente:

En todas partes del mundo los reclamos por mayor equidad se expresan en todos los ámbitos de la vida social, sin importar las edades o las clases sociales, como respuesta a la violencia, el acoso sexual y la discriminación contra las mujeres.

Hemos avanzado mucho en materia de legislación con perspectiva de género, pero aún resta mucho recorrido por hacer. Las mujeres somos víctimas de prácticas machistas sutiles, naturalizadas en la vida cotidiana en todos los ámbitos, así como también, de grados extremos de violencia y femicidios.

En esta oportunidad estamos aquí reunidos para tratar dos problemáticas, entre tantas, que acechan a las mujeres: el acoso callejero y la violencia política.

El acoso callejero es la forma más naturalizada, invisibilizada y legitimada de violencia contra las mujeres. Es violencia de género, porque refleja en el espacio público la desigualdad de poder entre hombres y mujeres, cuando se toma el cuerpo de la mujer como un objeto sobre el que se cree que se puede opinar o tocar. La percepción de inseguridad en las mujeres tiene efectos en su subjetividad, provoca comportamientos dependientes que afectan su autonomía en las actividades cotidianas y el abandono de espacios públicos, por ejemplo: cruzar la calle, cambiar de recorrido para ir al trabajo, elegir otra vestimenta, no ir sola, cambiar de horario o lugar, o directamente evitar salir. Todas las personas tienen derecho a transitar libremente y con la confianza de no ser violentadas, independiente del contexto, la edad, la hora del día o el vestuario que ocupa la persona agredida, los derechos humanos no dependen ni se suspenden por detalles del entorno. No hay excusas ni justificaciones para el acoso sexual callejero. Es importante que la sociedad y, sobre todo, las mujeres conozcan esos límites y cómo defenderse, para que no sea interpretado como algo “normal” o “natural”.

La ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, define a la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”. Establece y define cinco tipos de violencia contra la mujer y seis modalidades. Los tipos de violencia son: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica. Las modalidades son: violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.

El primer paso para respetar los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social es conocer e incorporar las definiciones legales de violencia de género, para utilizarlas como herramientas a la hora de concientizar sobre el amplio abanico de acciones cotidianas que vulneran la capacidad de las mujeres de actuar libremente a la par de los hombres.

Es en este sentido que resulta fundamental visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres. Decimos que la violencia política es

aquella que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones.

La violencia contra las mujeres en política constituye un obstáculo que impide su plena participación en puestos de toma de decisión en diferentes espacios y refuerza roles tradicionales de género, socavando la calidad de la democracia, el desarrollo y el pleno disfrute de sus derechos humanos.

La Argentina está cambiando. Hoy comprendemos que en la igualdad se encuentran la paz, la dignidad, el respeto por la integridad del otro y la libertad. Hoy exigimos vivir en una sociedad libre de violencia, en la que las mujeres podamos ejercer nuestra autonomía plena.

3

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
TAPIA

**Modificación al Régimen de Financiamiento
de los Partidos Políticos
(O.D. N° 41/19. Anexo y Anexo I)**

Señora presidente:

Hoy nos toca tratar un tema clave e importante para el avance de la política en cuestiones de transparencia, como lo es el financiamiento de los partidos políticos.

¿Qué significa esto? Conocer el origen y destino de los fondos usados por los partidos políticos.

La ciudadanía nos está exigiendo mejorar y revelar cada uno de los actos que llevamos a cabo como funcionarios.

Y, como tales, sobre todo los elegidos por voto popular directo, somos corresponsables de lo que sucede puertas adentro de nuestros partidos.

Es por ello, colegas, que los invito a todos a reflexionar, no solo acerca del tipo de política que hoy llevamos adelante, sino también reexaminar nuestros partidos y/o agrupaciones políticas.

No podemos desconocer el funcionamiento de las instituciones en tiempos de elección, en los que se convierten en máquinas (electorales) generadoras de compromiso, que finalmente no logran perpetuarse en el tiempo.

Ahora bien, este proyecto propone, entre otras cosas:

- Un modelo mixto de financiamiento público y privado.

- La bancarización de los aportes a los partidos políticos, tanto para su desenvolvimiento institucional como para las campañas electorales, lo cual es un requerimiento de la CNE en su fallo 3.010/2002.

- Prohíbe los aportes de dinero en efectivo y establece específicamente los mecanismos habilitados (con la incorporación del artículo 16 bis).

- La incorporación de una plataforma en la que se mostrará, mediante una DD.JJ., la voluntad de los aportantes a determinado partido.

Además, incluye –lo cual considero un gran avance para los tiempos que estamos viviendo las mujeres y nuestras acciones concretas para obtener más espacios en todos los ámbitos en que nos desempeñamos–, específicamente el porcentaje dentro de los aportes destinados a capacitación, que deben usarse exclusivamente para la “formación, promoción y desarrollo de habilidades de liderazgo político de las mujeres dentro del partido”.

En conclusión, observo grandes avances con este proyecto y, si bien no voy a decir nada que no hayan dicho sus promotores, considero importante destacar la negativa a que participen los sindicatos.

Ellos son quienes manejan fondos públicos como agentes de retención que son, por lo que entonces, que sean quienes además administren y dirijan hacia determinados intereses o candidatos esos fondos públicos sería desnaturalizar su esencia.

El artículo 38 de la Constitución Nacional establece:

Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.

Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas.

El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes.

Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio.

El artículo 14 bis nos dice: “...Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo...”.

Esta garantía será virtual desde el momento en que un sindicato aporte a un partido determinado y, sobre todo, si no aporta al partido del gobierno de turno. Habrá, en los hechos, sindicatos amigos o enemigos en términos políticos.

Oñaderra dice al respecto:

Los partidos y los sindicatos son dos organizaciones diferentes que funcionan de forma diferente. Los partidos tienen legitimidad para hablar de lo que crean conveniente (incluso de empleo, negociación colectiva, salarios...), y no por eso tiene que presentarse a elecciones sindicales (porque su legitimidad la obtienen

en las elecciones al parlamento, o a la diputación, o al ayuntamiento...). Y los sindicatos tienen legitimidad de hablar de lo que crean conveniente (incluso de fiscalidad, grandes infraestructuras, prestaciones sociales, servicios públicos...), y no por hacerlo tienen que presentarse a elecciones como tampoco significa estar apoyando a un partido u otro. El reto es mucho más exigente que favorecer a un partido u otro. El reto es, como he dicho, construir un contrapoder colectivo (en alianza con otros movimientos sociales y con la economía social y solidaria) que consiga un mundo mejor, en el que la sostenibilidad de la vida se ponga en el centro. Eso no solo se consigue con que llegue un partido al gobierno.

Aceptar el aporte de los sindicatos es desconocer el rol en la democracia de cada institución.

Por último y a modo de reflexión, quienes hemos sido elegidos para ocupar estas bancas, tenemos hoy la oportunidad de aprobar esta reforma, que le permitirá a los ciudadanos conocer con claridad quiénes financian los partidos, quiénes financian la política, y estoy convencida de que esto significa un avance positivo en cuanto a la mejora de la calidad institucional de nuestra nación.

¡Ya es tiempo!

4

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DURANGO

**Modificación de la Ley de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(O.D. N° 1.019/18 y O.D. N° 1.024/18)**

Señora presidente:

Uno de los dos proyectos que hoy se somete a consideración tiene como antecedente el que fuera presentado en el año 2017 por la senadora Nancy González, y fue tratado por la anterior composición de las comisiones de Banca de la Mujer y de Población y Desarrollo Humano. Ya con la nueva composición el año pasado volvimos a darle tratamiento y obtuvo dictamen favorable, estando representadas en él todas las fuerzas políticas de este cuerpo.

Y al mismo tiempo tratamos también un proyecto en revisión de la Cámara de Diputados, el cual tiene por objeto, incorporar la violencia contra la mujer en el espacio público, dentro de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 26.485.

Esta manifestación de la voluntad política de todos los sectores es muestra cabal de la importancia que revisten estos temas para nuestra sociedad de hoy.

El primer proyecto al que hago mención modifica 3 artículos de la ley 26.485:

– En el artículo 2° del proyecto, se modifica el artículo 4° de dicha ley, incorporando la participación política de definición de la violencia contra las mujeres.

– En el artículo 3° se modifica el artículo 5°, incorporando un nuevo tipo de violencia contra las mujeres, y se refiere al tipo político de violencia como “La que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones”.

– En el artículo 4° se incorpora un nuevo inciso al artículo 6° de la ley, referido a las modalidades, es decir, a las formas en que se manifiestan los tipos de violencia contra las mujeres. Se trata de inciso “f bis” con la incorporación de la modalidad de violencia público-política.

En la medida en que el abordaje, la investigación y el estudio de la violencia contra las mujeres se va profundizando gracias a su visibilización, van surgiendo nuevas facetas tal vez no contempladas del todo en los orígenes de la legislación, o surgen nuevas prácticas o formas de violencia que requieren ser definidas y visibilizadas con la finalidad de adoptar las medidas y políticas públicas necesarias a fin de su erradicación. Este es el caso que hoy nos ocupa.

Como acertadamente expresa la autora en los fundamentos de su proyecto:

“Este fenómeno que se está dando de manera mundial, pero particularmente en Latinoamérica, es un tipo de violencia que se ejerce sobre mujeres no anónimas, que está dirigida específicamente a mujeres que han sido elegidas por el voto y/o el apoyo popular con el fin de ir en detrimento de su imagen, honor, decisiones, prácticas ciudadanas y derechos políticos. Por lo tanto, esta modalidad, además de vulnerar a las mujeres, afecta directamente a la calidad de nuestra democracia que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir, además de desalentar a muchas mujeres de adentrarse en la carrera y la participación política por recelo de ser víctimas de violencia, tanto ellas como sus familias. Esta problemática regional ya ha sido especialmente definida en organismos internacionales tales como el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Comisión Interamericana de Mujeres”. (Fundamentos Exp. S.-587/18 de autoría de la senadora Nancy González).

Lamentablemente aun hoy, todas las mujeres que ejercemos cargos públicos hemos sido víctimas de la desigualdad de condiciones en un medio que tradicionalmente se ha considerado masculino.

En el caso del proyecto que viene de la Cámara de Diputados, es el fruto del consenso entre las distintas fuerzas políticas y aquí en el Senado tuvo tratamiento a fines del año pasado en las comisiones de Banca de la Mujer y Población y Desarrollo Humano, que presido. Se tuvieron en consideración, además de la media san-